

**LIBERTAD:
LA CLAVE DE LA PROSPERIDAD**

1995

CARLOS ALBERTO MONTANER

Para Mario y Álvaro Vargas Llosa,
para Plinio Apuleyo Mendoza y
para Federico Jiménez Losantos,
por las batallas que hemos dado juntos.

ÍNDICE

PRIMERA PARTE: CIUDADANOS LIBRES EN DEMOCRACIA

I.	La palabra: entre la libertad y el totalitarismo	6
	Lengua y libertad	
	Palabra y coerción	
	La hipocresía y el miedo	
	La palabra y la muerte	
	Lenguaje y tabú	
	Lenguaje e incertidumbre	
	El Ministerio de la Verdad	
	La batalla definitiva	
	La palabra como vacuna	
II.	La sociedad tolerante y la libertad de expresión	16
	La vida y la palabra	
	La virtud de nuestra sociedad	
	La sociedad tolerante	
	Los métodos de la ética	
	El terreno del derecho	
	El dilema de los comunicadores	
III.	El miedo a la información	28
	La avalancha informativa	
	La televisión y la violencia	
	Comunicación y responsabilidad	
	Democracia y comunicación	
IV.	Periodismo y democracia	38
	Apoderarse de nuestro lenguaje	
	Definición de la democracia	
	La democracia y la aritmética	
	Información y decisiones	
	Los enemigos de la información	
V.	Empresarios y Políticos: La nueva rebelión de las masas	47
	Lealtad y eficiencia	
	El enorme motor averiado	
	La gran paradoja	
	Los partidos políticos del futuro	

VI.	América Latina: de la democracia oficial a la democracia real	55
	El sistema y la gente	
	La coherencia	
	La sociedad fragmentada	
	El cuarto poder	
	El fin de la segmentación	
VII.	La cultura de la paz	65
	Un pie forzado	
	Un problema más hondo que la guerra Ingeniería cultural	
	El pesimismo liberal El camino democrático	
VIII.	La democracia liberal: sus enemigos y sus posibilidades	74
	¿Por qué cambia la percepción política?	
	Las contradicciones del liberalismo	
	Una visión liberal	
	El Estado de Derecho	
	La necesidad de persuadir	

SEGUNDA PARTE: SOCIOLOGÍA DE LA RIQUEZA

IX	Tratado de la prosperidad	85
	Sicología de la riqueza	
	Los círculos de prosperidad	
	El marco sicológico	
	El marco cultural	
	El marco político	
	El marco jurídico	
	El marco económico	
X.	El socialismo, el mercado y la naturaleza humana	99
	Sicología individual y sistema político	
	El individuo, la libertad y la utopía	
	Schumpeter y la destrucción creadora	
	Mercado y nacionalismo	
	La batalla intelectual	
XI.	Iberoamérica: reflexiones para los hombres poco faber	111
	La complejidad creciente	
	Objetos y términos de intercambio	
	La secuencia de los cambios	
	Universidades y empresas	
	Las multinacionales	
	Las universidades	

XII. La América Latina posible	120
Lo que no nos gusta	
El gran modelo y lo que somos	
El ser y el hacer	
El capital humano	
Instrucción y educación	
Idiosincrasia y ética de la responsabilidad	
Estado de Derecho	
El papel de los empresarios	
XIII. Los impuestos: cuánto, cómo y para qué	132
Los límites del Estado de Bienestar	
Gravar el gasto, no la creación de riquezas	
Formar capital humano	
XIV. Progreso y Constitucionalismo: nacidos el uno para el otro	140
El paraíso perdido	
¿Dónde estamos?	
Tiempo y desarrollo	
La tarea más urgente	
Constitucionalismo y desarrollo	

I

LA PALABRA: ENTRE LA LIBERTAD Y EL TOTALITARISMO

Una de las polémicas más interesantes sobre el origen del lenguaje humano divide a los lingüistas entre quienes piensan que la facultad de hablar es innata al hombre, lo que ha dado lugar a la aparición inconexa de muchos lenguajes diferentes y quienes creen que se trata de un bien común conquistado tras un largo proceso evolutivo que generó una lengua única y primigenia, de la cual se derivan todos los idiomas de la humanidad. De ser cierta la última hipótesis, el español, el lenguaje de estas reflexiones, sería un vástago más de esa remota lengua madre de la que todos somos tributarios, lengua mantenida viva por el esfuerzo ininterrumpido de millares de generaciones sucesivas.

Probablemente esa disputa académica nunca podrá ser tajantemente resuelta. Hay argumentos en las dos direcciones de los que se pueden derivar conclusiones a un tiempo contradictorias pero convincentes.

Lengua y libertad

No obstante, hay algo en el fenómeno del habla sobre cuya naturaleza acaso convenga indagar con sumo cuidado. Sería ahora repetir un lugar común decir, por ejemplo, que es el habla, la capacidad de articular sonidos y de domar con ellos el pensamiento abstracto, lo que determina y hace posible la existencia humana; y es también una verdad evidente insistir en que el hombre es el producto de la palabra, de ahí que tal vez interese más señalar un aspecto mucho menos visitado: es la peculiar anatomía del lenguaje lo que permite que el hombre sea libre. La adquisición de la palabra, con sus múltiples variables, es el campo de adiestramiento para el ejercicio de la libertad. Esa libertad que se nos asegura constituye un derecho inalienable de toda persona viviente desde el momento en que nace, pero sin advertirnos que ese derecho previo no puede ejercerse sin la existencia del lenguaje y sin tomar en cuenta las limitaciones que se le impongan a nuestra capacidad de comunicación.

Es cierto que todo lenguaje se da dentro de unas reglas, es verdad que la palabra siempre está sujeta a una sintaxis, atada a una estructura interna, contenida por un molde al que tenemos que someternos para hacer inteligible nuestro mensaje, pero ese arnés deja siempre espacio para el juego imaginativo, para una variedad combinatoria que se perfila en función de las características del mundo que nos rodea. Sabemos, por ejemplo, que los esquimales tienen en su simple idioma 9 ó 10 matices del blanco, y también sabemos que los hombres de la selva, de todas las selvas, distinguen innumerables calidades del verde.

Porque la palabra nos es dada para escudriñar, para describir la realidad, pero también para matizarla, para inventarla, para adornarla. Se empieza a ser libre precisamente cuando se empieza a utilizar el lenguaje. Cuando escogemos el adjetivo hermoso en lugar de *bello* o de *magnífico*. Cuando seleccionamos la expresión *estoy triste* en lugar –por ejemplo– de *melancólico*. Cuando le damos determinado énfasis a una palabra para expresar nuestro enojo, nuestra ironía o un desdenoso punto de vista.

Con la adquisición de la palabra comenzamos a ejercer nuestra libertad. Aprendemos a ser libres en la selección del vocablo indicado para expresar nuestro yo, nuestra voluntad personal, nuestro estado de ánimo en un momento dado. Pero ese don y esa posibilidad de ser libres están sujetos a una necesidad de coherencia interna mínima entre lo que se cree y lo que se dice. En inglés se habla de *integrity*, y me parece que en español ésa también puede ser la palabra adecuada: integridad. Cohesión en una sola pieza del carácter, las creencias y el discurso que las expresa. Sujeción del verbo a la verdad íntima por encima de todas las cosas.

Pero conviene advertir que la integridad es tanto una virtud de las personas con fortaleza espiritual como una necesidad imperiosa de la naturaleza humana. El hombre necesita ser íntegro. Necesita que no haya fisuras entre su conciencia y su palabra. Y cuando rompe esta regla, ya sea por conveniencias personales o por imposiciones externas, se produce lo que popularmente se conoce como mala conciencia. Y la mala conciencia, cuando se sufre (o se ejerce) por períodos prolongados, puede llegar a somatizarse en neurosis, depresiones o en una profunda tristeza.

Palabra y coerción

El asunto es grave, porque al asumir el legado del lenguaje, ese don heredado de millones de otros hombres, que nos viene del más remoto pasado, con él nos llega también una singular contrariedad: la sociedad, el medio en el que adquirimos la posibilidad de comunicarnos, esto es, de ser libres, nos comienza a regatear ese magnífico patrimonio casi en el momento mismo en que comenzamos a apoderarnos de él.

El primer síntoma de esta contradicción viene dado en los tabús léxicos de la tribu a la que pertenecemos. Enseguida aprendemos que hay palabras que no se pueden decir porque con ellas se denominan objetos, simples cosas u órganos inmencionables por el grupo. El grupo tiene un orden, unas reglas, y por lo tanto unos límites y unas prohibiciones. Los niños deben aprender rápidamente lo que pueden o no decir, o escuchar, porque hay palabras malas que andan sueltas revoloteando como demonios en el seno del grupo.

Esa es nuestra primera evidencia de que la palabra sirve para darnos la libertad, y al mismo tiempo para demostrarnos la frontera entre la autoridad –el yo colectivo de los otros, impuesto por la fuerza–, y nuestro yo todavía vacilante, balbuciente.

A partir de ese momento el combate entre nuestra voluntad de utilizar la palabra sin límites ni temores, y la voluntad de la sociedad de ponerle puertas a nuestra capacidad expresiva, no terminará nunca, y quizás ése es el territorio y el campo de batalla donde han transcurrido siempre las más memorables aventuras espirituales del hombre. ¿Qué fue, si no, una batalla por callar o decir ciertas palabras, el episodio de Galileo frente a los inquisidores? Galileo, como antes Copérnico, sabía que el Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario, que la Tierra no estaba inmóvil en el espacio, y que describía su órbita en torno al Sol, pero no podía decirlo, porque violaba los textos sagrados de su grupo. Al cabo, por miedo, Galileo cedió. Rindió su discurso y aceptó la falsedad. De ahí el melancólico sentido de su famosa frase: *y, sin embargo, se mueve*. Galileo no pudo, realmente, callarse, porque callarse del todo le rompía la coherencia íntima, le destrozaba esa integridad moral que el hombre necesita para andar por la vida.

La hipocresía y el miedo

José Martí decía que la libertad era el derecho que tenía todo hombre honrado a pensar y hablar sin hipocresía. Y a mí me parece que de los miles de apotegmas que Martí escribió a lo largo de su vida éste es uno de los más exactos, de los más inteligentes, de los más sorprendentemente sintéticos.

Pero si hurgamos un poco más bajo la piel de esta definición también nos encontraremos frente a una de las más profundas y destructivas raíces del totalitarismo: la hipocresía, la negación descarada de la verdad evidente. Porque la hipocresía es la columna de fuste sobre la que siempre se sustenta la tiranía. La tiranía, especialmente cuando alcanza los límites monstruosos del totalitarismo, siempre tiene una verdad sesgada, unos inapelables textos sagrados con los que interpreta y explica la realidad. Y ante ellos sólo es posible la repetición mecánica del discurso oficial. Ante ellos sólo es posible la hipocresía o la rendición de la palabra, el silencio.

¿Cómo consiguen los tiranos esa forma monstruosa de obediencia abyecta? La experiencia es contundente: se logra mediante el miedo a los castigos. Primero se recurre al lenguaje para demonizar al transgresor. Se le llama traidor, divisionista, hereje, revisionista, gusano, o cualquier otro epíteto previamente dotado de una connotación ominosa que lleva implícito el castigo. La sanción moral es sólo la advertencia previa, el heraldo negro de la sanción física que le sigue.

El miedo, entonces, pasa a presidir las relaciones entre los seres humanos sometidos a la tiranía. Un miedo que no tiene otro objeto que inducir una conducta hipócrita entre los hombres.

Una conducta trezada con palabras impronunciables, falsos gestos de adhesión y la mutilante supresión de la espontaneidad. Un mundo en el que la verdad no importa. La integridad de las personas tampoco. Lo único que al tirano le interesa es escuchar el coro unánime de sus subordinados para hallar en ese vago rumor la legitimidad que necesita para justificar sus acciones. Porque él y sus cómplices también requieren de una cierta coherencia formal, de una racionalidad. La fuerza bruta no existe en estado puro desde que el hombre consiguió hablar y articular su mensaje. Para ejercerla hay que construir un mensaje falso, contrario a la realidad, pero dotado de su propia lógica, de su otra verdad.

¿Nos movemos en un plano demasiado abstracto? Descendamos, pues, a ejemplos concretos, tristemente concretos. Descendamos, incluso, a una anécdota esperpéntica para ilustrar estas reflexiones.

La palabra y la muerte

Hace relativamente poco tiempo, durante el juicio que se le siguió a los militares argentinos, una de las víctimas, una mujer conmovida por el horror, contó cómo, desde su celda, pudo contemplar las golpizas brutales y las torturas que le infligieron a un joven detenido, con el solo objeto de que repitiera en voz alta la siguiente oración: *mi madre es una puta*. Lo golpearon durante horas, le quebraron los huesos, probablemente lo mataron, pero el detenido no abrió la boca, murió, no entregado a la valentía de los gestos heroicos concebidos para alimentar la admiración exterior, sino murió defendiendo su integridad, su autoestimación, su coherencia íntima de ser humano. Murió defendiendo su derecho y su necesidad de escoger sus propias palabras.

No creo que en nuestra especie existan conflictos más profundos que éste. No se me ocurre un dilema mayor que el de tener que escoger entre la muerte absurda, sin remedio, en la oscuridad de un calabozo, defendiendo la dignidad personal, y la vida lacerada por la hipocresía, por el dolor de tener que mentir para que no nos aplasten.

La verdad es que los estados totalitarios modernos no inventaron este drama terrible. Esta tragedia está implícita en donde quiera que existen mecanismos escolásticos, es decir, verdades axiomáticas y autoridades con capacidad represiva que verifiquen su estricto acatamiento.

Pero si bien es cierto que no son los estados totalitarios del siglo XX los que crearon estas monstruosidades, ha sido en ellos donde ese horror ha alcanzado el mayor grado de sistematización durante los juicios ideológicos llevados a cabo contra los revolucionarios aparentemente desviados de la secta. No vale la pena detenerse en ellos, pero desde Bujarin hasta mi amigo Heberto Padilla hay suficiente material como para llenar los capítulos más terribles de aquella historia universal de la infamia que a Borges se le quedó necesariamente inconclusa.

Lenguaje y tabú

Mas no dejemos que el rechazo a este fenómeno nos aleje de la indagación. Es casi una ley inexorable que la más enérgica represión léxica siempre va a ser ejercida por la sociedad en la zona donde descansan los fundamentos básicos del grupo. Cuando la religión es el principal elemento cohesionador, el discurso peligroso será siempre el que afecte a ese mundo particular. Un pueblo como el judío, por ejemplo, cuya esencia es la creencia religiosa, llegará a prohibir la mención del nombre de Dios en hebreo. Jehová es eso mismo: el innombrable. Porque nombrarlo ya comenzaba a ser una forma de retar su poder absoluto.

Pero donde este fenómeno se hace totalmente transparente es en ciertas comunidades cristianas de la Edad Media que subrayaban su piedad y su subordinación al Todopoderoso con el más patente y tremendo de los sacrificios: el voto de silencio. Callaban para no ofender a Dios, y porque eliminar la palabra era la prueba suprema de la total servidumbre. Para estos cristianos, como para los israelitas, Dios estaba en el centro de sus vidas y a Él rendían el máspreciado de los dones humanos.

¿Por qué la blasfemia, o el juramento en vano del nombre de Dios, pueden ser considerados, en determinados períodos de hegemonía religiosa, una ofensa tan grande como para acarrear la muerte a quien se atreva a pronunciar las palabras prohibidas? Porque para ese particular grupo, en cierto momento de la historia, la creencia religiosa era un pilar fundamental al que se quería proteger para impedir el desplome de la fábrica social. Y ni siquiera hoy mismo, como ha comprobado con enorme perplejidad el escritor Salman Rushdie, en las culturas en las que la religión es la piedra miliar de la sociedad y el núcleo de su discurso oficial, las palabras de contenido religioso se vuelven singularmente peligrosas. A veces letales.

Y es que la autoridad siempre está apuntalada por palabras. Sin ellas no es posible reconocerla. Las *excelencias*, *majestades*, *señores*, *vucencias* y demás categorías del linaje humano, siempre han requerido un vocablo especial que las designe. Sin esas palabras no existirían las jerarquías. Esas palabras, incluso, se otorgaban (y hasta compraban), mediante regulaciones cuidadosas, especialmente en los siglos XVI y XVII, cuando resultaban frecuentes las riñas entre espadachines por un don o un señor mal endilgados. Naturalmente, son siglos en los que se afianzan las

monarquías europeas y en los que ha estructura aristocrática necesita sustentar su poder y levantar barreras.

Mucho tiempo después, con el advenimiento de los períodos revolucionarios y el surgimiento de las democracias, el lenguaje encontrará otros campos minados. Entonces lo peligroso será decir *conde* o *marqués*, porque la palabra mágica en un grupo que gire en torno al igualitarismo tiene que ser *ciudadano*.

Lenguaje e incertidumbre

El orden siempre busca el rígido sometimiento de las palabras porque toda regla violada precipita al grupo a la incertidumbre. Y lo primero que se pretende es domar las palabras, sujetarlas por la cola para impedir cambios imprevistos. Sólo que la naturaleza misma del lenguaje es la incertidumbre. Ese poder elegir esta frase o aquélla. Ese tono irónico o aquel otro destemplado o solemne. El lenguaje siempre es sospechoso para el orden establecido.

Sin embargo, esa incertidumbre implícita en la naturaleza misma de la lengua, en su cuasi infinita variedad combinatoria, se compadece milimétricamente con el ejercicio de la libertad. La libertad es también elección, incertidumbre, riesgo. Se es libre cuando se puede decir esto o lo otro, cuando se puede escoger entre opciones diversas. No se obra bien cuando se sigue el curso impuesto por los otros, aunque sea correcto, sino cuando se puede obrar mal y se selecciona la alternativa opuesta.

Las sociedades más cerradas son precisamente aquellas que más estrechan el círculo de las palabras utilizables. Las que nos reducen nuestra posibilidad de tomar decisiones o nuestra libre selección de opciones hasta no dejarnos más que un estrecho sendero por el cual transitar.

Obviamente, la libertad no puede ser absolutamente cercenada, porque siempre existe la posibilidad última de tomar la libérrima decisión de no seguir vivo, pero la asfixia moral de los seres humanos cuando nos van privando de la potencialidad de expresar públicamente nuestro pensamiento es un fenómeno terrible y cotidiano.

El ministerio de la verdad

Yo vengo de un país en el que se utiliza la mayor violencia posible contra el lenguaje. Cuba comparte con las sociedades totalitarias ese tristísimo signo. Más aún: es exactamente eso lo que la hace totalitaria, lo que le permite ejercer el resto de las violencias.

En el mundo totalitario hay una forma unívoca, cierta, espantosamente cierta, de analizar la realidad. En el mundo totalitario los comisarios, los dueños de la verdad, se han apoderado de las palabras y nos obligan a repetir, como en una letanía infinita, el discurso que traen los libros sagrados. En esas sociedades se sabe exactamente cómo es el pasado. Se sabe, sin matices, cómo es el presente, y lo que es más horrible, se sabe cómo será el futuro. No hay espacio sin riesgo para las interpretaciones. A las interpretaciones se les llama herejías, o desviacionismo, o se les califica con cualquier epíteto lleno de malos presagios.

Este control sobre la palabra llega a ser tan tremendo en las sociedades totalitarias, que se crean verdaderos ministerios de la verdad dedicados a teñir de blanco o negro todas las zonas grises de la realidad. Ese organismo diabólico, en Cuba se llama D.O.R. (Departamento de Orientación Revolucionaria). Ahí se nos dice lo que se puede leer, lo que se puede escribir, lo que se puede creer de todo lo humano y divino, sin infringir las certidumbres revolucionarias. El D.O.R. redacta el discurso oficial sobre todo acontecimiento humano, pasado, presente o futuro, sobre el que sea necesario o posible emitir una opinión. No hay hecho inocente en la historia humana. Corea, los hermanos Graco, el conflicto de Irak, las transformaciones en la URSS o la pobreza de Bangladesh tienen todos su epígrafe definitivo, su inscripción meticulosa. Y quien se salga de esos límites, quien se deje llevar por la duda y convoque a la incertidumbre, puede provocar las represalias de los dueños de la verdad, de los amos de la palabra.

La batalla definitiva

La batalla por la libertad siempre se ha dado y se dará en el terreno del lenguaje. Los misiles, los cañones, toda la parafernalia desplegada, no son más que las expresiones finales de un fenómeno cuyo corazón radica en la posibilidad que tiene el hombre de decir o escribir ciertas cosas.

Y donde esta realidad se nos mostró sin ningún recato fue en la URSS de Gorbachov. En cierta medida la *glasnost* es la lucha por ampliar los horizontes de la palabra. La sociedad se abre cuando consigue examinar sin miedo su pasado y su presente para lograr, al cabo, intuir el futuro, o uno de los mil futuros posibles.

La lucha de los rusos hoy en día consiste en el esfuerzo por conquistar el derecho a la incertidumbre. El derecho a tener o no tener opiniones vacilantes, distintas y modificables sobre lo que ha ocurrido o sobre lo que sucede. El derecho bendito a no tener que predecir de manera infalible el curso de los acontecimientos, porque cuando la incertidumbre anida en el corazón de todos los hombres, el futuro se va haciendo de una manera azarosa, aleatoria, sin que afortunadamente seamos capaces de encontrar una verdad absoluta y definitiva, pues si tal cosa existiera sería el fin de la naturaleza humana, sería la robotización de una criatura hecha por el azar y para el azar.

Por otra parte, el melancólico hallazgo de los reformistas soviéticos, el más revolucionario de todos, es que la prosperidad y el desarrollo son también consecuencias de la libertad. Sólo cuando nos es dable examinar sin temor lo que acontece podemos corregir los errores y mejorar las circunstancias prevalecientes.

Es muy importante tener en cuenta esta secuencia porque demasiadas veces se nos ha dicho que sólo pueden tener acceso a la libertad los que han alcanzado un cierto índice de prosperidad. Y eso es radicalmente falso. La libertad precede, antecede, al desarrollo. Lo potencia de una manera definitiva. No acertaban quienes vinculaban cierto per cápita a lo que en la década de los '60 se llamó *el umbral de la democracia*. Mientras más libertad de expresión y análisis, mientras más libertad exista de ejercer la crítica y de tomar decisiones, mayores serán las posibilidades de desarrollo individual y colectivo.

La palabra como vacuna

Para todo eso es nuestro deber luchar contra todo intento de restringir el uso de la palabra. Y no sólo porque constituya una posición de ser humano amable y tolerante, sino porque el discurso libre, fluido, sin escollos, donde todo pueda ser examinado sin temores, y criticado sin piedad, aun

injustamente criticado, es la mejor vacuna que existe contra el totalitarismo. Más aún: si esta hipótesis es cierta, debería convertirse en política de los estados liberales. Sólo son convenientes las relaciones generosas y entrañables con aquellas naciones en las que no se le pone límites a la expresión de la palabra.

Y no es que una sociedad libre no pueda parir monstruos agresivos que pongan la paz en peligro, sino que es mucho más probable que los aborte durante el proceso de gestación. Al fin y al cabo no hay otra vacuna contra el totalitarismo que las palabras libres salidas de las conciencias y de los corazones de los hombres sin miedo. Ojalá que ése sea el panorama que nos depare el futuro. Lo opuesto sería, simplemente, intolerable.

Honduras, enero de 1991.

II

LA SOCIEDAD TOLERANTE Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Hay muchas formas de comenzar un ensayo sobre la libertad de expresión y la ética de la responsabilidad. Yo me voy a remontar bastante en el tiempo y en la historia, porque mi primera intención es advertir que la libertad de expresión no es una conquista adjetiva de los seres humanos, sino un fundamento consustancial a su propia naturaleza. Asimismo, tal vez consiga demostrar que los métodos del razonamiento ético, aplicados a este tema específico, no son una abstracta reflexión sobre el hombre, sino más bien una válida fórmula de discernimiento al servicio de los mejores intereses de la criatura humana.

La vida y la palabra

Las frases lapidarias –las que se inscribían en las lápidas– estaban obligadas a ser breves y contundentes. Comencemos por una que tiene, además, una extraña mezcla de petulancia, desdén y melancolía: «*la vida es un curioso proceso de oxidación que le ocurre a cierta materia en cierto rincón del universo*». Así es la vida de las ballenas, de los estreptococos, de los lirios o de los paquistanos. Apenas un curioso proceso de oxidación, de combustión de energía. Y la vida, que se parece toda a sí misma en su pluriforme variedad hasta acabar confundándose en el nivel celular, sólo rompe su monotonía biológica cuando una estrafalaria criatura, el *homo sapiens*, se inventa un mundo destinado a escapar de los rigores de las leyes que regulan la materia. Un mundo que no está regido por las cadenas fatales de la trasmisión genética. Cadenas por cierto que el pensamiento y la palabra ya han comenzado a modificar a su antojo, penetrando en las entrañas de la vida para descifrar y variar sus formas caprichosas.

Ese mundo único y nuestro al que me refiero, por supuesto, es el de la cultura. Esa otra vida parida por nuestra imaginación. Esa otra vida que nos ha dado los libros, las leyes, los gobiernos y las modas, las artes y las ciencias, y que nos convierte, realmente, en unos seres imprevisibles y distintos a todo lo que existe, o –por lo menos– a todo lo que hasta ahora conocemos.

El hombre no es sabio porque fabrica utensilios o herramientas. El hombre –y déñese por aludidas las mujeres, pues me refiero a toda la especie– es hombre porque habla, porque se comunica, y porque comunica cosas distintas. Las hormigas y las termitas, las abejas y los delfines, también se comunican, pero siempre repiten un mismo mensaje destinado a perpetuar sus formas congeladas de existir, mientras nosotros, a diferencia de ellos, modificamos constantemente nuestro mensaje a partir de las experiencias que vamos adquiriendo, y sobre esa constante mutación articulamos los mecanismos de transformación del mundo en que vivimos.

No es, pues, nuestra facultad de hablar y de examinar la realidad una característica superficial, como pudiera ser la de constituir mamíferos escasamente dotados de vello –el mono desnudo que acuñara Desmond Morris hace años–, o la de andar sobre las dos extremidades, desechando la probable comodidad de poder hacerlo sobre cuatro. Es algo distinto. La facultad de hablar, de comunicarnos, de someter el mundo a nuestro juicio, es la clave de la persona humana. Es la razón de su ser. Es su misterio último.

Hago esta observación para subrayar con ella la extraordinaria importancia que tiene para la especie precisar los límites de lo que puede o debe decirse, o tal vez para establecer que lo más conveniente es carecer de límites, de manera que la expresión fluya sin enfrentarse a obstáculo alguno. Incluso, es posible llegar a decir que la historia de la humanidad es la historia de un largo, interminable e ininterrumpido discurso que comenzó hace millones de años en alguna cueva o en alguna pradera africana o asiática. Y de alguna manera cuanto enriquece ese viejo murmullo que viene del fondo de los tiempos, ese profundo rumor de voces mezcladas en la historia y en la geografía, debe ser estimulado para que perdure, se ensanche y perfeccione.

La virtud de nuestra sociedad

Los manuales de filosofía política suelen establecer una valiosa distinción entre los valores que priman en los distintos modelos de sociedad. Para Platón la gran virtud de la República era la conciliación entre las funciones que se desempeñaban y la autoridad de quien las tenía a su cargo. A esa adecuación, Platón la llamaba precisamente, justicia. Para el pensador griego la mejor sociedad posible era aquella gobernada por una aristocracia del mérito.

Por supuesto, en tiempos de Platón ésa no era la única jerarquía posible de valores. Otros griegos menos amables, los espartanos, pensaban que las grandes virtudes de su sociedad, sociedad medularmente militarizada, eran el honor, la dignidad y el orden. Algo no muy distinto, por cierto, a lo que hoy continúan sustentando las dictaduras castrenses.

Siglos después, con la consolidación de la monarquía, otra fue la gran virtud que coronó la sociedad: la lealtad a la augusta persona del monarca y a su estirpe. Se era digno y honrado cuando se era leal a quien encabezaba el Estado, supuestamente por la gracia de Dios, pero casi siempre debido a la ferocidad con que se ejercía el poder.

En nuestros días, con otro género de dictaduras, las ideológicas –y el caso más notorio lo constituyen las comunistas–, la virtud cardinal es, o era, paradójicamente, la eficiencia. De ahí la permanente cantinela sobre los supuestos índices de producción y de creciente prosperidad que los paraísos del proletariado nos endilgaban. No sólo se trataba de embaucarnos a nosotros, sino de encontrar para ellos mismos una buena coartada con la cual justificar el monstruo policíaco creado por los partidos marxistaleninistas.

Coetáneo al comunismo, otro tipo de sociedad, la nacionalista, ha puesto al frente de sus virtudes el patriotismo. Y el patriotismo, tal como lo entienden los nacionalistas, no es la lealtad a las personas, como en las monarquías, o a las causas, como las dictaduras ideológicas, sino la lealtad al Estado en que se vive, a sus símbolos, y a una particular manera de entender la historia.

Sin embargo, nuestra época, en las proximidades del siglo XXI, y ya en pleno poscomunismo, no es la de la república platónica, ni la de las monarquías, ni la de los *paraísos socialistas* prácticamente extirpados de la historia. Vivimos en la era de la consagración de la democracia pluralista, una democracia que no ha abandonado su voluntad de procurar la igualdad, la fraternidad y la libertad, pero que ahora, tras más de dos siglos de experiencia, ha añadido y ha colocado en la cúspide una nueva y singular virtud: la tolerancia. Virtud sin la cual la fraternidad no es posible, la libertad se convierte en una utopía y la búsqueda de la igualdad puede devenir en dictadura. Nuestra era –en fin– es, o debe ser, la de la sociedad tolerante. Esa sociedad que es

capaz de aceptar serenamente formas de vida atípicas, extravagantes y hasta absolutamente contrarias a la conducta habitual de lo que constituye el cuerpo central del grupo.

Bien: tenemos ya dos premisas básicas sobre las cuales sustentar nuestras reflexiones y conviene ahora recapitular para no perder el hilo de la argumentación: hemos dicho que el lenguaje es lo que le da al hombre una cualidad que lo hace totalmente distinto a otras criaturas del universo, y luego hemos añadido que trabajosamente, a lo largo de los siglos, valiéndose de esa facultad de comunicar, el hombre, al menos en los rincones más dichosos de la tierra, ha arribado a lo que podemos llamar la *sociedad tolerante*. Una sociedad que coloca la tolerancia a la cabeza de todas las virtudes. Vale la pena acercarnos un poco más a esa particular sociedad.

La sociedad tolerante

Aparentemente, la tolerancia es un valor débil, blando, propio de personas o de grupos bondadosos, pero creo oportuno subrayar que ésa es una manera superficial de entender esta virtud. La tolerancia es mucho más que eso: es el clima idóneo para la aparición de la verdad. Negarse a ella, cerrarle las puertas es impedir que la sociedad pueda examinar sus problemas libremente, o que pueda buscar nuevos caminos para entender cuanto sucede con el objeto de solucionar los inevitables problemas que surgen en todos los grupos. En cambio, las sociedades intolerantes, las que presumen de unanimidad de criterio y de propósitos, las que menos espacio dejan para disentir, pese a su aparente fortaleza, son infinitamente más vulnerables, como acaba comprobarse con la destrucción de la URSS y los satélites del Este.

La esencia de la tolerancia es la negación del pensamiento escolástico, y los fundamentos del pensamiento escolástico cualquiera puede entenderlos y evaluar, al mismo tiempo, los inmensos perjuicios que suelen acarrearle al género humano. El mecanismo del pensamiento escolástico es diabólicamente simple: se establecen o «descubren» unos dogmas; se precisa lo que se debe creer y lo que no se debe creer; se define lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Se perfila una verdad oficial, y en torno a ella se yerguen mecanismos defensivos de todas clases. Por último, se pautan castigos para quienes busquen o crean encontrar una verdad distinta y se atrevan a desafiar los dogmas sagrados.

La sociedad tolerante, en cambio, parte de la base de que ningún modo de pensar, ningún pensamiento puede o debe ser privado de expresarse. En la sociedad tolerante todo puede y debe decirse sin consecuencias y sin angustias, porque ahí radica su vigor y su razón de ser.

Eso nos precipita a problemas concretos: ¿se puede defender en la sociedad el derecho de los intolerantes a manifestar su modo de entender la realidad? ¿Es permisible el discurso antitolerante? ¿Deben los neonazis proclamar libremente su antisemitismo, o los racistas establecer su desprecio hacia los negros, chinos, indios, blancos o quienes tengan otra pigmentación y otros rasgos? ¿Se debe proteger el derecho de quienes propugnan con sus ideas la destrucción de la democracia y los fundamentos del Estado tolerante?

¿Cuáles son los límites de la sociedad tolerante? Supuestamente no debe haber límites. Sin embargo, hace muchas décadas el juez norteamericano Oliver W. Holmes, famoso por su sentido común y por sus convicciones moderadamente liberales, hizo una conocida observación que de alguna forma enmarca el contorno del problema: el derecho a la libertad de expresión no ampara al individuo que grita ¡fuego! en un teatro lleno, sólo por el gusto de contemplar el peligroso tumulto que inmediatamente se desata.

Obviamente, la libertad de prensa o de imprenta tampoco autoriza a colocar una etiqueta de aspirinas sobre un frasco que contenga pastillas de cianuro. Y probablemente las autoridades gubernamentales de cualquier país responsable impedirían que una compañía publicitaria obstruyera peligrosamente la visibilidad en las carreteras con vallas anunciadoras de un partido político.

Lo que quiero decir es que hay un principio que consagra el valor superior de la libertad de expresión, pero simultáneamente hay casos concretos en los que la utilización de esa libertad se convierte en un perjuicio probable contra personas concretas de carne y hueso. ¿Cómo resolver ese dilema?

Los métodos de la ética

Es aquí donde se hace imprescindible utilizar el juicio moral, pero sin que nos abandone una humilde duda sobre el resultado de nuestras decisiones. Hay ciertas circunstancias en las que nunca podremos saber con total certidumbre si hemos obrado bien o mal, pero ese temor es característico de este tipo de conflicto. Sin embargo, la ética contiene una regla de oro que nos sirve como método constante para poder tomar las decisiones menos arbitrarias, y ese método está basado en dos premisas clave: entre los males hay que elegir el menor; entre proteger de daños reales ideas o personas, debe prevalecer la protección de las personas.

En realidad, los juicios éticos casi siempre están basados en este tipo de dolorosa disyuntiva, porque el bien y el mal prácticamente nunca se nos presentan químicamente puros. Incluso, uno de los rasgos más destacados de la sociedad tolerante es su convicción de que es difícil o imposible establecer verdades irrefutables, de manera que siempre es preferible dejar espacio a la duda y a la perplejidad. Sólo que este talante dubitativo no nos exime de tener que elegir.

Más aún: probablemente es ante estas disyuntivas cuando el espíritu humano alcanza su más gloriosa y a veces trágica dimensión. Y no recuerdo un episodio más cruelmente ilustrativo y conmovedor de esta afirmación que el del gueto de Varsovia durante el acoso de los nazis, cuando las autoridades judías tuvieron que elegir entre adultos y niños para enviarlos a la muerte, y tras agónicas reflexiones sacrificaron a los niños basados en la premisa que debe darle contenido a cualquier juicio ético: porque era la menor de las monstruosidades propuestas.

¿Es permisible, entonces, dejar que los enemigos de la democracia intenten destruir sus fundamentos diseminando ideas perniciosas? Sí, porque prohibir el ataque verbal contra la democracia, o contra las religiones establecidas, o contra ciertos grupos étnicos, es más peligroso que el mal que se quiere evitar. La democracia es un modo de vida cívico y la religión es un modo de vida espiritual. Son ideas, abstracciones que no existen fuera del recinto de nuestros cráneos. A nosotros puede repugnarnos que insulte nuestro modo de vida cívico o espiritual, pero podemos sobrellevar ese ataque de la misma manera que somos capaces de sobrevivir a una injuria o a una ofensa soez. Ese ataque puede ser desagradable, pero no hay porqué prohibirlo. La prohibición, en

cambio, puede abrir las puertas a cualquier género de persecuciones, y ya sabemos cuán fecunda puede ser la imaginación de los perseguidores.

A lo largo de la historia se ha perseguido quienes oran a un dios, a otro o a ninguno. A quienes aman a varias personas del sexo opuesto o del propio. A quienes tienen el cabello corto o largo. A quienes utilizan sombrero y a quienes no lo utilizan, a quienes adoran imágenes y a quienes se niegan a adorarlas. Se ha prohibido el alcohol, el chocolate, los bigotes, las barbas, la Biblia, el Corán, la Torah y hasta la moralista *Madame Bovary*, por sólo citar algunos textos entre los centenares de miles que han ido a parar a la hoguera.

A lo largo de la historia han sido declarados inmorales, y por lo tanto ocultados de la vista, los rostros de las mujeres, los senos, las piernas, las nuca, los murales con desnudos, la figura humana y hasta las patas de las mesas y de los pianos, porque podían incitar a la lujuria a ciertos ardientes ingleses de la era victoriana. De manera que ante el furor inquisitorial lo más seguro, lo menos riesgoso es impedir de raíz las prohibiciones de índole moral y aprender a vivir en sociedades tolerantes, confiados en que ese clima, a veces áspero, de la disensión y la variedad, es el mejor antídoto contra la tiranía, porque se vive bajo la autoridad de la verdad y de la razón. Sin embargo, eso nos coloca frente a una obvia conclusión: hay que adiestrar a la sociedad para que sepa y pueda vivir en medio del fuego cruzado de opiniones hirientes y desagradables. Hay que educar en las escuelas y en las familias para que todos sepamos que el precio de la libertad incluye la molestia de tener que aceptar la convivencia con factores ingratos.

De ahí que sea profundamente injusto que sólo se coloque sobre los hombros de la prensa, de los escritores o de los comunicadores en general la responsabilidad de lo que debe o no publicarse. Dentro de las reglas de juego de una sociedad tolerante todo el grupo es o debe ser responsable de lo que se dice o imprime, porque todos aceptan la premisa básica de que vivimos en una sociedad abierta y expuesta al peligro de los excesos.

Cuando un ciudadano sale a la calle corre ciertos riesgos: si lo atropella un coche o un autobús a nadie se le ocurriría pedir el fin del tránsito rodado. No parece haber duda de que los beneficios de los vehículos con motor son tan grandes que aceptamos fatalmente las carnicerías diarias de

nuestras carreteras y caminos. Ese razonamiento también es aplicable a la irrestricta libertad de prensa y de comunicación. Hay periodistas y escritores que hacen mal uso de ella, como hay choferes que conducen irresponsablemente, pero los beneficios que de ella se derivan hacen impensable que se prohíba.

El terreno del derecho

¿Cómo se logra, entonces, armonizar las necesidades de la sociedad tolerante frente a los excesos de quienes actúan irresponsable o maliciosamente? Obviamente, estamos intentando defender un valor abstracto, como todos, frente al asedio de una infracción concreta. Pues bien, esos debates, que a veces derivan en verdaderos combates, se libran en el terreno del Derecho, y me parece que lo más prudente, ante todo, es examinar uno de los más curiosos y brillantes preceptos constitucionales jamás concebidos: la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, votada por el Congreso americano en 1791 para júbilo de Jefferson y de Madison, y para gloria de los ideales democráticos.

Esa Primera Enmienda dice algo fundamental: no se podrá promulgar ninguna ley que regule o limite la libertad de expresión. Es una ley que prohíbe hacer leyes sobre cierta materia, aunque no impide que se proteja a los ciudadanos de los excesos de quienes utilizan la libertad de expresión de forma criminal. Por supuesto, la existencia de esa Primera Enmienda no ha impedido del todo los atropellos a la libertad de expresión en Estados Unidos, pero ha disminuido notablemente la tendencia de todo poder a tratar de acallar la crítica y la censura.

Obviamente, el hecho de que no se pueda legislar sobre la libertad de expresión no quiere decir que esté permitido injuriar al prójimo, calumniarlo o divulgar una información falsa que le causa perjuicios a quien actúa guiado por ella. Lo que quiere decir ese apéndice constitucional es que quienes tienen el poder político no pueden poner fronteras al pensamiento humano, no pueden mermar la capacidad potencial de comunicación de las personas, y es a los jueces, *a posteriori*, y no a los legisladores, *a priori*, a quienes tocará luego la difícil encomienda de decidir si determinada idea, o determinada información, han provocado un daño concreto o son sólo formas estrafalarias de verter una opinión.

Curiosamente, cuando no hay ley, como es el caso de los pleitos relacionados con la libertad de expresión en los que se invoca la Primera Enmienda, los jueces se asemejan mucho los filósofos que a los juristas, y con frecuencia, cuando no alcanza la jurisprudencia, se verán obligados a adoptar el método que la ética propone para tomar decisiones: ¿qué opción causa el menor perjuicio?

Estos dilemas se ven de manera transparente en casos como los de la quema de las banderas: ¿hay alguna persona de carne y hueso perjudicada por este hecho lamentable o lo que se vulnera es una idea abstracta, un símbolo nación?

¿Cuál es el daño objetivo que se le hace a la sociedad prohibiendo que un majadero queme una bandera, porque ese gesto hiera la sensibilidad de la mayoría? La mayoría también cree en Dios y podría sentirse lacerada porque unos ateos manifiesten su falta de fe. ¿No es preferible, entonces, dentro de las normas de la cultura de la tolerancia, admitir humildemente el gesto brusco e idiota de quemar una bandera como admitimos cientos de actos y hechos que nos disgustan?

Por carecer de una Primera Enmienda, y por entender a fondo lo que significan la sociedad y la cultura de la tolerancia, en América Latina se han vivido episodios esperpénticos que a veces ni siquiera servirían para ilustrar la *Historia universal de la infamia* que esbozara Borges, sino más bien habría que clasificarlos dentro del capítulo de la *Historia universal de la bobería*. Y recuerdo, a vuelapluma, a manera de ejemplo, dos anécdotas venezolanas, una que sucedió hace algunos años, y otra que acaba de ocurrirles a unos historiadores.

En la primera, un periodista fue a la cárcel cuando humorísticamente ilustró la devaluación del bolívar imprimiendo un billete con la imagen de un Libertador que tenía un ojo amoratado. Y en la segunda, muy reciente, parece que unos investigadores venezolanos pueden acabar en el calabozo porque han reproducido ciertos sextos incómodos para el Estado venezolano recogidos nada menos que del Archivo de Indias, textos que tienen, por lo tanto, varios siglos de haber sido compilados.

Desde luego, Venezuela no es una excepción. Estoy seguro que en cada uno de nuestros países podríamos acumular un rico anecdotario, puesto que la censura ha sido (y es) un arma frecuente en manos de la dictadura. En Panamá, no hace mucho, un triste dictador pretendía legislar para convertir en delito las alusiones despectivas a su cutis cuarteado por el acné juvenil. En Cuba no se puede caricaturizar a Fidel Castro y cualquier comentario peyorativo sobre su solemne persona se paga con años de privación de libertad. En España –en época de Franco, en medio de un frenesí moralizante–, se trucó el doblaje de una película para borrar la trama adúltera, convirtiendo a los amantes en dos hermanos incestuosos que se besuqueaban en la pantalla sin ningún recato y para sorpresa general del público.

No hay duda, en fin, de que se pudieran llenar cientos de páginas con historias más o menos trágicas o burlonas, pero ahora lo más conveniente tal vez sea situarnos en el papel de quien tiene que decidir lo que se imprime o divulga y lo que se silencia.

El dilema de los comunicadores

¿Cómo decidir si incluimos la terrible foto de la niña destrozada por la bomba, el comprometedor romance del político sorprendido en flagrante delito, la proclama incendiaria de unos secuestradores chiflados, la bella figura de una señora sin ropa o las pruebas de que el admirado funcionario no era más que un sujeto corrupto?

Hay argumentos de buen gusto para no reproducir la foto sangrienta de la niña. Se puede alegar que la vida privada de los políticos no debe airearse en público porque los asuntos de la entropierna deben mantenerse en la intimidad. No faltan quienes aseguran que contentar las necesidades publicitarias de los terroristas provoca un aumento del número de crímenes. No hay duda que muchas personas pudieran sentirse legítimamente ofendidas ante el cuerpo desnudo de una señora estupenda. Y tal vez no ande muy descaminado quien piense que una prensa escandalosa, dedicada a la denuncia constante de las faltas o delitos cometidos por los políticos o funcionarios, acaba por debilitar la fe general en el sistema de gobierno.

Y bien ¿qué se hace en cada uno de éstos y en los múltiples casos parecidos que diariamente suelen retar el buen juicio de los comunicadores?

La ética tiene una respuesta discutible y parcial, pero aceptable: en la sociedad tolerante el comunicador debe intentar saber cuáles son los gustos de su público –sin lo cual, por cierto, fracasará irremediabilmente–, y no pretender servir de censor moral o político.

En las sociedades democráticas, abiertas y tolerantes los medios de comunicación no pueden ser, por mucho tiempo, un juguete arbitrario en manos de quienes los manejan, porque se hundirían sin remedio. Tiene que existir una cierta coherencia, una cierta complicidad entre el medio, el mensaje y el receptor, coherencia que es la que define el carácter de la información que se recoge.

Lo que quiero decir es que en la sociedad tolerante es el consumidor, en última instancia, con su elección soberana, quien acaba por decidir lo que deben recoger los medios de comunicación y no un hombre justo o una junta de ciudadanos notables. Lo que convierte en algo perfectamente natural que exista una prensa amarilla, carnal o escandalosa, si es que existe un mercado capaz de mantenerla con vida.

Es posible que a cualquier persona sensible le moleste que se publiquen los secretos de alcoba de un estadista famoso, pero si un comunicador sabe que a un porcentaje elevado de sus lectores no sólo le interesa ese tipo de información sino que –además– la tomarán en cuenta para basar sus juicios políticos, no tiene derecho a silenciarla.

No obstante, si trasladamos al mercado responsabilidad de nuestros juicios morales ¿no estaremos desertando de nuestros compromisos con la ética? No, porque la tarea del comunicador público es también una tarea de intérprete que, a la postre, sólo tiene una limitación fundamental: lo que se diga o lo que se imprima tiene que estar bajo la autoridad de la verdad. Un periódico amarillo tiene todo el derecho del mundo a publicar una noticia escandalosa siempre y cuando sea cierta. Lo que no le es dable sin incurrir en una falta grave, es trucar la información o las imágenes para llevar a cabo una falsificación de la verdad.

¿A dónde nos llevan –por último– estas reflexiones? A un punto que es insoslayable: el debate sobre la libertad de expresión no puede circunscribirse a los comunicadores, porque compete al conjunto de la población.

Si queremos vivir en una sociedad tolerante tenemos todos que entender en qué consiste este peculiar modo de vida y cuáles son sus ventajas y contratiempos. Tal vez así llegaremos a estimar en todo su valor la frase de quien opinó que era preferible una prensa libre sin gobierno a un gobierno sin prensa libre.

Panamá, noviembre de 1992

III

EL MIEDO A LA INFORMACIÓN

Comunicación, tecnología y sociedad: la democracia en la era de los medios interactivos

Hace unas décadas Erich Fromm describió una peculiar fobia detectada en los seres humanos: el miedo a la libertad. Según este fecundo pensador, la búsqueda de la seguridad era mucho más fuerte que el deseo de ser libre. Por lo menos así ocurría en un número grande de personas. Años más tarde Alvin Toffler advirtió la existencia de otro temor peculiar que embargaba a las gentes. Se refería al futuro. A un futuro que no podían entender con precisión, lleno de máquinas complejas que escapaban no sólo del manejo, sino –incluso– hasta de la comprensión más elemental. Era el *shock* del futuro. El terror a un mañana que prometía un modo de vida muy diferente al que nosotros conocimos.

Creo que es conveniente identificar un nuevo temor en nuestro desapacible horizonte: el temor a la información. Ese malestar imprecisable, acechante como una ominosa presencia, que le produce a mucha gente saber la enorme cantidad de información al alcance potencial de nuestros ojos y mentes, pero –al mismo tiempo– totalmente inaccesible.

La avalancha informativa

En casi todas las capitales del mundo desarrollado, y aun del Tercer Mundo, es frecuente poder disponer de una veintena de canales televisión, media docena de periódicos y una incesante aparición de nuevos títulos en las librerías.

Esto es sólo el comienzo. Pronto la combinación de la fibra óptica, el satélite, y la distribución convencional de las ondas radioeléctricas, pondrán a disposición de la familia unos 500 canales de televisión. Esa monstruosa oferta, por supuesto, fragmentará el mercado hasta casi atomizarlo, lo que seguramente dará lugar a formas muy económicas y rudimentarias de producción. Sin duda alguna aumentará la variedad, pero es menos seguro que pueda mantenerse la calidad.

En 1992, solamente en lengua española, 36.000 nuevos títulos aparecieron en las estanterías de las librerías. Casi un promedio de 100 obras por día. Una masa de información absolutamente indigerible. Añádasele a todo esto los voluminosos diarios, las estaciones radiales, las publicaciones especializadas, las revistas de información general, los medios audiovisuales, y tendremos que llegar a la melancólica conclusión de que ya no es posible medir niveles de sabiduría, sino grados de ignorancia. Todos somos raigal y fundamentalmente ignorantes, y cuando alcanzamos atesorar unos conocimientos mínimos, apenas 24 horas más tarde, seguramente ya habrán sido superados por algún hallazgo reciente, otra brillante interpretación o alguna reflexión de nuevo cuño.

En efecto, si en algún momento de la historia fue cierto el *sólo sé que no sé nada* de los griegos, ese momento es hoy. Pero esta vez la certeza de nuestra ignorancia va acompañada de un sentimiento de agobio. Y todos coinciden: los ricos, los intelectuales encumbrados, la masa menos ilustrada. La sociedad dice sentirse abrumada por el caudal informativo, dice padecer un sentimiento de inadecuación. No poder saber, no poder ajustar el tiempo disponible a la información que se nos brinda, nos crea un desasosiego vital que intentamos solucionar con resúmenes, cursos de lectura rápida, cassettes que nos acompañan en los automóviles o a la hora de acostarnos o noticieros que no ahondan en la noticia, sino que se limitan a aportar los *headlines* más urgentes e inquietantes.

La prensa diaria también sufre los embates de la avalancha informativa. La prosa pierde grasa y va directa al grano. Hay que orillar el párrafo elocuente y acogerse al *sound-bite*. Los políticos y ejecutivos tienen que hablar en frases rotundas. El *sound-bite* es la menor unidad de declaración capaz de ser procesada por un telespectador. Hay que decirlo todo en una frase rápida y definitiva. No es fácil. Requiere cierta maestría, pero ya ha surgido una nueva especie profesional, los *comunicadores*, sin los cuales es difícil dar un paso. Ha surgido una fauna experta en movilizar el mensaje en medio de la maraña informativa hasta conseguir colocarlo frente a los ojos y los oídos de un público atormentado por el ruido imparable de la información.

Es esta atmósfera cargada de información la que produce miedo. Es natural: al fin y al cabo, una criatura normal sólo puede seguir la pista a la programación de cinco o seis canales de televisión,

sólo tiene tiempo de leer una docena de libros al año y de pasar la vista a uno, o a lo sumo a dos periódicos todos los días. No en balde la mayor parte de las personas se siente desconcertada cuando le proponen millones de datos, imágenes o historias en medio de un torbellino informativo caótico y desorientador, que no contribuye a aclarar nuestra comprensión de la realidad, sino más bien la oscurece con una multitud de elementos que la inteligencia no consigue discernir, dejándonos una sensación de inseguridad y desamparo realmente ingrata.

La televisión y la violencia

Esta sensación de perplejidad, de miedo ante la enorme oferta de información, nos lleva con frecuencia a tratar de encontrar en este fenómeno la causa de muchos de los males que nos aquejan. No es extraño que se diga, por ejemplo, que la violencia surge o se incrementa debido a las imágenes que nos muestra la televisión. Howard Stringer, Presidente de la CBS, ha advertido que un joven de 18 años, adicto a la televisión –como suele ser corriente en los Estados Unidos– en el momento en el que arriba a la mayoría de edad habrá visto en la pequeña pantalla 200.000 actos de violencia y entre ellos 40.000 crímenes. Y no falta quien atribuya a esa carnicería audiovisual el alto porcentaje de homicidios que ocurre en los Estados Unidos. Nada menos que ocho de cada 100.000 norteamericanos son ultimados por sus conciudadanos.

No obstante, esa alta cifra de víctimas hay que tomarla con mucho cuidado. Los canadienses suelen ver la misma televisión que los norteamericanos y el número de homicidios es menos de la tercera parte: 2,6. Y la disparidad ni siquiera puede explicarse por la presencia en Estados Unidos de unas vastas minorías negras o hispanas en las que son más frecuentes los actos de violencia, pese a que ven los mismos programas que suele ver la población calificada como *anglo*.

En los países escandinavos, que también contemplan los mismos programas de televisión –y en los que prevalece la homogeneidad étnica– existen diferencias notables. Los daneses cometen 5,7 homicidios por 100.000 personas. Los noruegos 0,9 apenas. Podría decirse que Dinamarca, más cosmopolita, más tensa, menos relajada que la casi bucólica Noruega, halla en el stress de su civilización una explicación para esta diferencia en el número de homicidios, pero enseguida nos encontramos con que el país que tiene el menor índice de violencia del mundo civilizado es el Estado de Israel, con 0,5 homicidios por 100.000 personas. El más tenso y –permítanme la

horrenda palabra– estresado de los países, permanentemente en pie de guerra, minuciosamente armado, que además de ver la guerra y la violencia en las pantallas, las ha vivido intensamente desde 1948, es, sin embargo la menos violenta de las sociedades del planeta, a juzgar por el índice de homicidios.

Realmente no parece cierto que los crímenes fingidos de la televisión, incluso los crímenes ciertos que traen los telediarios, provoquen en un número apreciable de espectadores la voluntad de repetirlos. Incluso, es fácil comprobar en niños y adultos una manera absolutamente distinta de contemplar el crimen falso del extraído de la realidad. Las películas de ficción violenta se contemplan con cierto espíritu lúdico. Nos divierten. Los documentales de violencia real tienden a horrorizarnos, nos deprimen. Y todos, pequeños y grandes, sabemos hacer la distinción.

No es la cantidad, la calidad o el contenido de la información lo que determina el comportamiento violento. Los checoslovacos y los yugoslavos miraban las mismas películas, contemplaban las mismas series. Cuando los checoslovacos decidieron quebrar el país en dos, lo hicieron ordenada y civilizadamente, sin recurrir a ningún acto de violencia. Cuando los yugoslavos se fragmentaron en media docena de naciones distintas, comenzaron una horrible matanza que pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos y siniestros del siglo XX. La diferencia no estaba en la *información* de que disponían unos y otros, sino en la *formación* que habían recibido en hogares y escuelas.

En realidad, el comportamiento se forja a partir de una escala de valores que probablemente se transmite en el círculo familiar y por medio de contactos individuales. Esto lo saben con toda certeza los comunicadores. No hay elemento más persuasivo que el del encuentro personal, ese influjo directo de la palabra y del *body language* sobre nosotros. La huella que deja esta relación es infinitamente más poderosa que la que puede dejarnos una imagen impresa en una pantalla, o el sonido estereofónico de un CD. Este dato de la realidad no lo ignoran los expertos en mercadeo, que saben, con toda precisión, que no hay mejor elemento para lograr una venta que el de una persona de carne y hueso capaz de influir sobre su interlocutor. Esto lo comprueban día a día los maestros y profesores en todas las aulas del mundo.

Los medios de comunicación, por muy sofisticados y eficaces que sean, siempre padecen de un elemento de artificialidad que disminuye su impacto en nosotros. Hay una distancia entre las personas y el aparato de radio, el televisor o el cine, que nos pone a salvo de cualquier influencia definitiva. Y no debe producirnos ninguna extrañeza este fenómeno. Los seres humanos durante 40.000 generaciones, durante todo el período en el que sobrevivimos como cazadores, no conocimos otro medio de relacionarnos que el del contacto personal. Luego siguieron 400 generaciones de agricultores ágrafos, y –más tarde– 40 ó 50 que pudieran clasificarse dentro de una era más o menos técnica, por lo menos para una parte sustancial del planeta. Han pasado sólo 25 generaciones desde la invención de la imprenta.

Es difícil ponderar adecuadamente el peso de esa larga historia de la comunicación estrictamente humana sobre nuestra siquis, sobre nuestro ser más íntimo y profundo, pero probablemente nos ha marcado de forma permanente: es así como recogemos la mayor parte de nuestras influencias. Es así como nos formamos: de la boca de nuestros seres más próximos, de los más respetados, de sus gestos y movimientos, del contacto con sus cuerpos.

Comunicación y responsabilidad

No obstante, sería una insensatez negar la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de estados de opinión pública que luego desembocan en ciertas formas superficiales de comportamiento colectivo. Casi no hay duda de que las escenas de la guerra de Vietnam terminaron por producir el regreso de las tropas norteamericanas a los Estados Unidos, y es probable que las imágenes del hambre terrible de Somalia, primero provocaran la intervención humanitaria de Estados Unidos; como también es probable que las imágenes de la barbarie somalí, blandiendo las vísceras de los soldados norteamericanos en Mogadiscio, acabarán por poner fin a la intervención humanitaria. Primero el sufrimiento de ciertos somalíes movilizó la compasión de los Estados Unidos. Pocos meses más tarde la vesania y la crueldad de otros somalíes han generado en el mismo país unos sentimientos exactamente contrarios a los que dieron inicio a esa aventura americana en el este de África.

Pero quizás donde se ha visto con mayor claridad la influencia de los medios de comunicación en la conducta de los pueblos es en el reciente caso *Irma*. Irma fue una niña herida por la metralla

inmisericorde de los serbios. Una niña bosnia, rubia y hermosa, a la que le quedaba pocas horas de vida si no la trasladaban a un hospital de Europa donde pudieran atender su gravísimas lesiones.

Entre todo aquel horror, en medio de la proliferación horrible de desastres y aflicciones, un periodista de CNN enfocó su cámara al rostro de la niña y contó la historia para millones de telespectadores del mundo entero. Ese periodista le salvó la vida a Irma. Su piedad selectiva, concretada en aquella carita adolorida, tuvo un efecto de conmoción en todas partes. Yo vi llorar a alguna gente en Madrid frente a las imágenes de la televisión, y supongo que algo parecido debió suceder en Londres cuando enviaron un avión de transporte para salvar a la niña.

Es admirable y terrible el bicho humano. A la misma especie que tira las bombas en Bosnia, se le hace un nudo en la garganta cuando ve el resultado de sus acciones a miles de kilómetros de distancia. El mismo bípedo que carboniza pueblos enteros, que degüella prisioneros, que viola mujeres indefensas, se echa a llorar, conmovido, ante el horror de sus propias acciones.

Estas reflexiones nos abren la puerta a diversos problemas de carácter ético. Uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación. En última instancia, la misión fundamental del periodismo es elegir. Es seleccionar con cuidado, con vocación de servicio, con la voluntad de ser útil y veraz, la imagen o la información que se coloca en la primera página o en el minuto estelar de los informativos

El buen periodismo, la buena comunicación acaso no sea otra cosa que eso: elegir acertadamente lo que se pone frente a los ojos y los oídos de las personas, y seleccionar con todo cuidado la estructura y la jerarquización de esa información.

De la misma manera que nos es imposible asumir racionalmente la cascada de información que se yergue frente a nosotros, también es limitada nuestra capacidad de sentir emociones. La repetición de los horrores no produce un aumento gradual de nuestro sobrecogimiento. Es al revés: la reiteración embota nuestra capacidad de sentir o de sufrir. La primera Irma nos estremece. La segunda nos duele. La tercera nos apena. Es probable que la cuarta nos deje indiferentes. Es, pues, labor de los comunicadores saber elegir en medio de la multitud de pesares

e inconvenientes, de noticias felices y gratificantes, la dosis exacta, adecuada a nuestra limitada capacidad de percibir el mundo a través de nuestra racionalidad y de nuestra emotividad. No cabe todo el horror en nuestra mente. Bosnia nos entró en el corazón, pero se nos quedaron fuera Armenia, Azerbaiyán o Georgia. A Bosnia la hemos visto a través de la carita de Irma, pero Azerbaiyán o Abjacio apenas siguen siendo unos nombres exóticos de vagas reminiscencias orientales.

Democracia y comunicación

Es importante advertir los límites y matices del fenómeno de la comunicación para no sucumbir ante el miedo a la información, y para no esperar demasiado de lo que ésta pueda favorecernos. Hay que partir siempre de la convicción de que son muy precisas las cantidades de información que la persona humana puede recibir, y que no tiene el mismo efecto si le llega de una manera o de otra.

Quienes reclaman el control de la información para impedir la manipulación de las mentes de los ciudadanos están planteando una peligrosa contradicción. Controlar la información desde el Estado es ya incurrir en una peligrosa manipulación. Por otra parte, es bastante dudosa la pretensión de querer manipular a la opinión pública para conducirla a comportamientos contrarios a una escala de valores adquirida en el seno de la familia. Ni siquiera bajo estados hipnóticos –si no se les obliga– las personas actúan de manera contraria a sus creencias más profundas. Y cualquiera que conozca la poca eficacia de la propaganda política podrá entender esta aseveración. No es la propaganda lo que uniforma a las sociedades totalitarias, sino el miedo a la represión. Cuando desaparecen la coacción y el miedo, es fácil comprobar que la propaganda no ha dejado huella en la mente de la mayor parte de la gente.

Sin embargo, los medios de comunicación pueden ser muy ventajosos en la difusión de los ideales democráticos, siempre que se comprenda que es totalmente inútil tratar de defender la libertad y la democracia con huecas campañas propagandísticas. En primer lugar, porque libertad y democracia son dos categorías totalmente distintas.

La libertad no es otra cosa que la posibilidad de tomar decisiones individuales de acuerdo con nuestros credos y conveniencias. A mayor cantidad de decisiones libremente tomadas, mayor satisfacción personal y una mayor sensación de haber cumplido con nuestra propia naturaleza.

La democracia, en cambio, es un método objetivo y racional para organizar colectivamente las decisiones individuales. Es el método más idóneo con que cuenta la sociedad para armonizar la libertad que ejercen los individuos Y ninguna de esas dos categorías –la libertad y la democracia– pueden ser eficazmente *enseñadas o inculcadas* por la vía de los medios de comunicación.

¿Cómo puede la sociedad moderna defender la libertad y blindar la democracia contra sus múltiples enemigos? Evidentemente, formando ciudadanos en el hogar y en la escuela, mediante el contacto personal, para crear personas capaces de comportarse voluntaria y orgullosamente como seres libres que viven en democracia.

Un ser humano educado para la libertad es una persona que debe entender los límites de la responsabilidad individual, que debe contar con rasgos psicológicos que le confieran una cierta fortaleza de carácter, y debe estar consciente de que su tarea más importante consiste en labrarse su propio destino como resultado de sus propias acciones.

La defensa de la democracia, en cambio, es más sutil y difícil porque, como he dicho, no se trata, ni más ni menos, que de un método para conseguir que la sociedad, colectivamente, ordene racionalmente y sin violencia las decisiones individuales, y le dé cauce a los inevitables conflictos.

No debe esperarse, sin embargo, que los miembros de una sociedad cualquiera estén dispuestos a defender ardorosamente la democracia si este método de toma de decisiones no produce los resultados apetecibles.

Eso es importante subrayarlo, porque se da por sentado que la democracia es algo que las personas defienden naturalmente, pero la experiencia y el sentido común conducen a una conclusión bien diferente: la democracia sólo defendida por un número abrumador de ciudadanos cuando se percibe que es un método de gobierno benéfico para la mayor parte de ellos.

No hay demócratas en abstracto. La democracia tiene que funcionar bien para que perdure. Tiene que conseguir niveles crecientes de prosperidad, y tiene que ser administrada una manera eficiente, porque, de lo contrario, la tendencia de muchísimos ciudadanos será prescindir de este método y recurrir a la violencia, a la coacción y a la imposición.

Este carácter utilitario, pragmático, de la democracia demanda de los medios de comunicación cierto comportamiento tremendamente importante. La gran función de los medios de comunicación en las sociedades democráticas es la permanente auditoría, la crítica constante, implacable análisis de cuanto acontece, especialmente, en el sector público. Nunca es excesiva la crítica. Nunca sobra una señal de alerta, aunque a veces pueda ser injusta o parezca excesiva. Los medios de comunicación tienen función, con su ojo avisador, de impedir que el régimen democrático se corrompa por la natural tendencia de los seres humanos a manejar los bienes ajenos como si fueran propios.

Tal vez si todos estuviéramos conscientes de la precariedad del sistema democrático, de la importancia que tiene el hecho de que, como método de toma de decisiones, está obligado a funcionar bien para que prevalezca, acaso nuestra conducta sería mucho más cuidadosa. Nadie debe dar por sentado que la libertad de que hoy disfruta o el sistema democrático en el que vive son fenómenos o formas de vida permanentes. En América Latina nos asombramos y nos dolemos de que, a menudo, se restrinja la libertad y surjan comportamientos antidemocráticos, pero nada de esto debería sorprendernos: el fracaso de la democracia y las restricciones a la libertad no son fenómenos propios de ciudadanos perversos, es sólo la consecuencia de que el sistema no funciona adecuadamente.

Los veinte países más prósperos del mundo, más felices, aquellos que tienen que poner barreras para no llenarse de inmigrantes, son veinte sociedades en las cuales los ciudadanos libres toman sus decisiones colectivas de acuerdo con métodos democráticos. Pero para que ese modo de comportamiento no desaparezca, esos países exitosos están obligados a hacer las cosas de una manera correcta. Están obligados a triunfar. En el momento en el que comience a fallar la eficacia de esos estados, y sobrevenga una crisis prolongada para la que no se vea fin ni alivio, no será

posible sostener ni las libertades individuales ni la democracia. Los ciudadanos pedirán, mayoritariamente, la abolición del sistema, aunque con esta actitud empeoren los problemas en lugar de solucionarlos.

No hay que temerle a la información, por excesiva y apabullante que hoy resulte, pero hay que dedicar un enorme esfuerzo a la formación, a la forja del carácter y a la estructuración valores de los ciudadanos, de manera que la libertad y la democracia no desaparezcan de la faz de la tierra. Ésa es nuestra mayor responsabilidad.

Costa Rica, octubre de 1993

IV PERIODISMO Y DEMOCRACIA

Le agradezco al *Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos* la oportunidad de reflexionar en voz alta, junto a ustedes, sobre el tema «Periodismo y democracia», pie forzado que me obliga a ciertas precisiones previas para poder entendernos con claridad.

Doy por sentado que cuando hablamos de periodismo, en este contexto, estamos pensando en un periodismo libre, crítico, capaz de censurar, de calificar o de alabar sin temor a que las palabras dichas o escritas nos puedan traer consecuencias negativas.

Obviamente, si nos ceñimos a esta definición, la prensa difundida en los sistemas totalitarios no tendría cabida. ¿Por qué? Pues, porque nos referimos al periodismo capaz de examinar la realidad con ojo crítico, y ésa no es la misión del periodismo en las sociedades dictatoriales, sino exactamente la opuesta: ratificar la visión oficial, verificarla constantemente con todo aquello que parezca apoyarla, y desechar, censurar o tergiversar cuanto parezca negarla.

Apoderarse de nuestro lenguaje

Esto es importante subrayarlo, porque la lucha por la libertad consiste, precisamente, en los sacrificios que realizan unas personas por poder examinar sin temores la realidad, y los atropellos que cometen otras personas por impedir que ese libre escrutinio se lleve a cabo.

¿Qué buscan, en último análisis, los tiranos? En realidad no intentan convencernos de sus ideas, ni apropiarse de nuestras conciencias. Se conforman con algo más modesto: apoderarse de nuestro lenguaje. Tratan de robarnos las palabras propias y de obligarnos a repetir las que a ellos les complacen, acto en el que se demuestra la sabiduría que poseen, el calibre de su talento y la infalibilidad del dogma que nos proponen e imponen.

¿Por qué los tiranos hacen algo tan extraño, y al mismo tiempo, tan frecuente? ¿Por qué quieren robarnos nuestras palabras? No es fácil dar con la respuesta, pero me figuro que esas imposiciones, esa voluntad de quitarnos nuestro lenguaje, tienen que ver con el ejercicio del

poder. El poder dictatorial se ejerce, fundamentalmente, orquestando el lenguaje de las personas subordinadas. Se ejerce obligándolas a la repetición coral, forzándolas a una coincidencia artificial de la que los dictadores parece que derivan una intensa autocomplacencia. Esta entrega del lenguaje, naturalmente, también forma parte de esas oscuras ceremonias de vasallaje y servilismo con las que el bicho humano estratifica las jerarquías y establece la posición del yo individual en medio de sus congéneres.

Definición de la democracia

Ahora, ya instalado en esta perspectiva del *periodismo*, me gustaría acercarme a la palabra *democracia*.

Como todos sabemos, la definición más urgente es la de «gobierno de la mayoría», pero enseguida comienzan las perplejidades. ¿La mayoría de los seres humanos es la mayoría de los adultos? ¿A qué edad se es adulto? ¿La mayoría de los que participan y votan o de todas las personas con derecho a votar? ¿La mayoría relativa del que gana con el 10 por ciento de los votos, dada la fragmentación del electorado, o la mayoría absoluta de los sistemas de *ballotage* en que se fuerza el voto entre dos opciones? Cuando se habla de «gobierno de la mayoría» ¿se le otorga a los vencedores la facultad de decidir sin limitaciones, o se marcan unos límites constitucionales que pueden impedir que las mayorías ejerzan su voluntad sin contención?

Lo que quiero decir es que eso a lo que llamamos *democracia* no es más que un método variable de tomar decisiones colectivas. Un método basado en la racionalidad inapelable de la aritmética, pero que requiere un previo acuerdo y una previa reglamentación, pues en materia política 2+2 no siempre son cuatro. Y quien lo dude, –por ejemplo–, puede averiguar cuántos votos necesita un diputado liberal en Inglaterra para salir electo frente a los que necesita un conservador o un laborista. Y si quiere estudiar más de cerca esta deliberada anomalía, le recomiendo que examine con cuidado la «Regla D'Hont» con que en Europa algunos países privilegian los resultados de los partidos mayoritarios en nombre de una mejor gobernabilidad del poder legislativo.

La democracia y la aritmética

Dicho esto, queda claro –repito– que la democracia no es más que un mecanismo para la toma de decisiones colectivas. Un mecanismo basado en una simple premisa anterior que establece que, desaparecido el *soberano*, desaparecidas las monarquías absolutistas que tomaban las decisiones en nombre de todos, la *soberanía* pasó a depender del pueblo. Es decir, había que tomar *entre todos* las decisiones que afectaban a todos, aunque fuera por medio de representantes, y para eso hacía falta un método objetivo, y eso sólo se podía lograr con el auxilio de una curiosa invención que no presentaba incertidumbres: la aritmética.

No obstante, la existencia de un método objetivo para la toma de decisiones –la democracia– no garantiza que esas decisiones sean correctas, ni sabias, ni prudentes, sino que han sido tomadas con arreglo a unas normas en las que no caben valoraciones subjetivas. Una vez puestos de acuerdo sobre la forma de contar y asignar los votos, nadie puede dudar de que 19 es un número mayor que 17 y menor que 21. Y a eso se reduce la democracia.

¿A qué viene, dentro de estas reflexiones, esta humilde definición de la democracia? Viene a cuento de lo que hace unos instantes habíamos dicho del periodismo: el periodismo, el verdadero periodismo, es un examen profundo y sin miedo de la realidad. Es un análisis de lo que aconteció, de lo que ahora está sucediendo, y es una predicción de lo que puede suceder. Es información descriptiva y es juicio valorativo. En otras palabras, es el gran complemento de la democracia porque ayuda, o puede ayudar a que las decisiones que se tomen sean las correctas y no las equivocadas.

Esto quizás explica la enigmática frase de Jefferson cuando afirmó que prefería una sociedad con prensa libre, aunque no fuera una nación soberana, a una nación soberana sin prensa libre. Sencillamente sin prensa libre, y sin la posibilidad de escudriñar la realidad, hay una alta posibilidad de que no tomemos decisiones correctas. ¿Y qué ocurre cuando sistemáticamente, y por un largo período, tomamos las decisiones incorrectas? Pues sucede que en lugar de avergonzarnos por nuestros errores, o en vez de tratar de enmendarlos, lo que solemos hacer es culpar a la democracia, atribuirle *al método* nuestros disparates conceptuales, buscando alivio en alguna forma de autoritarismo.

Es eso –la convocatoria a la mano dura– lo que se oye cuando la pobreza, la corrupción o los escándalos del gobierno colman la copa; es eso lo que solemos ver en América Latina cada vez que algún salvador de la patria sale de los cuarteles a bordo de un tanque a tomar la casa de gobierno.

Información y decisiones

Creo que ahora se puede ver con más claridad la estrecha relación que existe entre la democracia y el buen periodismo: si tenemos que tomar decisiones, mejor será que nos informemos adecuadamente, porque si nos equivocamos con demasiada frecuencia, muchas personas van a comenzar a decir que el método democrático no sirve, y que mejor sería delegar en alguien o en un grupo que asuma nuestros atributos soberanos.

En este punto me gustaría moverme hacia otra zona aledaña aunque un tanto sorprendente. Una vez establecida la relación entre democracia y periodismo, me parece conveniente formular la siguiente pregunta: ¿por qué se me ha pedido que venga a Managua a hablar de estas cosas? ¿Por qué –por ejemplo– es bastante improbable que me convoquen a París a hablar de estos asuntos?

Evidentemente, me han invitado a Nicaragua a abordar este tema porque en este país la democracia no ha dado sus mejores frutos. En este país el *método* no ha funcionado adecuadamente. Los nicaragüenses, sin duda, a duras penas han conseguido tomar las decisiones colectivas con arreglo a las normas democráticas, pero tan grave como eso es que las decisiones, con frecuencia, las han tomado de forma errónea. Han elegido mal lo que se debe hacer, y han escogido mal a quienes deben ejecutar las tareas seleccionadas.

¿Cuál es el panorama que en Nicaragua asoma a los ojos de cualquier observador objetivo? Un país bello y fértil, razonablemente dotado de bienes naturales, con una población cinco veces más pequeña que la de Suiza y Austria combinadas, pese a que la superficie de Nicaragua es semejante a las de esas dos naciones juntas.

Sin embargo, pese a esas ventajas comparativas, Nicaragua es un país más empobrecido que pobre, crispado por las pasiones políticas, con un sesenta por cien de desempleo, y en el que casi toda la sociedad es víctima de un alto grado de incertidumbre. Nadie está seguro de que mañana no va a recomenzar la guerra civil, o de que no va a perder sus propiedades o sus ahorros devorados por el resurgimiento de la inflación o el aumento de la presión fiscal como consecuencia de una disminución de la ayuda internacional, y la simultánea rigidez de la estructura burocrática.

Lo que quiero decir es que este hermoso país, potencialmente próspero y feliz, no ha conseguido lograr esos objetivos, y lleva más de un siglo de continuada oscuridad, a veces interrumpida, como ahora, por unos breves relámpagos democráticos. ¿Por qué esta trágica historia? La explicación pudiera ser notoriamente sencilla: porque la información que históricamente ha prevalecido en la sociedad nicaragüense es totalmente insuficiente, equivocada o sesgada. Y cuando digo *información* me refiero a cualquier clase de conocimiento capaz de inducir un tipo de conducta.

La información es lo que conforma los valores, las creencias y los conocimientos. Y de la suma de valores, creencias y conocimientos en gran medida se deriva la conducta. Una conducta que inexorablemente está orientada a satisfacer los intereses personales... tal y como les damos consistencia de acuerdo con las informaciones que poseemos. De donde se deriva una verdad insoslayable: mientras más y mejor información tengamos a nuestra disposición, más posibilidades tendremos de actuar adecuadamente y de alcanzar el éxito.

Los enemigos de la información

Sin embargo, este criterio no parece ser universalmente aceptado y abundan los enemigos de que la información se difunda sin límites. Por una parte suelen estar los gobiernos autoritarios y los grupos de presión empeñados en limitar lo que se puede decir, esto es, empeñados en limitar el *mensaje*, y de la otra, los sindicatos y los sectores profesionales decididos a indicar quiénes están autorizados a difundir la información o las opiniones en la prensa, es decir, quiénes deben ser los *mensajeros*.

En cuanto a lo primero, deberíamos ser firmes y totalmente claros: todo puede y debe decirse, dejando al criterio del mercado lo que se prefiere o lo que se rechaza. Es cierto que en una sociedad permisiva y tolerante aparecerán publicaciones escandalosas y hasta ofensivas para el criterio de las mayorías, pero los perjuicios que causaría impedir su divulgación son mucho mayores que la tranquilidad de espíritu que les traería a las personas que se sientan agraviadas por su presencia. Al fin y al cabo, si permitimos que el gobierno, a través de leyes y decretos, decida lo que no se puede divulgar, la tendencia creciente será a silenciar todo aquello que encierre alguna forma de censura a la clase dirigente, pues siempre habrá una excusa para proteger la dignidad de los mandatarios, para salvaguardar la moral de la ciudadanía o –como tantas veces se oye–, para no exacerbar los ánimos del pueblo contra las instituciones democráticas. Obviamente, esta defensa de la total libertad de prensa no quiere decir que sea lícito mentir, injuriar, calumniar o desinformar deliberadamente. Hacer eso en una sociedad democrática debe perseguirse y castigarse con arreglo a la ley.

Por otra parte, no se equivocan las sociedades que aborrecen la mentira. Dice la Biblia que *sólo la verdad os hará libres* y me parece que es difícil encerrar más sabiduría en un apotegma de esa brevedad. Sólo las sociedades en las que el perjurio constituye una conducta inaceptable consiguen tener una idea aproximada de la realidad para poder actuar en consecuencia.

No obstante, para el buen funcionamiento de la democracia tan peligrosos resultan quienes quieren ejercer la censura, o quienes renuncian a colocarse bajo la autoridad de la verdad, como quienes pretenden decidir quiénes tienen el derecho a difundir la información.

En efecto, desde hace unos cuantos años, en todo el ámbito iberoamericano ha surgido una fuerte tendencia corporativista que se propone limitar el derecho a ejercer el periodismo a quienes no han pasado por la facultad de comunicación de alguna institución acreditada. El razonamiento que esgrimen los defensores de esta medida se afina en una vidriosa analogía: si a los médicos o a los arquitectos se les licencia para que ellos y sólo ellos puedan ejercer sus profesiones, ¿por qué no ocurre lo mismo con los periodistas? ¿No estudiaron acaso durante cuatro o cinco años?

En realidad se trata de una falsa analogía. No es lo mismo transmitir información u opiniones que hacer un trasplante de hígado o levantar los planos de una central nuclear. La divulgación de informaciones y opiniones –que es lo que hace el periodista– es una propuesta que le hace el comunicador al receptor, y este podrá aceptarla, rechazarla o ignorarla, sin que de ello se deriven consecuencias sustanciales.

Si admitiéramos el principio de que sólo tienen derecho a comunicarse públicamente quienes poseen una licencia otorgada por el Estado, muy bien podríamos concluir que ningún pintor que no haya obtenido formación académica oficial tenga derecho a vender sus cuadros, o ningún músico sin experiencia en el conservatorio podría formar parte de orquestas sinfónicas o de simples cuartetos. Rizando el rizo, y por la misma absurda regla, no es descabellado que se le prohíba jugar béisbol profesional a quien no tenga un título de profesor de Educación Física, o hasta podría exigírsele un doctorado en Filosofía o en Humanidades a quien viniera a Managua a compartir con ustedes unas cuantas reflexiones sobre el periodismo y la democracia, como es hoy mi caso.

Ese camino, obviamente, conduce al disparate y al empobrecimiento cultural de nuestras sociedades. Y si ese criterio hubiera existido en el pasado, no habiéramos podido contar con las crónicas y los periódicos creados por José Martí, Domingo Faustino Sarmiento, Rubén Darío, Rufino Blanco Fombona, Blanco Ibáñez, Gómez Carrillo, Ortega y Gasset y prácticamente todos los grandes escritores y pensadores de nuestra lengua, una lengua, por cierto, que tal vez ha alcanzado sus momentos estelares en las humildes páginas de diarios escritos por *amateurs*, es decir, por amadores de lo que escribían.

¿Quién es –en suma– un buen periodista? El que tiene algo que decir (una información, una opinión), sabe cómo decirlo de una manera atrayente y original, y posee, además, el instinto de colocar el texto en el lugar adecuado y con el rango tipográfico más conveniente. Todo esto, por supuesto, se puede aprender tanto en las escuelas de periodismo, como en la práctica diaria, o hasta en el simple análisis de la prensa escrita, lo que priva de toda seriedad la pretendida necesidad de contar con licencias o permisos para poder ejercer esta curiosa profesión.

Una reflexión parecida tal vez haya que hacerla con relación al debate, un tanto absurdo, sobre quién o quiénes pueden ejercer la libertad de prensa, puesto que hacer un periódico, o poner en el aire una estación de radio o un canal de televisión cuesta mucho dinero y no todo el mundo, o – mejor aún casi nadie–, cuenta con los recursos para crear este tipo de empresa.

Eso es cierto, pero se olvida un detalle básico: quienes realmente deciden la orientación e incluso la existencia de los órganos de comunicación son los lectores, el auditorio y los telespectadores. Es verdad que el director de un periódico decide lo que se debe opinar en su periódico, o lo que se debe informar, pero en las sociedades libres es el mercado, en último término, el que modula y determina el contenido del medio de comunicación, y el que acaba por dictar la pauta de ese medio.

No es sólo por amor a la verdad pura que los medios de comunicación no deben exagerar, mentir o distorsionar los hechos: es porque, si lo hacen, si el público descubre que tratan de engañarlo o manipularlo, acaba por darle la espalda; especialmente, claro, si se trata de una sociedad abierta, en la que el consumidor puede elegir entre diversos medios de obtener información. En suma, y para finalizar, es posible concebir una democracia sin prensa libre y crítica, pero lo más probable es que no durará demasiado tiempo. Por el contrario, una sociedad que cuente con abundantes y enérgicos medios de comunicación, tiene más probabilidades de corregir errores y evitar caminos equivocados. En Nicaragua tenemos una democracia débil, pero la vía de fortalecerla está en fortalecer los medios de comunicación. Es a esto a lo que nunca se debe renunciar si algún día queremos que este país sea próspero y dichoso. Periodismo y democracia, pie forzado que me obliga a ciertas precisiones previas para poder entendernos con claridad.

Doy por sentado que cuando hablamos de periodismo, en ese contexto, estamos pensando en un periodismo libre, crítico, capaz de censurar, de calificar o de alabar sin temor a que las palabras dichas o escritas nos pueden traer consecuencias negativas.

Obviamente, si nos ceñimos a esta definición, la prensa difundida en los sistemas totalitarios no tendría cabida. ¿Por qué? Pues, porque nos referimos al periodismo capaz de examinar la realidad con ojo crítico, y ésa no es la misión del periodismo en las sociedades dictatoriales, sino

exactamente la opuesta: ratificar la visión oficial, verificarla constantemente con todo aquello que parezca apoyarla, y desechar, censurar o tergiversar cuanto parezca negarla.

Managua, 5 de septiembre de 1994

V

EMPRESARIOS Y POLÍTICOS: LA NUEVA REBELIÓN DE LAS MASAS

Hace ya unas cuantas décadas Ortega y Gasset publicó un largo ensayo que tuvo la virtud de llamar la atención sobre un fenómeno de singularísima importancia. Me refiero a *La rebelión de las masas*. El pueblo, si se quiere utilizar una denominación respetuosa, o el populacho, si se le quiere denigrar, demandaba su lugar en la historia y, especialmente, en el puesto de mando. Para Ortega era peligroso que la sociedad no estuviera dirigida por hombres egregios capaces de asumir con mano firme la dirección de los asuntos públicos. Se había perdido el liderazgo de los más ilustrados y la muchedumbre imponía su ley y sus criterios.

Ortega divulgó su ensayo en 1930. En aquellos años hervían las calles con fascistas y comunistas iracundos, convencidos de que una revolución, impuesta por una vanguardia audaz, podría poner fin a milenios de pobreza e injusticia. Fascistas y comunistas se creían en las antípodas, pero eran vecinos en el mismo método terapéutico que le proponían a la sociedad para librarla de sus males seculares.

En todo caso, aunque la situación en nuestros días es mucho más segura y sosegada que la de los años 30, me parece prudente advertir que estamos ante una nueva fase de la rebelión de las masas, pero no ya como una forma de insurgencia ética, estética y política frente al Estado liberal, que es lo que ocurrió en el primer tercio de siglo, sino como una protesta masiva dentro de las reglas de ese Estado liberal que todos hemos acabado por admitir como la menos mala de las formas de gobierno.

Lo que parecen querer los pueblos en nuestros días no es ya la demolición del Estado, como pretendían fascistas y comunistas, sino un cambio sustancial y profundo en su administración. Eso explica la rápida ascensión de Collor de Mello en Brasil, la de Fujimori en Perú, e incluso la aparición en Estados Unidos de alguien como Ross Perot, un millonario que aporta por toda credencial política su condición de *manager* exitoso en la compleja urdimbre empresarial americana. Un Ross Perot que ya se veía venir hace unos años cuando las ilusiones

norteamericanas se ponían en Lee Iacocca. Quien era capaz de salvar a la *Chrysler* podía hacer lo mismo con los Estados Unidos. Incluso, es posible pensar que Carter o Reagan, tan atípicos dentro de la política norteamericana, encarnaban una forma embrionaria de protesta contra el *establishment* tradicional.

Todos esos síntomas parecen indicar un fenómeno extraordinariamente importante: los pueblos, que ya no creen en las revoluciones, también comienzan a cansarse de los partidos políticos convencionales. No resisten un minuto más al tribuno elocuente, al líder carismático, al fogoso orador de barricada. Ser un buen abogado o un general de palo y tentetioso tampoco significa gran cosa. La época de los generales y doctores parece superada. Lo que se quiere es alguien que rápidamente sea capaz de poner orden, restablecer la justicia, detener la inflación, proporcionar empleo y administrar con honradez. Se quiere un gerente para épocas de crisis.

Cuentan que alguna vez, cuando alguien se atrevió a preguntarle a Franco por qué, pese a ser un dictador censurable, contaba con bastante simpatías populares, el viejo caudillo se quedó pensativo y luego afirmó, parece que sin malicia, «será porque nunca me meto en política». La anécdota debe ser apócrifa, pero la moraleja es aplicable a nuestros días. Si la política es el mitin y la maniobra, el discurso y la demagogia, la gente, esa vaporosa abstracción, no quiere oír hablar de política. Quiere oír hablar de administración, de manejo hábil de los recursos, de crecimiento. La gente quiere que se le muestren resultados, y que los políticos dejen de responder a su habitual estereotipo y pasen a ser ejecutivos hábiles de una empresa de servicios comunes a la que llamamos Estado.

Lealtad y eficiencia

Este cambio en la actitud de las personas es lo que acaso explica las súbitas modificaciones en el ánimo de los electores. El pueblo colombiano puede aplaudir hoy al Presidente Gaviria y mañana abuchearlo. Lo mismo le ocurrió a Carlos Andrés Pérez. Las lealtades partidistas, sencillamente, se debilitan día a día, y los pueblos comienzan a vivir la emoción política con un ánimo parecido al de unos accionistas ante la junta directiva de la compañía en la que tienen invertidos sus ahorros. Si el informe trimestral de la junta directiva es venturoso, la aplauden y la ratifican. Si no lo es, la silban y le piden cuentas con cajas destempladas.

De alguna forma, en la conciencia de las masas occidentales –y eso incluye a los latinoamericanos– se ha instalado el modelo empresarial, pragmático y poco dado a los arrebatos líricos, sustituyendo a los abstractos esquemas ideológicos que hasta hace poco parecían gobernar la conducta política.

Si ya ninguna persona sensata puede creer en la conveniencia de dinamitar el Estado y demoler sus instituciones, es decir, si ya no tiene sentido ser revolucionario, la manera de solucionar los problemas de la convivencia hay que buscarla en el mejoramiento creciente de la sociedad, y quienes han perfeccionado ciertos métodos para el análisis y la gestión son los empresarios y no los políticos.

Hoy se sabe que el estadístico norteamericano Demming creó un modo de incrementar constantemente la calidad y el precio de la producción de bienes y servicios totalmente utilizable en el sector público. Y se sabe que las técnicas de marketing son insuperables para conocer *a priori* el estado anímico de la población y proponer fórmulas de consenso. Y se conoce que la forma más eficaz de tomar decisiones no es mediante la corazonada o la intuición súbita, sino mediante el método Delfos para consultar expertos o el análisis DAFO (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) para poder predecir con algún grado de certidumbre los resultados de nuestras decisiones.

Lo que quiero decir es que la visión empresarial de las actividades humanas se ha extendido al universo político, tal vez como paradójica consecuencia de un fenómeno inverso: durante décadas el Estado invadió el terreno de la sociedad civil e hizo metástasis en el mundo empresarial. La experiencia fue fallida, contraproducente, pero en ese intercambio se produjo un trasvase de las categorías y los valores empresariales al sector público y a las masas que demandan un mejor desempeño económico. Hoy el político con más posibilidades de éxito no es el que propone su candidatura apelando a las emociones gregarias primitivas, sino el que es capaz de desplegar sobre la urna un buen proyecto de desarrollo económico y social.

El enorme motor averiado

Esta situación podía preverse, y es la consecuencia de una presunción que comenzó a circular, precisamente, en los años en que Ortega advertía sobre la rebelión de las masas. Por aquella época comenzó a afirmarse la curiosa superstición de que el Estado debía ser el motor de las economías nacionales. Se pensaba que un grupo de planificadores bienintencionados, iluminados por los buenos propósitos que anidaban en sus corazones, podían colocar certeramente las inversiones estatales y los esfuerzos colectivos en la dirección que mejor se adaptaba a los intereses y necesidades de las naciones. El Estado, insisto, iba a convertirse en el gran motor de las economías nacionales. Sólo que todos sabemos cuál fue el destino de esa gran máquina productiva: el despilfarro, la corrupción, el debilitamiento de las instituciones, los atropellos contra los menos poderosos, y un progresivo deterioro de la fe ciudadana en el destino de sus naciones.

En la medida en que crecía el Estado, a expensas de la sociedad civil, victimizando a esa sociedad civil, crecía también el desasosiego y el rencor contra el Estado. Eso explica el espectáculo bochornoso de los peruanos que aplauden al señor Fujimori cuando liquida con un golpe artero la Constitución de su país. Eso también explica la penosa popularidad que alcanzó en Venezuela el teniente coronel Chávez la madrugada en que ordenó el bombardeo de la casa presidencial sin otra consigna política que la de poner *«cara de perro, pecho de tanque y ojo de vidrio»*.

Evidentemente, esa extraña reacción hay que entenderla, y la única explicación que existe para el hecho insólito de que los ciudadanos aplaudan sin reserva la eliminación violenta y arbitraria de las leyes que ellos mismos o sus representantes se han dado, radica en el hecho triste de que esas personas no se ven representadas en el Estado ni protegidas por la legislación. Esas instituciones flamantes son poco más que papel mojado para unos ciudadanos que saben que los tribunales no funcionan, que una parte sustancial de lo que pagan en impuestos va a parar a los bolsillos de personas deshonestas, y de que los vínculos entre ellos y la Administración están signados por la indiferencia, la coima, el abuso y –a veces– la violencia.

Uno de estos fenómenos es especialmente destructivo: la corrupción económica y la consecuente corrupción del sistema legal. ¿Cómo pedirles su adhesión emocional al Estado, al bien común, a unos ciudadanos que saben con toda certeza –cosa que los desmoraliza– que muchos políticos se

enriquecen al amparo de sus cargos, ante la parálisis casi total de unos fiscales para los que no parece existir esta clase de delitos. ¿Cómo asombrarnos de que los latinoamericanos intenten permanentemente evadir los impuestos, o sientan la mayor indiferencia ante la brutal supresión del Estado de Derecho a manos de militares o de civiles inescrupulosos? ¿Son Estados de Derecho los que liquidan los golpistas, o apenas vulgares imitaciones difícilmente creíbles? Espero que nadie piense que estoy justificando esas monstruosas agresiones contra la democracia. Me repugnan profundamente. Estoy seguro de que agravan los problemas. Sólo estoy tratando de entender la insólita conducta de unas personas que aplauden a quienes las privan de sus derechos. Y eso sólo puede explicarlo la tristísima verdad de que estos ciudadanos, sencillamente, no perciben que pierden algo que vale la pena defender.

La gran paradoja

En efecto, todo esto quiere decir algo tan paradójico como interesante: en la medida en que el Estado se ha ido haciendo más grande, y por ende más corrupto e ineficiente, ha ido creciendo la distancia emocional que lo separa de los ciudadanos. Y en la medida en que los políticos han tenido que administrar cuotas mayores del sector público, han ido perdiendo el favor de sus pueblos. Y en la medida en que ha aumentado la alienación de los ciudadanos frente a los macroestados, ha aumentado también su incapacidad para sentir como antes los vínculos que los unían a sus banderías políticas, a sus partidos. Es casi una fórmula matemática: a más Estado, menos lealtad política y menos lealtad ideológica. A más Estado, más distanciamiento emocional de los ciudadanos hacia sus partidos.

Un joven político español, que probablemente algún día será Presidente de Gobierno en España, José María Aznar, dijo recientemente una frase que me gustaría incorporar al texto de este ensayo. Anotó Aznar que la gran tarea de los políticos españoles era conseguir que el pueblo volviera a *enamorarse* de España. A mí me parece que la gran tarea de los políticos latinoamericanos es conseguir que la sociedad vuelva a enamorarse de ellos y recupere su confianza en el destino de sus naciones.

Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra que nuestra gente sienta la Constitución como suya, el gobierno como algo propio, segregado en las urnas de una forma espontánea y natural? ¿Cómo se

consigue poner fin a esta siniestra dicotomía que atrinchera a nuestras sociedades en un bando y coloca frente a ellas a estados que tienen que rodearse de alambre de espino y bayonetas caladas para no caer víctimas de la ira popular?

Hay una fórmula. Y esa fórmula está en la entraña misma de la democracia. Para que no aplaudan a los fujimoris o a los Chávez de este mundo hay que lograr que los políticos sean estrictos en el cumplimiento de la ley y eficientes en el desempeño administrativo. Hay que convertirlos en obligados y temerosos servidores de la sociedad civil. Y mientras no consigamos que una mayoría abrumadora de nuestros ciudadanos sienta que el ejército y la policía, los jueces y los alcaldes, los legisladores y los ministros, son sus humildes servidores, sujetos todos al imperio de la Constitución y las leyes, no vamos a conseguir que se *enamoren* otra vez de nuestras naciones.

Esta proposición lleva implícita una bella y extraña paradoja: la gran batalla de los políticos en este milenio que se nos viene encima consiste en conquistar su propia insignificancia. Hay que luchar por reducir las dimensiones del Estado hasta el punto en que el peso de la sociedad civil sea infinitamente más poderoso. Hay que recortar presupuestos y facultades a nuestros políticos, hasta lograr que el ciudadano de a pie se sienta dueño y señor del país en el que vive, y no un mero inquilino esquilado por una colección de personas en las que suele prevalecer la inconsecuencia, la deshonestidad o la más absoluta incompetencia.

Los partidos políticos del futuro

Y si esto es verdad, si por ahí debe ir el curso de nuestra acción política, ¿cómo deben ser esas estructuras distintas por las que deben emerger los líderes distintos de un mañana distinto? Probablemente los partidos tienen que dejar de ser congregaciones de personas a la búsqueda de seguridad económica y brillo social para pasar a ser organizaciones con planes concretos de acción, con fórmulas verificables que llamen a la razón de los electores y no a sus sentimientos. Ya no es con el himno nacional, o con las invocaciones heroicas con lo que se toca la fibra patriótica de nuestras gentes. Hay que poner sobre la mesa proyectos, balances, auditorías. Hay que hablar un lenguaje claro y sin estribillos, dirigido a la cabeza.

Más todavía: esos partidos políticos tienen que buscar una manera independiente de financiar sus campañas y sus estudios. Y no hay una mejor fórmula para demostrarles a los electores que ellos son aptos para hacer progresar al país que progresar ellos mismos con empresas capaces de nutrir las arcas de la organización a que pertenecen. Hay que hacerlo de otra manera honradamente, en el mercado, porque tampoco es tolerable que la sociedad civil sufra mediante la corrupción o el cohecho la existencia, de nuestras agrupaciones políticas.

Estos nuevos partidos políticos, que surjan a calor de las nuevas tendencias, deberán integrarse en grandes familias ideológicas, porque el fenómeno de globalización de las actividades humanas también afecta al terreno de la política. Probablemente, ya no sirven las grandes formaciones de aluvión, donde se daban cita quienes defendían modelos distintos de Estado. En nuestros días es indispensable una mínima coherencia que permita perfilar un proyecto discernible. Algo que se pueda entender cabal y racionalmente, concebido con el mismo rigor con que los altos ejecutivos de una empresa se reúnen para definir las características de un producto que van a sacar al mercado y con el cual esperan conquistar la adhesión de los consumidores.

Lo que está ocurriendo en el mundo de la política, y es mejor que todos nos percatemos de ello rápidamente, es un trasvase de las normas empresariales. Y si todos aceptamos que hay que someterse al consejo de los expertos en imagen y de los publicitarios, no tardaremos en admitir que otros instrumentos de la gestión empresarial pueden y deben ser utilizados, primero en las proposiciones de los partidos políticos, y luego en la administración del Estado.

Sencillamente, el hombre y la mujer de nuestros días se han vuelto mucho más exigentes en todo, incluida la política. Y de la misma manera que son consumidores astutos que intentan que no les den gato por liebre en el mercado, asimismo adquirirán o cambiarán su filiación política de acuerdo con unas expectativas que deberán ser satisfechas de una manera adecuada.

Lo que estoy diciendo es que el triunfo del mercado y la reivindicación de la preponderancia de la sociedad civil sobre el gobierno, y su imperio sobre el Estado, es una profunda transformación de la manera en que nosotros nos relacionamos políticamente.

No es difícil de entender: si deseamos que nuestras sociedades respeten a nuestros políticos y los elijan con orgullo, tenemos que comenzar por hacerlos respetables, y no hay manera más transparente de demostrar la viabilidad de las propuestas políticas que constatar en la práctica la capacidad del grupo para autosostenerse y favorecer, de paso, a la sociedad a la que quiere servir.

Cuando termine este siglo, apenas dentro de unos cuantos años, el mundo contará con unos 25 millones de científicos y técnicos que cada 10 años –el acelerón no es todavía mayor– duplicarán los conocimientos y los modos de producción que atesora nuestra civilización planetaria. La dirección en que todo se mueve tiene un rasgo clarísimo: la búsqueda de la eficiencia, y la eficiencia se traduce en rapidez y creatividad. Esa tendencia está también presente en la política. A nuestros partidos se les demandará lo mismo que a las fábricas de automóviles o a las compañías de seguros: eficiencia, rapidez y fiabilidad. Sólo que para llevar adelante la regeneración de la vida política latinoamericana no hay demasiado tiempo. Nuestros pueblos parecen haber perdido la paciencia.

Colombia, junio de 1992

VI
**AMÉRICA LATINA:
DE LA DEMOCRACIA OFICIAL A LA DEMOCRACIA REAL**

A fines del siglo XVIII la clase dirigente norteamericana rompió a cañonazos los vínculos de subordinación política y económica que hasta entonces tenía con Londres. Fue aquél, en esencia, un pleito de familia iniciado por la joven América cuando Inglaterra, de forma inconsulta, se extralimitó en las exacciones fiscales e intentó recortar las grandes facultades de autogobierno de que disfrutaban sus súbditos de ultramar. Autogobierno, por cierto, que no era siquiera un fenómeno reciente, porque los peregrinos del *Mayflower*, en noviembre de 1619, cuando aún no habían desembarcado, a bordo todavía de la nave, aprobaron un documento por el que establecían la forma democrática en que se organizaría la convivencia en América. Y, en efecto, diez años más tarde, en 1629, la Corona inglesa reconocía y perfeccionaba este alto grado de autonomía confiriéndoles a los colonizadores el derecho a hacer sus propias leyes, fijar el monto de los impuestos y elegir su propio gobernador.

Por supuesto, toda esa protodemocracia americana estaba teñida de fanatismo religioso, inflexibilidad y represión moral, como era normal en la época, pero el hecho de recordar aquí y ahora este episodio histórico tiene un objetivo muy claro: advertir, con cierta melancolía, que donde las libertades republicanas, los derechos civiles y la democracia liberal han dado sus mejores y más permanentes frutos, ha sido donde ese sistema ha surgido de manera espontánea por el pueblo que lo disfruta. Estados Unidos segregó la democracia de una forma natural, casi orgánica. Nosotros en América Latina la hemos parido con la ayuda de fórceps, y esa diferencia tal vez explique las dificultades y contratiempos que periódicamente nos vemos obligados a afrontar cuando se estremecen los cimientos de nuestras repúblicas.

Hoy, cuando revisamos con cierto asombro y admiración las *Leyes de Indias* promulgadas desde Sevilla, o analizamos las instituciones legadas por Castilla para el gobierno de los territorios americanos, nos olvidamos de que ese minucioso control, aunque estaba frecuentemente imbuido

de las mejores intenciones, probablemente limitó las posibilidades de que la democracia arraigara fuertemente en América.

El sistema y la gente

Hago esta observación porque se me ha pedido que reflexione sobre el estado de la democracia en América Latina en el momento actual y lo que hay que hacer para llegar a gozar de una verdadera democracia liberal. Y lo primero que quiero advertir es que el hecho de que hoy prácticamente todo nuestro Continente, con las lamentables excepciones de Cuba, Haití y –en gran medida– Perú, cuenten con gobiernos electos en las urnas, no significa en modo alguno que la democracia haya triunfado de manera permanente en América Latina. Lo que ha triunfado, coyunturalmente, son las formas democráticas, con el multipartidismo, la urna y el rito electoral, pero no la democracia como un conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad, salvo en el caso ejemplar pero muy pequeño y aislado de Costa Rica, y quizás, en menor grado, de Chile y Uruguay. De lo contrario, no se explicaría el apoyo de una gran parte de los venezolanos al fallido intento de golpe militar del teniente coronel Chávez, o la entusiasta reacción del setenta por ciento de los peruanos a la arbitraria abolición de la Constitución y del Parlamento llevada a cabo por el ingeniero Alberto Fujimori.

Vuelvo, pues, al origen de estos papeles para que se comprenda a fondo lo que pretendo decir: cuando los norteamericanos se lanzaron a la lucha contra Inglaterra lo hicieron en defensa de sus reglas y derechos conculcados ilegalmente por la Corona británica. Era una revolución en nombre de la ley y el orden. Una revolución, si se quiere, conservadora, en la medida en que pretendía conservar las conquistas autonómicas logradas por los estadounidenses a lo largo de siglo y medio. Defendían sus leyes, su voluntad soberana expresada en normas de autogobierno que los ingleses pretendían desconocer o anular. Obviamente, ese comportamiento rebelde, a todas luces, parecía razonable. Era perfectamente lógico. Los norteamericanos empuñaban las armas porque se sentían víctimas de una injusticia: los querían privar del modo de gobierno que ellos mismos habían seleccionado.

Contrastemos ahora esa conducta con la de los venezolanos y peruanos frente al golpismo. ¿Qué vemos de inmediato? Pues un espectáculo aparentemente insólito: unos y otros aplauden la

supresión de sus derechos, el fin brutal del marco jurídico que regula la propia convivencia ciudadana; la destrucción de la voluntad soberana supuestamente expresada en constituciones sometidas a referéndum; la desautorización de gobiernos o parlamentos que habían recibido el voto popular. ¿Cómo se explica que tantos venezolanos y tantos peruanos –y me atrevería a decir tantos iberoamericanos– estén dispuestos a liquidar violentamente el sistema en el que viven y al que le han dado su aprobación? La respuesta es bastante obvia: porque no sienten que el sistema les pertenece, y mucho menos que el gobierno administra el bien común, el parlamento los representa y legisla para la felicidad colectiva, o que el sistema judicial dirime ecuánimemente las disputas que surgen. Para la inmensa mayoría de los latinoamericanos la democracia es una abstracción sin contenido real, el gobierno algo así como una burocracia insolente y abusadora que roba o despilfarra impunemente, mientras los parlamentos, cuando no son corruptos, apenas pudieran clasificarse como estériles sociedades de debates. No se trata, pues, de que los latinoamericanos sean antidemocráticos por naturaleza, sino de que no viven la democracia como una experiencia personal en la que ellos están voluntariamente inmersos, sino la padecen como una imposición extraña, como una coyunda a la que de mala gana se ven sometidos.

La coherencia

Este triste diagnóstico nos conduce a un razonamiento inexorable: si queremos que la democracia sobreviva en nuestro Continente, tenemos que lograr que nuestros pueblos se identifiquen de forma natural con este sistema, lo perciban como algo propio, lo sientan como un modo de vida voluntariamente asumido. Es decir: tenemos que lograr que exista una total coherencia entre la sociedad y la forma en que esa sociedad comparte la vida comunitaria. Y mientras no lo logremos, mientras no consigamos segregar la democracia de manera espontánea, vamos a vivir permanentemente al borde del autoritarismo y la arbitrariedad.

¿Cómo se logra ese milagro? Ante todo, hay que aceptar con total realismo una de las más viejas lecciones que dicta la experiencia: los seres humanos acogen y aplauden lo que les beneficia y rechazan lo que les perjudica. La razón por la cual los norteamericanos de fines del XVIII –por lo menos los blancos y propietarios de la clase dirigente– suscribían los valores democráticos y estaban dispuestos a morir (o matar) por ellos, era porque el sistema de autogobierno y leyes

propias mayoritariamente aprobadas les había beneficiado. A fines del XVIII las trece colonias americanas constituían uno de los espacios más ricos y mejor educados del planeta. Para los estándares de la época, Boston, Philadelphia o New York eran sitios excepcionalmente limpios, ordenados y prósperos, como puede comprobar cualquiera que se asome a los sorprendidos papeles que dejó escrito alguien tan culto y perspicaz como Francisco de Miranda. De manera que el primer objetivo de nuestras democracias, para que puedan perdurar, tiene que ser el de servir eficazmente para las finalidades individuales de la mayor parte de los ciudadanos, puesto que nadie aplaude lo que le hace daño o lo que no le brinda ventajas concretas.

La segunda e inescapable observación es que no sólo el sistema tiene que servir a los ciudadanos, sino que quienes administran el sistema tienen que asumir humildemente el rol de servidores públicos, pues de lo contrario los ciudadanos jamás van a creer que ellos son los amos y señores de un Estado de Derecho regulado por leyes que no establecen distinción entre las personas.

Seamos totalmente sinceros: ¿cuál es en nuestros países la relación entre los políticos electos y funcionarios, de una parte, y el ciudadano de a pie, de la otra? Cuando un latinoamericano corriente y doliente está frente a un ministro, un general, un diputado, un juez, o un simple policía ¿percibe a su encumbrado compatriota como un simple servidor obligado a prestarle un servicio por el que se le paga con los dineros del pueblo, o percibe a una autoridad superior a la que debe rendirle pleitesía y dar muestras de sumisión y obediencia, porque estos personajes disfrutan de una jerarquía, de una capacidad para dispensar favores excepcionales y de un poder que no aparecen recogidos en las leyes, pero que la tradición, desdichadamente se ha encargado de consagrar?

No debe haber duda: para que la democracia sea posible hay que comenzar por educar a la clase dirigente. Hay que transformar a los líderes y próceres en simples y temerosos servidores públicos. Hay que explicarle mil veces a la burocracia gubernamental esa verdad tan simple y tan ignorada de que no es otra cosa que una masa asalariada por las riquezas que la sociedad produce.

¿Cómo puede extrañarnos que los latinoamericanos se sientan alejados del sistema en el que viven, si quienes lo administran no se comportan como los servidores públicos que debían ser, sino como

capos soberbios y crueles, más propios de las satrapías que de las genuinas democracias occidentales? ¿Por qué pedirles a los latinoamericanos su adhesión emocional a la democracia si el acatamiento igualitario de las leyes no suele incluir a una clase dirigente que viola las reglas todos los días con absoluta impunidad? ¿Por qué va a importarles a un venezolano, a un peruano o a casi cualquier latinoamericano que un militarote o un presidente desaprensivo elimine o vulnere las leyes del país, si esas leyes previamente no habían sido respetadas por la clase dirigente violentamente desalojada del poder?

Eso no quiere decir que en otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, no existan la corrupción y la venalidad. Lo que no existe es la impunidad. En las democracias que realmente funcionan, las leyes y los tribunales no hacen excepciones, como se vio en el famoso *Water gate*, y como ahora comprobamos en la interminable indagación sobre el *Iran gate* y la *Contra* nicaragüense. Por eso sería inconcebible que los norteamericanos saliesen a las calles a aplaudir a un golpista. Para un norteamericano, para cualquier verdadero demócrata, las leyes y la Constitución forman parte de su patrimonio espiritual. Son suyas. Las han hecho ellos y para ellos. Por eso las defienden. Por eso mismo nosotros no las defendemos.

La sociedad fragmentada

El divorcio latinoamericano entre las personas de carne y hueso y el gobierno, entre el pueblo y el sistema por el que se rige, conlleva otra fatal consecuencia: la fragmentación de la sociedad en grupos adversarios que muestran su insatisfacción por medio de una actitud permanentemente hostil hacia los otros estamentos. No constituimos naciones que se mueven armónicamente hacia el futuro. En lugar de la colaboración, hemos optado por la permanente confrontación. Los ejércitos o los cuerpos policíacos frecuentemente no se comportan como agentes del orden, sino como bárbaras tropas de ocupación desplegadas en países extranjeros. Los estudiantes no son unos jóvenes que dedican sus energías a adquirir conocimientos para superarse ellos mismos y contribuir al bienestar nacional, sino son, tienen que ser, se espera que sean, rebeldes profesionales que apedrean autobuses y recurren a la huelga, al motín callejero y a la algarabía para protestar por todo aquello que les molesta. Lo que no puede sorprendernos demasiado si sabemos que sus profesores, asiduamente, les transmiten un corrosivo desprecio por el modelo de sociedad en el que viven. No los conducen a la protesta cívica ni les enseñan las virtudes de la

moderación, la prudencia o el debate sereno. Por el contrario, les indican que es en el encontronazo y en la violencia donde se encuentra la solución a los problemas nacionales.

Sin embargo, también estamos obligados a entender la profunda tragedia que afecta a nuestras universidades y a su plantilla de profesores. Suelen estar mal dotadas de recursos, abarrotadas, desorganizadas, padecen niveles técnicos y científicos penosos, se mantienen alejadas de la investigación seria, son refractarias a la originalidad y a la creación, pero quizás lo peor es que apenas mantienen vínculos con la sociedad circundante. No están conectadas con su entorno. No poseen vasos comunicantes con la industria, el comercio, los laboratorios científicos, y mucho menos con el gobierno. Es como si existieran en el vacío, encerradas en una campana neumática que les deja pasar la luz; una campana neumática en la que ven y son vistas, pero desde la cual no alcanzan a dejar oír su voz, porque se han alejado tanto de la realidad que apenas interesa lo que tengan que decir. No creo que nadie pueda ignorar la profundidad de este desconsolador rasgo de América Latina, puesto que es evidente el daño que le produce a cualquier sociedad el hecho monstruoso de que su cerebro se mantenga rencorosamente separado de su cuerpo, y las universidades, aunque nos pese, son nuestros cerebros más calificados.

Por supuesto, ese fenómeno de aislamiento no es privativo –desgraciadamente– de políticos, militares, y del mundo universitario: en mayor o menor medida ésa es también la actitud insolidaria de numerosos sindicatos y de otras instituciones gremiales o empresariales. No son capaces de identificar una zona de bien común y defienden hasta el suicidio colectivo lo que ellos creen que son sus intereses, como han demostrado –por ejemplo– los devastadores sindicatos argentinos.

El cuarto poder

¿Cómo se logra poner fin a esta permanente guerra de taifas que subyace en las sociedades latinoamericanas? Nos pasamos la vida hablando de la integración entre nuestros países y no nos damos cuenta de que la zanja más peligrosa no es la que está en las fronteras, sino la que yace en el seno de nuestros propios pueblos. Esa raya erizada de alambre de espino que atomiza en grupos adversarios los esfuerzos de nuestros pueblos e impide que nos movamos con seguridad hacia un mejor destino.

Retomo la pregunta: ¿cómo integrar de una manera armónica los distintos estamentos que componen nuestras sociedades? ¿Cómo reconciliar a las gentes con el sistema? ¿Cómo lograr que ese pueblo escéptico e irritado perciba al gobierno como algo suyo y a las instituciones del Estado como entidades propias y legítimas en las que se gestionan los asuntos comunes de una manera eficiente y justa?

Tal vez sea útil un rediseño de la esfera gubernamental, porque es ahí donde radica el mayor foco de insatisfacciones. Y la manera más rápida y directa de comenzar la metamorfosis quizás sea establecer una clara distinción entre gobierno y Estado, situando a la cabeza del Estado, para proteger los intereses de la sociedad, a un presidente electo por voto directo, que haga las veces de Defensor del Pueblo, contralor y permanente látigo de la burocracia, mientras la labor de gobierno se le deja a un Primer Ministro nombrado por el Parlamento. En ese esquema el pueblo tendría en el Presidente lo que los romanos tenían en el Tribuno de la Plebe, los escandinavos poseen en su *ombudsman* y las sociedades medievales en ciertos reyes de los que se podía esperar la súbita reparación de las injusticias.

Lo que estoy proponiendo es la creación de un cuarto poder: el poder social, y me refiero –claro– a la prensa. Estoy sugiriendo que se cree una instancia directa entre la sociedad y el gobierno que le dé contenido real al sistema democrático. Un poder capaz de exigirles a los tribunales que cumplan las funciones para las que fueron creados; con legitimidad bastante para no autorizar el gasto injustificado o sospechoso, o para exigir una auditoría inmediata cuando los síntomas de la corrupción sean evidentes; un poder que separe de sus funciones al militar que se extralimitó, al burócrata venal, prevaricador o incontrolablemente torpe. Un poder al que los ciudadanos sin peso social o sin recursos puedan dirigirse para corregir rápidamente una injusticia. Un poder que no sufra el desgaste de los malos gobiernos, sino que se crezca ante ellos, fortaleciendo la confianza del pueblo en el sistema, al tiempo que contribuya a modificar las peores actitudes del sector público.

¿Es utópico plantear un cambio de esta naturaleza en un continente en el que el presidencialismo parece estar tan arraigado? Quizás no lo sea tanto. En América Latina todos, o casi todos,

estamos convencidos de que hay que intentar unas medidas excepcionales para conseguir que nuestros pueblos se acerquen a los gobiernos. Por otra parte, cuando nuestros constitucionalistas calcaron el presidencialismo norteamericano, no tuvieron en cuenta las peculiares circunstancias en las que había surgido esa institución, ignorando que era el producto de las riñas y celos entre estados deseosos de preservar su autonomía, elemento que no pertenece, ciertamente, a nuestra realidad histórica.

Por el contrario, este semiparlamentarismo que ahora propongo, concebido para los problemas particulares que nos afectan, tendría, además, otra extraordinaria virtud: serviría para disolver sin traumas los gobiernos que hubiesen perdido el respaldo mayoritario antes de terminar su período. ¿Por qué mantener en el puesto de mando a alguien que ya no satisface la voluntad popular? Y, sin embargo, ¿por qué prohibirle que continúe gobernando cuando el pueblo está satisfecho con su labor? Son tantas las ventajas de crear una presidencia que enérgicamente represente al Estado, a la sociedad, y un premierato que se dedique a gobernar, que no dudo que esta propuesta pueda ser admitida por muchos políticos latinoamericanos de talante liberal.

El fin de la segmentación

Naturalmente, la creación de ese cuarto poder, aunque sería utilísimo, no podría por sí solo poner fin a la profunda segmentación que afecta a nuestra sociedad. El gobierno tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor por romper las barreras que separan a los distintos estamentos sociales.

Esa quizás no sea una tarea imposible. Y donde acaso resulte más sencilla de llevar a cabo es en la integración de la universidad a las tareas de la administración del Estado. ¿Por qué no se sientan los representantes de los Ministerios de Salud en las facultades de Medicina? ¿Por qué el Decano de la Escuela de Medicina –o quienes se designe– no toma parte en las decisiones del Ministerio de Salud? ¿Por qué los laboratorios médicos o las compañías de seguros que operan en el campo de la salud, o los colegios profesionales pertinentes no forman parte de consejos consultivos integrados a la labor de gobierno? ¿Por qué no se utiliza a los estudiantes como fuerza laboral en su zona de especialización?

Por supuesto, este ejemplo, reducido a la Facultad de Medicina por razones de brevedad, puede extenderse a casi todo el ámbito de las actividades profesionales y académicas. ¿Por qué los estudiantes de Derecho no pasan una buena parte de su tiempo en las notarías, los penales, los juzgados, o las comisarías? ¿Por qué las academias de policía no funcionan como una dependencia más de la Facultad de Derecho, no lejos de las escuelas normales o de enfermería? ¿No estamos todos de acuerdo en que cuidar el orden es algo tan necesario como enseñar a leer o a coser las heridas? ¿Por qué, entonces, se margina a los policías y militares? ¿No sería mucho más razonable romper los guetos castrenses e integrar a militares y policías con el resto de la sociedad? ¿No debería haber en nuestras universidades facultades de criminología capaces de formar los muy importantes cuerpos de seguridad?

Lo que quiero decir es que para lograr el triunfo de esa democracia liberal que todos deseamos, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo descomunal para concertar sus actividades con la sociedad civil, incorporarla, consultarla, y en muchos casos, devolverle totalmente la responsabilidad de tomar las grandes decisiones nacionales.

¿Por qué los gobiernos tienen que precisar, en la cúspide, lo que se enseña en las escuelas o en las universidades? ¿No es mucho más sensato que esas instituciones se autorregulen de manera autónoma? Es verdad que Estados Unidos no es el mejor modelo educacional en nuestros días, pero no es menos cierto que lo más admirable de ese sistema, las escuelas de estudios universitarios especializados –las *graduate schools*– tienen sus propios mecanismos de verificación de calidad, pactados entre las propias instituciones, y sin que Washington tenga absolutamente nada que opinar.

¿Qué hace el gobierno, por ejemplo, otorgando licencias de conducir? ¿No es esa actividad algo que compete a un ciudadano que quiere guiar un coche, una persona o una escuela que lo enseña a hacerlo y una compañía que debe asegurarlo? ¿No es preferible que ese permiso lo extienda un organismo creado entre quienes tienen un interés real y legítimo en el asunto, marginando al gobierno de una actividad en la que sólo va a añadir torpeza, burocracia y corrupción?

Porque otra forma de acercar la democracia a nuestras sociedades consiste en aligerar al gobierno de tareas innecesarias y costosas que inevitablemente va a desempeñar mal, enconando los ánimos de una población ya exasperada por la ineficiencia del aparato burocrático. Lo que nos devela una de las más hermosas paradojas del recetario liberal: los políticos liberales, si son honestos y consecuentes con su credo, tienen que luchar por conquistar su propia insignificancia. Tienen que conseguir que el peso de la sociedad civil sea infinitamente mayor que el del sector público, de manera que sea posible el milagro de la eficiencia, la productividad y la creación de riquezas, elementos en los que también descansa el apoyo al sistema democrático.

Esto es conveniente subrayarlo una y otra vez, porque la más destructiva mentira que hoy se escucha en nuestras tierras es ésta que comienza por admitir, a regañadientes, el fracaso del modelo marxista, para a continuación afirmar que la democracia y la economía de mercado tampoco han funcionado en América Latina, dejándonos así en el más absoluto desamparo. Y eso, sencillamente, no es cierto. La democracia sí funciona, pero hay que hacer las cosas bien, y creo que los liberales saben o deben saber cómo hacerlas correctamente.

En América Latina nosotros hemos perdido mucho tiempo y hemos derramado mucha sangre porque nuestros pueblos, y aun los grupos dirigentes, ignoran demasiadas verdades elementales. Este es el momento de eliminar esas carencias para que, algún día, nuestros hijos puedan sentirse orgullosos de la patria que le entregan sus mayores. Y hay que comenzar cuanto antes, porque – como dice la manida frase– para luego es tarde. Quizás demasiado tarde.

Caracas, 28 de noviembre de 1992

VII

LA CULTURA DE LA PAZ

Les agradezco al gobierno salvadoreño y a los dignatarios de la UNESCO la oportunidad de participar en este *Primer Foro Internacional de Cultura de Paz*. Supongo que la deferencia de invitarme a compartir con ustedes ciertas reflexiones se deriva de mi condición de escritor preocupado por estos temas –temas a los que, de alguna manera, he dedicado veinticinco años–, pero también me gustaría creer que la convocatoria encierra otra noble intención: contribuir generosamente a la solución de la crisis cubana. No me sorprendería que así fuese, porque el Presidente Cristiani, a lo largo de todo su mandato, siempre ha mostrado una infatigable voluntad de ayudar a los cubanos moderados que buscan una transición pacífica hacia la democracia y la libertad.

En efecto, presido un partido político liberal que desde 1990 forma parte de una coalición en la que nos acompañan los democristianos y los socialdemócratas. Esta coalición, creada en Madrid, se denomina Plataforma Democrática Cubana, posee y cultiva vastísimas relaciones internacionales, tiene ramificaciones más o menos encubiertas en Cuba, y su objetivo es muy sencillo de explicar, aunque bastante difícil de llevar a cabo: conseguir que la sociedad cubana exprese sus preferencias libremente en unas elecciones. Deseamos, por medios pacíficos, poner fin a la dictadura de partido único, y echar las bases de un Estado de Derecho en el que no se persiga a nadie por las ideas que sustente. No queremos venganzas ni revanchas, pero deseamos ardientemente la llegada de ese día feliz de soltar los prisioneros, como decía el poeta Andrés Bello.

Hago esta introducción a mi ponencia para que se entienda lo extraordinariamente importante que este Foro resulta para nosotros los cubanos. Para muchas de las personas aquí reunidas la idea de crear una metodología para la obtención y la preservación de la paz constituye un reto intelectual o una causa digna de apoyo, pero para nosotros es algo mucho más trascendente: se trata de una esperanza.

La triste historia de mi país puede resumirse en una melancólica oración: perdimos el primer siglo de autogobierno y de vida republicana porque no supimos conjurar los fantasmas de la violencia. Nos pasamos cien años ensayando atajos revolucionarios para alcanzar la gloria, y estamos a punto de terminar en el lugar exacto del comienzo: un país hambreado, gobernado despóticamente, en el que se vive bajo la diabólica certeza de que mañana será peor que hoy.

Ese país –Cuba– está regido por un sistema históricamente agotado, sin posibilidades de revitalización, y bajo la autoridad de un líder que pertenece al pasado, aunque la terquedad le impida examinar la evidencia de los hechos. Sólo que la indiferencia ante la realidad no salva a nadie de las consecuencias de sus actos. Algún día, quizás más pronto de lo que nadie pueda imaginar, comenzará a abrirse paso la razón.

Un pie forzado

Bien: se me ha pedido que reflexione sobre los posibles aportes nacionales y regionales para el establecimiento de una cultura de paz en El Salvador. En realidad este punto de partida, este pie forzado, se me antoja como algo artificial. En un principio pensé abordar el tema desde el ángulo de la desmilitarización de Centroamérica, pero luego desistí del empeño. En esta zona de América se ha hablado mucho sobre la desmilitarización del Istmo, como un elemento de ayuda a la democratización, y no parece una mala idea. Diría más: me parece una magnífica proposición –en la que se ha empeñado brillantemente D.Oscar Arias–, pero la ausencia de un ejército convencional no impide que el poder se pueda ejercer brutalmente, como demuestra el desalentador caso haitiano. En Haití no han hecho falta tanques y aviones para someter a la población a una brutal tiranía. Para que eso ocurra basta con que las llamadas fuerzas del orden, cualesquiera que sean, estén dispuestas a matar. La inexistencia de ejércitos evita, eso sí, guerras internacionales, pero ése no es el gran riesgo en América Latina. Los conflictos fronterizos en nuestro continente han perdido toda su potencial virulencia en la medida en que la solución se ha puesto en manos de acreditados árbitros supranacionales.

También debe ser cierto –por lo menos en América Latina– que el sistema democrático duerme más tranquilo cuando no hay un poder militar amenazando desde la sombra, pero ese sosiego es siempre relativo. Ningún Estado puede prescindir de la existencia de unas fuerzas armadas capaces

de mantener el orden, y no hay forma humana de impedir que esos grupos castrenses se apoderen de los resortes del gobierno aunque carezcan de una gran parafernalia militar. La Guardia Nacional panameña –por ejemplo– era poco más que una policía brava cuando el Coronel Torrijos dio su golpe a fines de la década de los sesenta. Luego se convirtió en un ejército desproporcionado para las dimensiones país, pero no fue con aviones y carros de combate con lo que Noriega se sostuvo en el poder hasta la llegada de los *marines*, sino con los sicarios de palo y tentetieso. Con los esbirros decididos a matar y a torturar.

Tampoco parece que la clave esté en prohibir o esconder las armas. Siempre será posible traerlas de contrabando, porque siempre habrá alguien deseoso de hacer un buen negocio. Además, no es tan obvio que sean las armas lo que causa la muerte violenta. Nadie ignora que los suizos guardan las armas del servicio militar en sus casas y, sin embargo, no las utilizan para matarse unos a otros o para derrocar al gobierno. No es por ahí –nunca mejor dicho– por donde van los tiros. El asunto – como inteligentemente ha explicado más de una vez David Escobar Galindo– radica en el corazón de las personas. En los valores que sustentan y en las creencias que tienen. En última instancia, es en esos elementos intangibles en los que descansan las democracias. Por eso, cuando los salvadoreños comenzaron a negociar la paz dieron una buena muestra de sentido común. Cuando se atrevieron a darse la mano por encima de una montaña de cadáveres, demostraron que eran gente, realmente, valiente. Valientes para enfrentarse a los fundamentalistas de uno y otro bando. Valientes para tragarse los agravios. Valientes para entender que, a veces, hay que olvidar las ilusiones, renunciar a la victoria, y enterrar el pasado para poder salvar el futuro. Pero probablemente mucho más importante que esa hazaña de la política y de la diplomacia –recogida por todos los periódicos del mundo–, es la creación de este extraordinario programa o proyecto pedagógico encaminado a crear en el país lo que ya se llama una *cultura de la paz*.

Un problema más hondo que la guerra

Ahí ya hay el reconocimiento explícito de que la lucha que hubo entre salvadoreños de izquierda y de derecha –por recurrir a unas etiquetas que tienen muy poco significado real– no se había originado en dos concepciones distintas de la vida o de la cosa pública, sino en la incapacidad que mostraba esta sociedad para resolver sus conflictos pacíficamente. Es decir: con la búsqueda de la *cultura de la paz* los salvadoreños conseguían remontar el sangriento episodio de la guerra civil y

desechaban las interpretaciones superficiales de siempre. Era válido preguntarse por qué estalló el conflicto, pero si se hurgaba más profundamente se llegaba al meollo de la cuestión: qué factor había en la sociedad salvadoreña que hacía posible el surgimiento de una conducta fratricida. ¿Por qué no existían mecanismos inhibitorios capaces de frenar la guerra en el seno de una comunidad que suele ser extraordinariamente amable y laboriosa en circunstancias normales? ¿Por qué los dirigentes políticos no fueron capaces de encontrar formas de consenso antes de que comenzaran a sonar los balazos? ¿Qué íntima locura provocó en este pueblo una catástrofe que arrebató más vidas en una década todos los desastres naturales padecidos por el país desde 1492 a la fecha?

Podría decirse que los setenta y ochenta fueron años de subversión inspirada desde el extranjero, pero esa aseveración, aunque cierta, no es del todo satisfactoria. La vecina república de Costa Rica no padeció los horrores de una guerra civil, pese a que también hubo ticos seducidos por la violencia revolucionaria. Podría pensarse que las desigualdades, la pobreza y la falta de oportunidades tiraron del gatillo, pero aún peores circunstancias podían encontrarse en Honduras, en Bolivia o en Haití, y en ninguno de esos tres países ocurrió algo parecido a lo que sucedió en El Salvador.

Por eso me parece una admirable prueba de lúcida madurez admitir que las causas de esta guerra terrible no estaban en los discursos de la izquierda o de la derecha, o en sus interpretaciones ideológicas, sino en la forma en que los salvadoreños se relacionaban, en los valores que tenían, en el modo de resolver sus diferencias, en las creencias que sustentaban. Pretender –como ahora pretenden los salvadoreños– crear una *cultura de paz* es aceptar que hay algo por encima o por debajo de las posiciones políticas que había fallado y que hay que corregir para que nunca más vuelva a desencadenarse la matanza.

Naturalmente, se trata de un proyecto difícil, muy difícil, pero no imposible. Los pueblos, como las personas, pueden cambiar sus modos de comportamiento. Al fin y al cabo, los pueblos no son otra cosa que una suma de personas, y basta con que un número crítico de ciudadanos modifique su forma de actuar para que cambie el signo de estas sociedades.

Generalmente, y como es previsible, el cambio se produce después de una gran tragedia. Es posible que para los salvadoreños la lección de los últimos años haya sido lo suficientemente energética como para cambiar el rumbo de la nación. Es posible que esa paz difícilmente ganada no sea un punto y seguido, sino un punto y aparte. Un cambio real y profundo que modifique para siempre el curso de la historia.

Ingeniería cultural

Sin embargo, los procesos de cambio colectivo de actitud que conocemos tienen en común un rasgo que no está presente en el caso salvadoreño: surgieron más o menos espontáneamente. Nadie los dirigió. Sencillamente, ante una sacudida histórica, la mayor parte de la ciudadanía comenzó a comportarse de otro modo. En El Salvador –en cambio– el fenómeno parece ser conscientemente inducido. O tal vez se trate de una reacción ante un estado de ánimo generalizado, pero –en cualquier caso– estamos ante un clarísimo ejemplo de *ingeniería cultural*. Hay el propósito de cambiar voluntariamente de conducta mediante el estudio y la emulación de las creencias, valores y formas de vida presentes en sociedades democráticas, pacíficas y económicamente exitosas.

Indudablemente, el método es válido. Hay que comparar para entender. La analogía es el instrumento más valioso para cualquier clase de aprendizaje. ¿Qué hace que la pequeña Holanda, superpoblada y sin recursos naturales, como El Salvador, pueda ser uno de los países más libres, ricos y creativos del planeta? ¿Por qué la democracia norteamericana ha durado más de doscientos años? ¿Cómo los israelíes, pese a las divisiones internas que padecen, logran conciliar la democracia con las enormes dificultades naturales, políticas y culturales que padecen? ¿Por qué la democracia es posible en un país endemoniadamente complejo y pobre, como es la India, y cuesta tanto esfuerzo y trabajo en la patria diminuta y homogénea de los salvadoreños?

El programa salvadoreño para crear la *cultura de la paz* ha tomado ese camino: examinar lo que otros han hecho correctamente, adaptarlo a la realidad salvadoreña, e intentar repetir los aciertos. Eso está bien. Qué duda cabe de que la tolerancia, el Estado de Derecho, la supremacía de una sociedad civil robusta e independiente, son rasgos que suelen caracterizar a las sociedades más

envidiables, ésas a las que queremos parecernos, pero tal vez sea conveniente examinar –también– los factores negativos presentes en el modo de comportamiento al que atribuimos nuestros males.

No debemos olvidar que la modificación de la conducta pasa siempre por una terapia de realidad. No basta que identifiquemos lo que debemos hacer bien. Tenemos que precisar lo que hacemos mal, y hasta sería conveniente gritarlo a voz en cuello. ¿Será un error –por ejemplo– el culto apasionado con que honramos la memoria nuestros héroes históricos, casi todos ligados a gestas militares? No se trata de regatearles su grandeza a Bolívar, a Martí, a Morazán, a San Martín, sino de intentar situarlos en un plano humano, con sus virtudes y sus flaquezas, con sus miserias y sus momentos de gloria. Se trata buscar la dimensión exacta de los hechos y de las personas.

Tal vez no sea razonable trenzar la identidad de los países en torno a las batallas o en torno a una visión fieramente nacionalista. La hazaña heroica no es necesaria para forjar una gran nación. Y quien lo dude debe visitar Canadá o Noruega. Acaso el heroísmo real y profundo de los pueblos no esté en las gestas revolucionarias, en los himnos y en las barricadas, sino en el trabajo callado pero fructífero de millones de seres anónimos, en el responsable acatamiento de las leyes, en la prudencia y en la decisión de respetar el bien común tanto como el propio.

El pesimismo liberal

No creo que sea ocioso traer al auditorio el lado oscuro del problema. A veces la sombra es lo único que nos permite entender la luz. Más aún: una visión verdaderamente liberal parte siempre de un presupuesto pesimista. Para los liberales las personas son criaturas extraordinariamente peligrosas. Seres potencialmente capaces de cometer los peores crímenes si las circunstancias lo aconsejan y lo permiten. Esto es importante tenerlo en cuenta si se quiere crear una *cultura de la paz*. El hombre no es bueno por naturaleza y la sociedad lo trasforma en perverso. Esa es una benévola superstición rousseauniana. El hombre es bueno o malo según suponga que le conviene ser bueno o malo. Los yugoslavos que hoy nos espantan con sus atrocidades ayer constituían una sociedad razonablemente civilizada. El hombre puede ser apasionadamente bueno si encuentra en ello el reconocimiento y el aprecio de la sociedad. O puede ser despiadadamente malo por las mismas razones. Esa es la historia de los matarifes de todos los *gulags* y de los nazis, de los traficantes de esclavos y de los verdugos de todos los fanatismos. Esa es la historia de tantos

seres humanos joviales y bondadosos que súbitamente se convierten en asesinos. De ahí la enorme importancia de forjar un verdadero Estado de Derecho. No sólo se trata de establecer un *pacto social* para lograr un cierto grado de armonía. Lo más trascendente es encadenar a la fiera que todos llevamos dentro. Encadenarla con derechos, tutelas jurídicas y toda clase de salvaguardas legales.

Y si riesgoso es el bicho humano para sus congéneres –y a veces hasta para él mismo–, otro tanto puede afirmarse de la organización social en la que vive: siempre está en peligro de desvirtuarse, de corromperse, de desaparecer. No nos hagamos demasiadas ilusiones. Esa cultura de la paz que ahora los salvadoreños quieren, noblemente, construir, es una casa frágil, como todas, que habrá que apuntalar y remendar todos los días. Así es la democracia: débil, tremolante, casi indefensa, porque la decadencia y la extinción es el destino inexorable de todo lo que vive, de todo lo que cambia. Cambiar es caminar hacia la muerte, pero el cambio no debe atemorizarnos, porque esta urgencia de modificar nuestras vidas, esta pasión por hacer un mundo nuevo, es lo que le da forma y sentido a nuestra naturaleza. No podemos escapar de este destino sin dejar de ser nosotros mismos.

Es, pues, percedera la organización social en que vivimos, el Estado que nos hemos dado, y el que queremos darnos en el futuro. Y si esto es así, ¿qué sentido tienen nuestros afanes políticos? ¿Qué hacemos en este salón luchando por alcanzar un modo de vivir que mañana, algún inevitable mañana, será barrido de la historia por la propia naturaleza de las cosas, por la propia vocación de caos y destrucción que yace en el seno de toda estructura vital? Tienen un sentido: lo que he descrito, aunque parece ser cierto, aunque parece demostrarse empíricamente por la milenaria experiencia acumulada no deja de ser una abstracción teórica, mientras la existencia cotidiana es una realidad inmediata que no está sujeta a la paralizante fatalidad de las leyes de entropía. Sí, es cierto que al final del camino está la destrucción; y es cierto que somos una brizna de paja en el viento, un susurro incomprensible y fugaz en un rincón del universo, pero asumir la responsabilidad consciente de ser seres humanos tristemente persuadidos de nuestra insignificancia no nos exime de nuestra más urgente e indeclinable obligación: durar. Durar por el período más largo y de la manera más conveniente. Durar para tratar de perpetuarnos, para tratar de que perduren nuestras más dignas creaciones e instituciones, aunque intuyamos que se

trata de una tarea imposible. Y para durar como podamos, y mientras podamos, hay que actuar de ciertas formas. Las formas que hoy los salvadoreños buscan con ilusionado entusiasmo.

El camino democrático

De eso, precisamente, trata la democracia liberal. No es un camino seguro hacia la felicidad y la dicha. Es un camino seguro hacia lo desconocido. No es un proyecto político fundado en certezas ideológicas. Es un humilde pero tremendamente racional método para tomar decisiones colectivas. Decisiones que pueden ser equivocadas, porque los pueblos a veces se equivocan, pero el método cuenta con un mecanismo de tanteo y error, de enmienda y perfeccionamiento, que puede ser lento, pero que siempre acaba por ser eficiente. Un mecanismo que permite darle continuidad a la vida en común. Un mecanismo que nos permite *durar*.

Tomemos –por ejemplo– a la nación norteamericana. Hace más de doscientos años que su parlamento se reúne. Rítmicamente, cada cuatro años, ha convocado a elecciones presidenciales. Por la Casa Blanca han pasado hombres brillantes y mediocres, personas honestas y bribones, gente violenta y pacifistas. En ese período las trece colonias originales, profundamente religiosas y con vocación aislacionista, se convirtieron en otra cosa absolutamente distinta, sin que nadie pudiera prever el destino alcanzado. ¿Por qué no se deshizo la nación en el esfuerzo de multiplicar por diez su extensión territorial, absorber decenas de millones de inmigrantes o participar en dos guerras mundiales? Naturalmente, hay muchísimas razones que explican esta resistencia al desgaste, pero dos parecen ser los factores clave de esa prodigiosa estabilidad: la sujeción de una masa crítica de ciudadanos al imperio de la ley, y, sobretodo, la comprobación cotidiana de que la democracia y la economía de mercado les resultan beneficiosas a estas personas.

Eso quizás quiere decir algo que normalmente se olvida en los pomposos discursos del día de honrar a la patria: que las personas no aman la democracia y la libertad por abstractas razones morales, sino porque les conviene amarlas. Porque de ellas esperan una mayor dicha material y emocional. Simultáneamente, no debe sorprendernos que esas mismas personas se muestren indiferentes ante la destrucción del modelo de Estado en el que habitan –o aún que cooperen con esa labor de demolición– si no derivan beneficios personales de ese modo de vida. Lo que nos

precipita a establecer una verdad de perogrullo que hay que entender para poder echar los cimientos de la cultura de la paz: la democracia y la economía de mercado tienen que procurarles satisfacciones y prosperidad creciente a los ciudadanos, o los ciudadanos, sencilla y egoístamente, apuestan por cualquier aventura autoritaria. La democracia y la economía de mercado, para perdurar, tienen que dar frutos. Tienen que triunfar. Están condenadas a triunfar.

No puedo, por razones del tiempo de que dispongo, añadir mucho más a lo ya dicho, pero me gustaría despedirme con una petición y con una ilusionada profecía: yo vengo de un país que olvidó algunas de estas verdades elementales y varias generaciones de cubanos han pagado las consecuencias. Es probable que muy pronto, aunque nadie puede saber cuándo, el destino nos depare la posibilidad de enterrar los cadáveres, recoger los escombros, y volver a empezar – como decía José Martí– con todos y para el bien de todos. Algún día La Habana los recibirá, vestida de salitre y esperanza, para celebrar un foro como éste. Ojalá que para ese entonces, ojalá que para esa aurora incierta y estremecida, el aporte de cada uno de ustedes ya haya cuajado en la formulación de planes y proyectos concretos, porque los vamos a necesitar. Los vamos a necesitar ansiosamente.

San Salvador, 16 de febrero de 1994

VIII

LA DEMOCRACIA LIBERAL: SUS ENEMIGOS Y SUS POSIBILIDADES

Mis amigos liberales peruanos y argentinos me han invitado a Lima a analizar los graves problemas por los que atraviesa el liberalismo en América Latina, y lo primero que advierto es que esta convocatoria no deja de tener un sesgo irónico por dos razones fundamentales: hace unos años, en esta misma ciudad, al calor de lo que entonces parecía la imparable victoria de Mario Vargas Llosa, celebramos un seminario internacional con el que pensábamos coronar una fecunda labor de formación política. En aquel entonces el *Movimiento Libertad*, con Mario a la cabeza, aparentemente había hecho el milagro de transformar la cosmovisión del pueblo peruano, y el país entraba en una fase de absoluta modernización de los esquemas ideológicos prevalecientes.

El fenómeno no era tan extraño –y aquí viene la segunda paradoja–, pues más o menos por aquellas mismas fechas Francis Fukuyama proclamaba el triunfo imbatible de la democracia liberal y el hundimiento definitivo de las corrientes de pensamiento afincadas en la mitología marxista. Era el fin de la historia, como todos sabemos. Sólo que las cosas no sucedieron exactamente así en América Latina. En América Latina la historia siguió su errático rumbo de marchas y contramarchas.

En efecto, lo que en América Latina podemos comprobar no es el triunfo avasallador de la democracia liberal, sino el regreso de diversas expresiones del populismo y del mercantilismo en países como la Venezuela de Caldera o el Brasil de Collor de Mello, y del autoritarismo, como sucedió en el propio Perú del Presidente Fujimori, autor de un incalificable golpe de Estado, que luego, afortunadamente, se disipara en posteriores consultas populares.

¿Por qué cambia la percepción política?

¿Por qué ha ocurrido en América Latina este aparente retroceso en la implantación del liberalismo? ¿Era un falso espejismo lo que sentíamos en abril de 1990 quienes concurríamos al seminario organizado por el *Movimiento Libertad*?

Creo que para contestar esa pregunta hay que comenzar por responder otra: ¿por qué los pueblos cambian cada cierto tiempo su modo de percibir la realidad política, su diagnóstico sobre los problemas que los aquejan, y la terapia que recomiendan?

Probablemente, la adopción de una cosmovisión diferente no es tanto la consecuencia de un análisis meditado sobre el nuevo *corpus* teórico que nos proponen, sino el resultado de un proceso mucho más elemental y comprensible: porque el modelo de Estado vigente, ése en el que vivimos, deja de ser razonablemente eficiente. El cambio surge porque el antiguo régimen comienza a presentar síntomas de ser incapaz de resolver los inevitables conflictos de la sociedad con un mínimo de eficacia.

Las democracias liberales surgieron como una respuesta al fracaso y a la creciente inadecuación de las monarquías absolutistas, pero hay que aceptar, humildemente, que el triunfo del liberalismo, como el de cualquier otra tendencia dominante en la historia, es siempre parcial y – si se quiere cíclico, o sujeto a lo que los economistas llaman «diente de sierra»; es decir, períodos de alza y períodos de baja. Ahora estamos, en ciertas regiones del planeta, en una fase de rechazo o abandono, hasta que la mayor parte de la sociedad, guiada por el mecanismo de tanteo y error, descubra la veracidad de aquello que Churchill aseguraba: «la democracia (liberal) es el peor sistema con excepción de todos los demás». Y hay que entender, pues, que carece de sentido proclamar la victoria permanente de cualquier modo de convivencia social.

Supongo, pues, como suponía Spencer, que la evolución política y económica de los pueblos también responde a una especie de oculto mecanismo de selección natural, regido por la razón, aunque no de manera evidente: una evolución mucho menos «natural» que la que acaso rija en las mutaciones de las especies, pero –en todo caso igualmente fundamental. Lenta y parcialmente, con altibajos, como sucede casi todo bajo el sol, se va abriendo paso y triunfa, aunque siempre temporalmente, el sistema que parece capaz de superar las dificultades generadas por el propio cambio de la sociedad.

No me refiero, por supuesto, a la existencia de rígidas leyes que gobiernan la historia, a la manera hegeliana o marxista, sino a algo menos pretencioso y mecánico: a la resignada admisión de que hay ciertos hechos trascendentales que exigen o provocan cambios en las formas de gobierno. Y se podrían poner cien ejemplos, pero para nuestros propósitos bastaría recordar la aparición de la agricultura, del alfabeto, de la imprenta, de las máquinas de vapor, de la electricidad, de la industrialización o de las computadoras que tan vitales fueron –por citar un episodio concreto– en la derrota tecnológico político económica de los regímenes marxista-leninistas.

Los antropólogos aseguran –por ejemplo– que el tránsito de la *banda nómada* a la *tribu sedentaria* establecida en un territorio, dio paso al surgimiento de un caserío rudimentario, formado por 100 ó 150 individuos, que apenas necesitaban poco más que un jefe como toda organización para la convivencia. Pero en la medida en que el crecimiento demográfico y la necesidad de bosques para la caza o tierras para la labranza fueron cambiando el perfil de la comunidad y agregando otras tribus al grupo original, surgieron formas de Estado notoriamente más complejas, con reglas y personas dedicadas a realizar ciertas funciones específicas: es decir, *funcionarios* en todo el correcto sentido de la palabra.

Las contradicciones del liberalismo

Nada de esto, desafortunadamente, explica con claridad lo que nos ocurre en América Latina: en nuestro continente están dadas todas las condiciones para el cambio de mentalidad y para la admisión de la buena nueva liberal –por utilizar la expresión de los Evangelios–, pero no hay duda de que el liberalismo no termina por seducir a nuestras gentes como ocurre, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, zonas en las que hoy predominan las ideas liberales de una manera hegemónica y en casi todo el espectro político.

¿Quiere esto acaso decir que el liberalismo es una manera de entender las relaciones sociales sólo apta para el Primer Mundo? A fin de cuentas, parece haber una adecuación casi milimétrica entre desarrollo y democracia liberal, pues, como es indiscutible, las veinte naciones más prósperas y felices del planeta, acosadas por decenas de millones de aspirantes a inmigrar a ellas desde todos los rincones de la tierra, son veinte democracias liberales en las que se conjugan con razonable armonía el Estado de Derecho y la economía de mercado.

¿Será que sólo se puede acceder a la democracia liberal –como alguna vez barruntó un economista americano– tras pasar el umbral de cierto *per cápita* que entonces, fines de los años 50, se situaba en algo así como en mil dólares? O, por el contrario, ¿será que la democracia liberal es lo que nos permite alcanzar un cierto nivel de prosperidad dentro de una atmósfera general de consenso y aprobación del sistema en el que vivimos? Me inclino a pensar que lo segundo es lo correcto, pero eso nos precipita a preguntarnos ¿por qué en América Latina hay una condena, a veces visceral, a las fórmulas propuestas por el liberalismo?

Más grave aún: en América Latina quizás nos encontremos ahora en un confuso punto de nuestra historia, en el que se rechazan las ideas marxistas y se admite el fracaso de las fórmulas socialdemócratas, pero simultáneamente se considera que el recetario liberal es también negativo. Parafraseando a Fukuyama, en América Latina no hemos alcanzado el fin de la historia, sino el fin de las ilusiones políticas, lo que es mucho más grave. Y quizás la tarea más urgente de los liberales consista en resolver este trágico problema y aportar a nuestros contemporáneos latinoamericanos una visión basada en nuestra concepción de las relaciones humanas; una visión coherente y esperanzada del futuro.

Una visión liberal

En todo caso, este desconcierto que se observa en los pueblos latinoamericanos se deriva de una conclusión errónea que es fundamental que se desestime si alguna vez queremos ocupar el puesto que nos correspondería dentro de la civilización occidental si fuéramos capaces de actuar correctamente.

Lamentablemente, cuando las masas latinoamericanas analizan su miseria y su violencia, o el desastre institucional en el que viven, incorrectamente lo atribuyen a un sistema que confunden con la democracia liberal. Y aunque resulte doloroso, es conveniente admitirlo: intuitivamente, para muchos latinoamericanos, el liberalismo es la tremenda desigualdad entre ricos y pobres, es la corrupción de nuestros políticos, es el egoísmo, es la explotación inicua y, es, en suma, el peor perfil de la sociedad en la que ellos viven. Es verdad que pueden llegar a creer que el populismo es despilfarro y corrupción, irresponsabilidad e ineficacia en la gestión pública, e –incluso–

también pueden rechazar y condenar la opción propuesta por los radicales marxistas, pero eso sólo los deja con una sensación de impotencia y frustración que suele conducir al cinismo y a la aceptación de otras vías autoritarias de gobierno. Esas masas descreídas lo que quieren es orden y prosperidad, y sienten que ninguna de esas dos cosas se las garantizan las fórmulas políticas que les proponen los grupos dirigentes de las tendencias convencionales.

De ahí que nuestra más urgente aunque muy difícil tarea como liberales, sea precisar una visión de conjunto capaz de dotar a nuestras sociedades de los instrumentos necesarios para juzgar correctamente los problemas que sufren y recomendar soluciones creíbles y satisfactorias. Tenemos, pues, que revitalizar el discurso político y persuadir a nuestros coetáneos de que los pesares que los afligen no se derivan de la democracia liberal, sino precisamente de su ausencia; pero para eso es muy importante poder explicar coherente y sencillamente qué es la democracia liberal y brindarles nuestra visión de las relaciones humanas.

¿Cómo simplificar esa visión liberal sin caer en el error de *puerilizar* el mensaje? Tal vez explicando que la democracia liberal se compone de tres pilares perfectamente separables y en cierta medida independientes: hay una *ética liberal*, esto es, unos valores morales, una idea sobre cómo deben ser los vínculos de los miembros que componen la sociedad; hay una *idea económica liberal* que prescribe la fórmula más idónea para que las transacciones que realizan las personas generen la mayor cantidad posible de riquezas para los individuos y para la colectividad; y hay una *idea jurídica liberal* o un método que regula las relaciones humanas con arreglo a lo que pretende nuestra ética; un método que también establece las bases para que se realicen las transacciones de acuerdo con las normas más convenientes para la economía.

De manera que la transmisión de la visión liberal hay que hacerla teniendo en cuenta esos tres campos del conocimiento. Si hablamos de ética liberal es básico que se respeten las libertades individuales, los Derechos Humanos y todo aquello que garantiza la dignidad de la persona frente a las posibles injurias que pueden infligirle la colectividad o el Estado; hay que explicar por qué la tolerancia y el estar siempre dispuestos a convivir con aquello que no nos gusta debe ser la divisa irrenunciable de todo liberal.

Obviamente, de la misma manera que los liberales debemos aclarar por qué la ética que propugnamos se asienta en la defensa de los derechos del individuo, es importante advertir que sólo resulta posible la supervivencia de una sociedad de este género si las personas también asumen conscientemente sus responsabilidades. No todo, pues, son derechos. Los deberes forman parte de la ecuación liberal y en una proporción similar. Sin libertades no hay democracia liberal, pero tampoco la hay si no prevalece una ética de la responsabilidad individual. Formar ciudadanos que entiendan la importancia de este balance es una de nuestras tareas más serias y trascendentes.

La idea económica del liberalismo engarza coherentemente con la ética que propugnamos. La libertad –y ésta es una frase hecha que me gusta repetir– no es un subproducto de la prosperidad, sino por el contrario, constituye su componente básico. Sin libertad no hay prosperidad porque la libertad nos da la capacidad de examinar sin temores los problemas que nos afectan. La libertad es, también, la posibilidad que tenemos de hacer una constante auditoría al mundo en que vivimos. Escudriñarlo, acercarnos a él con una lupa y proseguir hacia el progreso desechando lo que es erróneo o inconveniente, y reiterando lo que nos beneficia.

No es éste, por supuesto, el lugar para hacer la descripción de la idea económica liberal, pero desde la Escuela de Viena hasta nuestros días de Mises y de Hayek, de Friedman y de Buchanan, no hay duda de que el pensamiento económico de los liberales ha adquirido una extraordinaria complejidad y fortaleza. Lo que en el siglo pasado se daba como hipótesis inteligente, en nuestra época ha podido demostrarse fehacientemente: es en el libre mercado donde los procesos económicos se mejoran y perfeccionan, enriqueciendo a los pueblos de manera paulatina.

El Estado de Derecho

No obstante, donde la democracia liberal tiene su punto más sensible, su más robusto pilar es en las ideas jurídicas que sustenta. ¿Por qué pudo resurgir el liberalismo a fines del siglo XX si durante casi 60 ó 70 años se proclamó la muerte de esa manera supuestamente decimonónica de entender los fenómenos económicos y políticos? La respuesta es ésta: porque el auge del marxismo y de las ideas socialistas no consiguió desterrar de la conciencia de los seres humanos los aspectos éticos y jurídicos defendidos por el liberalismo. Durante un tiempo se negó la teoría económica generada

por el liberalismo, pero en modo alguno fueron desterradas las ideas morales o jurídicas impulsadas por la gran corriente liberal, y esto hizo posible, cuando se produjo el fracaso del modelo socialista, que resurgiera, casi intacta, pero enriquecida con nuevas reflexiones, la propuesta económica de los liberales.

Y tal vez no sea exagerado afirmar que el aspecto más importante del liberalismo es su concepción jurídica: concretamente, la idea de que los hombres y mujeres deben regir su comportamiento de acuerdo con las normas libremente fijadas en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que voy a describir con las palabras del escritor catalán Salvador Millet i Bel:

(...) yo me atrevería a definirlo diciendo que es exactamente lo contrario de un estado providencia o de un estado benefactor. Un Estado de Derecho es aquel en el que las leyes no se fijan con el objetivo de obtener unos fines determinados de tipo económico o social, que no van encaminadas a conseguir una modificación de la sociedad de acuerdo con ciertas ideologías –detrás de cuyas leyes existe siempre el afán de obtener votos para seguir disfrutando del poder– sino que, en cualquier caso, se dictan con el único deseo de conseguir el triunfo de una mayor justicia. El Estado de Derecho es aquel en el que las leyes positivas emanadas del Estado se hallan fundadas en el derecho natural; es aquel en el que las leyes no constituyen un instrumento del estado sobre la sociedad civil, sino un medio encaminado a su defensa y potenciación; es aquel en el que las leyes limitan de forma real y efectiva el poder del estado; es, en definitiva, un estado en el que se ha pasado de una sociedad política dominada por el poder, a una sociedad civil regida por el derecho. Más sucintamente todavía: el Estado de Derecho es aquel en el que los derechos inviolables de la persona humana se hallan, en todo momento, por encima de los derechos del estado; es aquel en el que el derecho está por encima de la política.

A todo esto también se le ha llamado constitucionalismo: la sociedad plasma en una Constitución los límites del Estado –cuando el texto se ha concebido dentro de la cosmovisión liberal–, y no intenta con él decidir el curso de la historia o el destino del pueblo. Esa es una incógnita que hay que despejar todos los días; un horizonte ignoto que se va persiguiendo de forma impredecible por la libre acción de los ciudadanos.

¿A dónde nos lleva esta reflexión sobre el constitucionalismo y el Estado de Derecho? A una conclusión extraordinariamente importante: para evitar los sobresaltos y la violencia, para impedir los actos de fuerza que rompen la difícil e inestable armonía de las sociedades, es fundamental contar con un Estado de Derecho abierto a cualquier posible evolución dictada por los cambios que la historia nos proporciona. Sólo sobreviven los estados que pueden y saben cambiar.

Los valores morales que proclama y defiende el liberalismo tal vez contribuyan al ennoblecimiento de la convivencia, las ideas económicas y legales del liberalismo es posible que nos traigan la prosperidad, pero tanto la prosperidad económica como la convivencia libre y pacífica estarán siempre en peligro si todo ello no se enmarca dentro de un flexible Estado de Derecho que posibilite el desenvolvimiento de esa sociedad abierta que nosotros defendemos y proponemos.

¿Por qué ha podido sobrevivir una nación como Estados Unidos, absorbiendo el impacto tremendo de cuadruplicar su territorio en pocos años, multiplicar por 20 su población original, recibir decenas de millones de inmigrantes de diverso origen y asumir o generar todo tipo de ciencia y tecnología capaces de cambiar la entraña de la sociedad? Por una razón: porque el Estado de Derecho, *la forma*, no obstaculizaba sino conducía los estremecedores cambios de rumbo a los que el país se sometía. El Estado de Derecho, siempre adecuado a los cambios, no se oponía al ritmo autónomo de la civilización, sino le servía de hilo conductor.

De ahí la ingenuidad latinoamericana que consiste en querer saltar al futuro, ignorando la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Es ése un inmenso error estrepitosamente cometido en Perú por el ingeniero Alberto Fujimori error que en América Latina suele verse tanto en la derecha reaccionaria como en las izquierdas revolucionarias: creer que hay atajos, caminos secretos hacia la prosperidad y el desarrollo; suponer que hay senderos que no pasan por la humilde aceptación de los códigos legales.

El Estado de Derecho debe ser un conductor de las tensiones de la sociedad, y de las tendencias que muestra la historia, y tiene que ser, además, un mecanismo para resolver de manera inequívoca el más trascendental de los conflictos que afecta a la civilización tras la desaparición, al menos en

nuestro ámbito, de las monarquías hereditarias: cómo transmitir la autoridad y el poder sin violencia y sin sangre, de una manera aceptablemente razonable.

De nada vale destruir o ignorar el Estado de Derecho por el espejismo de que es el camino más rápido hacia un mejor destino. Eso es invariablemente falso, porque deja fuera de la ecuación el elemento de la sucesión y coloca todos los actos de gobierno bajo el signo de la ilegalidad y la ilegitimidad, factor que suele convertirse en elemento de destrucción y atraso de lo mucho o lo poco que se avanzó durante el período de excepción.

La necesidad de persuadir

Por supuesto, la existencia de un Estado de Derecho, por sí misma, no garantiza la estabilidad, la continuidad democrática y la transmisión organizada de la autoridad. Hacen falta otros elementos, otros vectores capaces de canalizar las voluntades democráticas y, entre ellos, el más urgente lo constituyen los partidos políticos. Partidos políticos fuertes, que no estén supeditados a la existencia del líder que los encabeza, para que no se destruyan cuando desaparezca el fundador, sino que representen una corriente real de la opinión pública.

Y ni siquiera esto quiere decir, naturalmente, que la existencia de partidos políticos con estas características garantice el pleno ejercicio de la democracia liberal, sino que este factor contribuye a que este modo de convivencia pueda prevalecer, porque sin partidos políticos la construcción y la permanencia de la democracia liberal resulta muy difícil, como se observa en países como Brasil y el propio Perú, en los que la ciudadanía no encuentra cauces claros y adecuados para defender sus intereses, derechos y valores.

De manera que la tarea que los liberales latinoamericanos tenemos por delante es ardua y compleja. En primer lugar, debemos proponer una visión coherente de la sociedad, establecer un diagnóstico de los males que nos afectan y proponer una cura. Pero ésa es sólo una parte de la tarea: enseguida se nos echa encima la responsabilidad didáctica. Tenemos que ser capaces de persuadir a la ciudadanía de que esa visión del mundo, ese diagnóstico y esa terapia son los adecuados para conseguir superar los problemas que nos afectan y marchar hacia un mundo más seguro y placentero.

¿Cómo se lleva ese mensaje a las masas? En primer lugar, es evidente que el mensaje hay que adaptarlo a diferentes auditorios. No es lo mismo un universitario al que podemos exponerle sin tropiezos las ideas de Hayek o de Buchanan, que un campesino analfabeto o poco instruido que no puede entender esas abstracciones complicadas.

Afortunadamente, la pedagogía tiene una respuesta para esto: más que a la teoría, hay que recurrir a los ejemplos. Para que la labor educativa, para que la tarea de convencimiento sea eficaz, mucho mejor que una demostración matemática, es la descripción de un episodio liberal exitoso. Es muy probable que casi nadie entienda el modelo matemático con que se explica la velocidad con que se mueve la masa monetaria, tema predilecto de algunos liberales, pero la sencillez irrefutable del caso de Hong Kong, o el de Chile, puede abrirles las entendederas a muchas personas de escaso nivel intelectual.

Es decir: como parte de su estrategia los liberales tienen que dar la batalla por transmitir su cosmovisión a una mayoría significativa de la sociedad. ¿Cómo? Tal vez en América Latina lo más sencillo y urgente sea iniciar un gran debate sobre por qué son pobres nuestros países. ¿Por qué es pobre Perú con su gran extensión poco poblada, su riqueza en minerales, las posibilidades de su agricultura y de su pesca? ¿Por qué es pobre Venezuela, tal vez el país con más riqueza potencial del planeta? ¿Por qué es pobre Colombia, pese a sus riquezas naturales, la laboriosidad de su gente y la buena preparación de su clase empresarial?

Un debate de esta naturaleza, iniciado por los liberales en la radio, la televisión y los periódicos, nos llevaría de la mano a la respuesta que queremos: nuestros pueblos son pobres porque han olvidado los principios básicos de la economía liberal, porque se han burlado los principios jurídicos que propugna el pensamiento liberal, y porque no han suscrito con el compromiso necesario los valores que sustenta el liberalismo.

Una sociedad dispuesta a vivir con arreglo a la tolerancia y el respeto a la libertad individual; decidida a no salirse de los límites del Estado de Derecho y organizada en torno al modelo económico liberal, prosperará y tendrá éxito de forma creciente, y sabrá asimilar los períodos de

depresión y crisis con lógicas esperanzas en su capacidad para superar los inevitables problemas que surgirán en el futuro.

Y en este punto me gustaría retomar el ejemplo de Estados Unidos: para que perdure la sociedad liberal, para que se prolongue en el tiempo y las generaciones se enlacen dentro del mismo sistema sin fracturas peligrosas, sin rupturas suicidas, es importante tener éxito. La democracia liberal no es un sistema bueno *per se*. Es un sistema bueno por sus resultados. Y cuando los resultados no son los esperados durante un tiempo prolongado, la tendencia natural de la sociedad es la de buscar otro modo de organizar la convivencia.

Si en Estados Unidos la democracia liberal ha durado más de 200 años, es, qué duda cabe, porque hay un Estado de Derecho capaz de asimilar los cambios; es, también, porque hay partidos políticos que le ponen cauce a las ambiciones, los intereses y las pasiones de las personas; pero es, por encima de todo, porque en ese país el sistema le ha traído a la sociedad unas cotas crecientes de riqueza y bienestar tanto material como espiritual.

Lo que no podemos aspirar es a que el sistema funcione mal durante largos períodos, y las gentes muestren su aquiescencia y su deseo de conservarlo. Pretender eso es ignorar los rasgos más típicos de la naturaleza humana.

¿Qué hacer, en suma, para impulsar el liberalismo en América Latina? Primero, concretar nuestra visión y transmitirla a los distintos niveles de la sociedad; segundo, crear un partido que sirva de gran vector para estas fuerzas; y –tercero– cuando se llegue al poder, demostrar en la práctica lo acertado de nuestras ideas, porque sólo así conseguiremos que prevalezcan. Sólo el éxito, sólo la constatación de que cada día estamos un poco mejor, permitirá que la democracia liberal no caiga frente al asedio de sus incansables enemigos.

Lima, 4 de septiembre de 1994

IX TRATADO DE LA PROSPERIDAD

Hace un par de décadas se puso de moda entre los sociólogos describir lo que entonces se llamó *la cultura de la pobreza*. El método analítico era bastante sencillo: se ponía el micrófono frente a personas marginadas y se les pedía que contaran sus vidas y describieran las circunstancias que los habían mantenido en la pobreza. Luego se repasaban las grabaciones, podándolas de todo lo que fuera superfluo, y se dejaba al lector sacar sus propias conclusiones. Los *sociólogos de la pobreza* como Oscar Lewis o Barry Levine –por sólo citar dos casos– no eran normativos sino *descriptivos*. No recetaban, sino se limitaban a diagnosticar de forma generalmente amena.

Sociología de la riqueza

En todo caso, las reflexiones que siguen vendrían a ser la otra cara de la *sociología de la pobreza*. Creo que tan importante o más que sumergirse en el mundo desesperado y miserable de los que nada o muy poco tienen, es acercarse a la *cultura de la riqueza* y tratar de adivinar por qué algunas personas y algunas naciones han alcanzado un grado de prosperidad impresionante, con el propósito de saber si ese modo de vida es alcanzable por pueblos menos afortunados, o si las naciones pobres del Tercer Mundo están permanentemente condenadas a sufrir.

Por supuesto, sería útil aproximarse grabadora en mano a personas pudientes para recoger y analizar sus experiencias, pero no es necesario. La masa de información disponible hoy permite que entendamos los rasgos básicos que comparten los grupos humanos más prósperos sin necesidad de recurrir a las anécdotas personales.

Ya se sabe, por ejemplo, que no es la riqueza natural lo que explica el éxito de un país montañoso, pequeño y sin acceso al mar, como Suiza; como también puede afirmarse que no es la rapiña imperial lo que ha enriquecido a los países escandinavos o a la remota Nueva Zelanda. Por otra parte, el desarrollo fulminante de los famosos cuatro dragones de Asia (Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur), precedido por el fenómeno asombroso de Japón, ha

demostrado que el acceso a la prosperidad no constituye un privilegio reservado a los pueblos de origen europeo o de raza blanca.

Los círculos de prosperidad

¿En dónde radica, pues, la clave de los pueblos que triunfan en la batalla contra la pobreza, y por ende la clave de los que fracasan? Por supuesto, hay una respuesta universal o irrefutable, y tampoco es posible espigar en todos los casos, de manera inequívoca, elementos comunes que se repiten invariablemente, pero la experiencia autoriza a señalar los factores que, sin duda, forman parte de esa muy compleja ecuación capaz de explicar por qué un campesino colombiano gana diez veces menos que su homólogo francés, o diez veces más que el que cultiva las tierras polvorosas de Etiopía.

La primera observación que ahora se impone, por devoción a la claridad, es deslindar los campos. Vamos a hacerlo en círculos concéntricos, acotando en cada uno lo que fundamentalmente le pertenece, pero reconociendo de antemano que esos círculos concéntricos no son compartimentos estancos, sino zonas que carecen de fronteras definidas. Se mezclan, entremezclan y confunden.

La criatura humana es, en primer término, un ser aislado, un yo que se forma en la interacción con otras personas hasta constituir un individuo con su psicología distinta e irreplicable. Ahí ya tenemos una morada de la prosperidad, una esfera en la que es importante que estén presentes ciertos elementos para que la conducta resultante contribuya a la creación de riqueza. Pero dejemos, provisionalmente, este marco psicológico y trasladémonos al siguiente círculo concéntrico.

En efecto, estos individuos aislados, formados en contacto con el medio que les rodea, viven inmersos en un marco cultural. Ese marco cultural va a reforzar los mejores y los peores valores del grupo. Lo único que explica que el alemán promedio sea más riguroso en el desempeño de sus tareas profesionales que un dominicano, o que un inglés sea más puntual que un cubano o un español, es determinada presión social que actúa como una especie de horma cultural que acaba por perfilar una cierta costumbre, un cierto modo de comportarse. De manera que ahí dejamos –por ahora– la esfera cultural para identificar el siguiente estadio de la prosperidad. El siguiente círculo concéntrico: el mundo de las concepciones políticas. Es evidente que una personalidad fuerte y

creativa, formada en los valores más sólidos y bajo la benéfica compulsión de unas normas sociales conducentes a la creación de riqueza, está forzada o actuar dentro de un marco político. No es lo mismo trabajar sujetado por la arbitraria camisa de fuerza de una dictadura que dentro de los límites de un Estado de Derecho concebido de acuerdo con el paradigma de la democracia liberal. Al mismo tiempo, la atmósfera política en que se vive nos precipita al próximo círculo concéntrico.

Me refiero, por supuesto, al universo jurídico. Esa psicología individual, cuyo quehacer cotidiano en gran medida se moldea por la presión social, es decir, por la cultura, está sujeta a ciertas reglas que norman sus relaciones. El marco legal fija límites, ampara, amenaza y castiga. La ley determina casi siempre lo que no se puede hacer y –a veces– lo que está permitido hacer. Obviamente, lo que esa ley establezca, lo que estimule o lo que desaliente, va a tener un peso tremendo en el desarrollo potencial y efectivo de los pueblos. Esto nos lleva de la mano de manera natural al siguiente universo: a la morada económica. El individuo, marcado por los rasgos de su cultura, inmerso en un particular mundo y regulado por las leyes de su tribu, va a realizar sus transacciones económicas de una cierta manera. Va a competir en un mercado libre o va a producir y vender de acuerdo con unos planificadores; va a distribuir las utilidades de las empresas para favorecer a ciertos grupos, o va a limitar la presión fiscal al mínimo necesario. Por supuesto, de lo que haga en este campo va a depender en algún grado el éxito económico del individuo y del conjunto de la sociedad.

Esta afirmación parece constituir una verdad que ni siquiera vale la pena discutir.

Resumo: hay cinco esferas fundamentales que tendremos que examinar con cierto detenimiento para poder entender por qué a los niños de Mali o de Haití se los comen los parásitos, mientras un norteamericano promedio gasta más dinero en papel higiénico y desodorante que el *per cápita* anual de una persona arraigada en el Golfo de Bengala. Y esas cinco esferas, repito, son la psicología individual, la cultura, el marco político, el jurídico y la esfera económica. Acerquémonos rápidamente, uno por uno, a esos universos, e intentemos dar con las secretas y elusivas claves de la prosperidad.

El marco psicológico

No voy a disputar que la psicología individual le debe mucho a la carga genética, pero hay formas de la conducta que responden a creencias y valores afincados en la razón y no en la mezcla caprichosa de los cromosomas. Por ejemplo, la posición que se tiene con relación a los demás. No es lo mismo un productor de riquezas que se siente responsable de sí mismo, que otro que espera la solución de sus problemas de la sociedad en la que vive. No trabaja de igual modo quien asume resueltamente el diseño de su propia vida que el que aguarda con una actitud pasiva que le tracen desde fuera sus horizontes vitales.

Lo que quiero decir es que la ética de la responsabilidad individual debe ser predicada e inculcada si queremos tener sociedades prósperas. Hay una alta probabilidad de éxito en los grupos humanos en los que prevalece la noción de que atañe a cada miembro de la tribu decidir qué quiere hacer con su vida. Se valora mucho más la libertad cuando se tiene esa íntima convicción. Se es más audaz, más creativo y, en consecuencia, se es un mejor agente económico.

Por supuesto, esa psicología individualista genera un tipo de conducta en la que están presentes los fracasos, pero conviene recordar que el crecimiento económico de las personas y de las naciones está basado en el insustituible mecanismo del *tanteo* y *el error*. Todo triunfo individual y colectivo lleva oculta una dolorosa cadena de fracasos previos. De ahí la extraordinaria importancia de contar con una ciudadanía en la que la ética de la responsabilidad individual, la tenacidad, la audacia, la disciplina y la confianza en sí mismos formen parte de la psicología de un número abrumador de los individuos que la componen.

No se me oculta, evidentemente, que es en el seno de la familia y en la escuela donde estas creencias y comportamientos pueden ser inculcados, pero resulta conveniente tomar en cuenta la estrecha aunque opaca relación entre la psicología individual y la economía si queremos entender los aparentes misterios del desarrollo y la prosperidad.

Estos vínculos profundos se han hecho tan obvios en países como Estados Unidos y Japón, que existen cursos especiales para reforzar cierto tipo de conductas que parecen favorecer el éxito y

la productividad, mientras se intenta inhibir los comportamientos que conducen a los resultados opuestos.

Hay muchos, cientos de ejecutivos norteamericanos que pasan los fines de semana a la intemperie, fabricando una balsa para escapar de algún naufragio imaginario, o practicando un rudo montañismo, sin otro objeto que el de reforzar la tenacidad, el espíritu formal de lucha y la capacidad de improvisación para enfrentarse a retos insospechados. En el otro extremo del planeta, la más reputada escuela para ejecutivos del Japón suele colocar a sus estudiantes en medio de las calles de Tokio a gritar de manera escandalosa las virtudes de la empresa para la que trabajan. El objetivo de esta sorprendente conducta es original: hacerlos vencer la timidez y dotarlos de una mayor dosis de agresividad comercial.

No sabemos, por supuesto, de manera concluyente, el resultado final de estos experimentos pedagógicos, pero el punto de partida es indiscutible: hay elementos psicológicos comunes de gran peso en los pueblos que han alcanzado los mejores índices de desarrollo. Y si queremos que nuestras naciones prosperen es útil persuadir a los adultos de la importancia económica que tiene la ética de la responsabilidad individual, y la convicción de que es posible guiar nuestras vidas y tomar o revocar decisiones libremente asumidas. Por la misma regla, es muy conveniente inducir y cultivar en los niños de la tribu estos rasgos de su personalidad. Cada criatura desenvuelta y audaz, disciplinada y segura de sí misma, que mañana salga al mundo del trabajo, tiene mejores posibilidades de crear riqueza que quienes se sienten pasivamente a lamentarse de su destino.

El marco cultural

Desplacémonos ahora hacia el siguiente círculo concéntrico. Supongamos que hemos conseguido formar a un número grande de nuestros ciudadanos dentro de la ética de la responsabilidad individual. Pensemos que cuentan con un ego poderoso, no le tienen miedo a la vida y son verdaderos luchadores. Eso es magnífico, pero hay que advertir que esas virtudes individuales dan sus mejores frutos cuando se insertan en el marco cultural adecuado. Es decir, los rasgos del individuo tienen que casar con los mejores valores de la tribu.

La ética de la responsabilidad individual no puede divorciarse de la ética de la responsabilidad colectiva. Hay que inculcar, hay que inducir eso que antes se llamaba civismo, y que no es otra cosa que el reconocimiento de que existen unos deberes con la comunidad a los que tenemos que someternos para que sea posible el desarrollo económico. Los pueblos más exitosos del planeta son aquellos en los que se conjugan sin contradicciones el cultivo del individualismo junto al sentido de la responsabilidad con el grupo a que se pertenece. El gregarismo no está reñido con la búsqueda de un mejor destino personal. Ocurre a la inversa: se complementan.

Más aún: hay tres aspectos de la forma en que se relacionan los pueblos exitosos que conviene subrayar para descubrir la oculta carpintería interior sobre la que parece edificarse la prosperidad: el trabajo en equipo, el respeto a la jerarquía y el culto a los triunfadores cuando han alcanzado el éxito dentro de las reglas del juego. Esto último es muy importante, porque una de las más fuertes motivaciones de los seres humanos es la obtención de reconocimiento, y las sociedades –como las empresas– que no regatean esta clase de refuerzo positivo suelen propiciar la multiplicación del tipo de conducta que más conviene a la creación de riqueza. Por el contrario, las sociedades en las que prevalece la superstición de que el éxito de alguno de sus miembros es siempre el resultado de la ruina de sus semejantes, no son, generalmente, el mejor terreno para abonar la expansión de la riqueza.

En cuanto a la habilidad para el trabajo en equipo, no parece necesario destacar su tremenda importancia, pero es oportuno recordar que ahí también radica la potencialidad de desarrollo de los pueblos. Desde hace más de dos siglos, desde la aparición de la máquina de vapor y la revolución industrial, nuestra civilización vive un proceso de creciente complejidad laboral que exige el esfuerzo mancomunado de numerosas personas capaces de coordinar sus acciones y planear a plazos cortos, medios y largos. Ese esfuerzo común tiene sus reglas internas, su dinámica propia, y en los países de mayor éxito suele asentarse sobre el compromiso, la búsqueda de la excelencia, la sujeción a la verdad en el análisis y la humilde admisión de que hay jerarquías respetables a las que voluntariamente debemos someternos en el desempeño de nuestras funciones profesionales.

No es, pues, en la picaresca que tanto nos divierte en América Latina o en España, donde se encuentra la riqueza permanente, sino en el rigor, la seriedad, la curiosidad, la puntualidad y el respeto a las estructuras jerárquicas. Es decir: en los valores colectivos que les dan forma y sentido a los rasgos de la psicología individual.

El marco político

De la esfera oscura de la psicología individual hemos pasado al marco de los valores de la tribu que mejor propician la creación de riquezas individuales y colectivas. Adentrémonos ahora en el siguiente círculo concéntrico: el universo político.

No creo que sea difícil de entender la relación que existe entre la práctica y las creencias políticas, de un lado, y el desarrollo económico del otro. No parece ser una casualidad que los países más ricos del planeta son, precisamente, democracias estables en las que la autoridad se transmite de manera ordenada y con arreglo a unas leyes aprobadas por las mayorías. Esas democracias pueden ser reinos parlamentarios, como el inglés; repúblicas presidencialistas, como la americana; federalistas, como la Suiza; o monarquías unitarias, como la de Noruega, porque –en rigor– no hay una fórmula democrática universalmente válida para todos los países. Al fin y al cabo, no todas las naciones democráticas tienen rasgos comunes: las hay de arraigada tradición monárquica, mono o plurilingües, multiétnicas y multirraciales o casi totalmente homogéneas como puede ser Japón.

Pero lo importante es que posean un sistema político regulado por un Estado de Derecho, modificable mediante el voto popular, con partidos políticos que presenten diversas opciones, medios de comunicación libres, y mecanismos que faciliten la sucesión o la sustitución en el poder por vías pacíficas previamente pactadas.

La democracia, por sí misma, no garantiza la prosperidad de los pueblos, pero no hay duda de que la potencia. Y la explicación de este fenómeno es bastante sencilla: el desarrollo económico requiere de un proceso prolongado de ahorro e inversiones. Cuando en la esfera oficial sobrevienen períodos convulsos, esos ciclos se paralizan y decrecen la producción, la productividad y –por tanto– el ahorro y las inversiones.

Para los agentes generadores de riqueza –esto es, para las empresas– no hay etapas más estériles que las que están regidas por la incertidumbre. Invariablemente se retraen las inversiones, los planes de largo aliento se postergan para tiempos mejores o se sustituyen por operaciones financieras que rinden beneficios inmediatos, pero al costo de provocar inflación y un notable encarecimiento de la vida.

Obviamente, de la misma manera que la democracia no garantiza la prosperidad, sino se limita a potenciarla, hay que reconocer que tampoco asegura el acceso al poder de los mejores candidatos ni de los partidos con ideas e intenciones más útiles y creativas. La mejor selección dependerá, fundamentalmente, de la información de que disponga el electorado y de la habilidad de los políticos para seducirlo, pero la validez de la democracia no sufre porque los pueblos, a veces, la utilicen torpemente, puesto que se trata de un método para darles cauces a las rivalidades e intereses contrapuestos de los seres humanos y no de un modo infalible de alcanzar la felicidad o la eficiencia.

Sin embargo, ese método ha demostrado ser el más apto para la creación de las riquezas, especialmente si lo comparamos con el que, hasta hace muy poco, proponían los marxistas. Y la prueba empírica de esta aseveración podemos obtenerla al contrastar los resultados obtenidos tras la Segunda Guerra Mundial por pueblos similares que habían quedado divididos por los avatares del enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes totalitarios. La comparación entre las dos Alemanias, o entre Austria, de una parte, y de la otra Checoslovaquia, Hungría y casi toda Yugoslavia –fragmentos del imperio Austrohúngaro– no dejaba lugar a duda.

Claro que podía decirse que la superioridad no se debía al modelo político sino al económico, pero es bueno recordar la coherencia profunda que existe entre la democracia liberal y la economía capitalista de mercado. Ambos modelos descansan en el método fatigoso del tanteo y el error, confiando en la lenta pero segura superación de las inevitables dificultades, siempre y cuando los contratiempos puedan ser libremente examinados a la luz de la crítica. Por eso es tan importante que exista un clima de libertad política para que se produzca el fenómeno del

crecimiento sostenido. La libertad no es un apéndice accesorio de la prosperidad, sino uno de sus componentes básicos.

De ahí el lamentable error de quienes pretenden curar los males económicos suprimiendo la democracia y confiando la gestión del gobierno a un hombre fuerte o a un grupo de militares que no tengan que responder ante las leyes. Ese casi nunca es el camino de la prosperidad, sino el del agravamiento de los problemas; que se pretende solucionar. Frente a cada ejemplo de dictadores que logran alcanzar cierto grado de éxito en su gestión económica, se alzan una docena de sangrientos fracasos que aconsejan no recurrir jamás a la mano dura inconstitucional para corregir los fracasos de la esfera económica.

Nadie debe olvidar, además, que, con frecuencia, los éxitos parciales de los autócratas; son borrados por los posteriores estallidos sociales con que culminan sus mandatos. Quienes aplaudían los índices de crecimiento durante las dictaduras del Sha en Persia o de Batista en Cuba no podían imaginarse el retroceso que luego sobrevendría cuando la inconformidad y la ira populares se abrieron cauce hasta alcanzar el poder. ¿De qué vale, pues, crecer ilegalmente a ritmo del diez por ciento, si existe un riesgo enorme de que la aventura termine con un brutal desplome económico?

Por otra parte, no es la democracia lo que frena el desarrollo, sino el mal uso que de ella hacen ciertas sociedades. No es culpa del método democrático si la justicia es lenta o venal, o si los funcionarios son corruptos. Es una burda falsificación de la verdad achacar a la democracia la ineficiencia del sector público, el derroche de los recursos nacionales o la prevaricación de los políticos. La democracia puede funcionar ejemplarmente, como en Suiza, Austria u Holanda, o de manera muy deficiente, como en casi toda América Latina, pero el bueno o mal uso que se haga de este método de gobierno hay que imputárselo a la sociedad que lo utiliza y no al método en sí mismo. A nadie se le ocurrirá acusar al sistema de comunicaciones telefónicas, a la telefonía en abstracto, sólo porque no puede utilizarlo debidamente en su país. La tecnología está ahí, el modo de aplicarla se conoce, hay decenas de pueblos que se sirven de ello eficientemente. Luego el mal no está en la telefonía sino en los que no saben beneficiarse de sus comprobadas ventajas. Por eso resultan singularmente estúpidos los argumentos contra la democracia y la

economía de mercado que se escuchan en nuestro continente al enfrentarse al espectáculo deprimente de las favelas de Brasil, los gamines de Bogotá o los siniestros barrios de indigentes de Santo Domingo o Lima. Nada de eso quiere decir que la democracia no funcione adecuadamente. Quienes no funcionan adecuadamente son nuestras sociedades, tal vez por los rasgos psicológicos predominantes, quizás por la ausencia de los valores que se precisan, acaso porque no entendemos a cabalidad lo que significa el método democrático, y seguramente porque tampoco hemos conseguido identificar los aspectos legales que mejor sirven a un modelo económico eficiente y generador de riquezas.

Trataremos ahora de distinguir los rasgos más llamativos del marco jurídico más adecuado a la creación de riquezas.

El marco jurídico

Teóricamente las personas, las tribus, organizan sus transacciones dentro de las instituciones del Estado, y nombran, eligen o contratan a unas personas para que administren o gobiernen ese Estado de acuerdo con unas reglas o leyes escritas o consagradas por la tradición.

Para que los resultados económicos resulten fructíferos es importante que el pueblo y los gobernantes tengan una clara idea del peso y los roles que les corresponden. Primero, el pueblo tiene que sentir que el Estado le pertenece, que las instituciones que existen no tienen otra finalidad que facilitar la vida civil de los habitantes del país.

Segundo, los gobernantes tienen que entender que no son o no deben ser otra cosa que humildes servidores públicos. No han sido elegidos o contratados para mandar sino para obedecer los mandatos del pueblo. Tercero, deben estar permanentemente sometidos al escrutinio de la sociedad que los ha colocado en sus puestos. La función del gobierno nunca es vigilar a la sociedad. Es o debe ser a la inversa.

Cuando esta relación de fuerzas ocurre, cuando el gobierno está subordinado al peso de la sociedad civil y el pueblo siente que las instituciones le pertenecen, la democracia funciona infinitamente mejor y los índices de crecimiento económico suelen dispararse.

En América Latina, lamentablemente, esa no es la percepción común de nuestra gente. Nosotros no sentimos que las instituciones del Estado han sido segregadas por nuestra sociedad mediante un parto natural. Tampoco creemos que nuestros gobernantes son servidores públicos. De ahí que sea frecuente entre nosotros el espectáculo deprimente de la insurgencia guerrillera o terrorista, el desafío permanente de los estudiantes, gremios obreros y círculos intelectuales, no sólo contra el gobierno de turno sino contra las instituciones del Estado. Si hubiera que darle un nombre a este lamentable fenómeno, creo que escogería el de *alienación*. Los latinoamericanos vivimos *alienados* con relación al universo político en que habitamos, lo que provoca unas nefastas consecuencias económicas.

En todo caso, en las sociedades democráticas, eficientemente gobernadas hay varias características jurídicas que se repiten y hacen posible el surgimiento de la prosperidad.

La más importante es la confianza en un poder judicial honesto e independiente, capaz de administrar la ley con razonable equidad. Y entre esas leyes una de las insustituibles es la que garantiza el cumplimiento de los contratos. Si no hay seguridad jurídica es muy difícil o imposible el crecimiento económico. No es en los textos de Keynes o Friedman donde se esconde el mayor secreto de la prosperidad, sino en los códigos de comercio y en la legislación civil, pues sin leyes y sin tribunales no son posibles el desarrollo y el enriquecimiento de las personas y los pueblos.

Por lo demás, es inútil o infantil suponer que se puede decretar o legislar la creación de riquezas. Todas esas constituciones que ordenan y mandan que se haga justicia social, suelen olvidar que los servicios que el Estado presta tienen un costo que se podrá o no sufragar de acuerdo con la intensidad y el éxito de los productores de bienes y servicios, pero si la ley, en nombre de una abstracta piedad, ata las manos de esos creadores de bienestar, lo que conseguirá será un mayor grado de pobreza. Pasemos, pues, al marco económico, última esfera en la que deben estar presentes ciertos componentes que forman parte de la ecuación del éxito.

El marco económico

Aunque parezca una insensatez es bueno observar, de comienzo, que *la economía* es una ciencia con tantas limitaciones que su dominio difícilmente servirá para encontrar el camino del desarrollo y la prosperidad. De ahí lo escasamente útil que resultan las pasiones académicas a la hora de proponer un recetario que cure nuestros males económicos. La verdad definitiva no está en los economistas de la oferta o de la demanda; tampoco en los monetaristas que vigilan con ojo cauteloso la masa monetaria o la velocidad de su circulación, especialmente cuando nos referimos a economías de mercado, abiertas y competitivas.

El elemento clave, pues, no es la referencia intelectual, sino la actividad impredecible de los empresarios y de sus empresas, y esa actividad no puede ser estudiada a partir de los criterios de los economistas, porque está arraigada en el misterio de la naturaleza humana. Sin embargo, es perfectamente posible afirmar que ese empresario donde da sus mejores frutos sociales es en una economía en la que los precios estén arbitrariamente controlados, sino que fluctúen de acuerdo con la oferta y la demanda. Y no porque los controles de precios sean justos o injustos –lo cual pertenece al capítulo de la ética–, sino porque son imposibles. Hace muchos años que Ludwig von Mises lo explicó en su libro sobre el socialismo: en una sociedad compleja es imposible conocer el valor de las cosas fuera de las transacciones del mercado. Y cuando se asignan arbitrariamente los precios, se falsifica el factor básico en el proceso productivo.

Por supuesto, ese mercado libre no debe ser proteccionista, porque de la libertad de comprar y vender, de importar y exportar, depende la existencia de precios bajos. Mientras menos controles y mientras más competencia, más bajos deben ser los precios para el consumidor y mayor calidad debe estar disponible, o precisamente porque éstas son las categorías en las que se compete.

Naturalmente, siempre hay una excusa para solicitar un arancel protector que nos permita medrar cómodamente, y siempre hay argumentos patrióticos para proteger ciertas actividades comerciales de la competencia foránea o doméstica, pero la experiencia nos ha enseñado, a lo largo de muchas décadas, que esa política conduce al encarecimiento y al envilecimiento de la producción. Es muy sencillo de explicar: la única razón por la que las grandes y pequeñas

empresas se esfuerzan en producir bienes y servicios mejores y más baratos es porque pueden ser liquidadas en la lucha por conquistar los mercados si así no lo hacen.

Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos revela una verdad profunda: el mercado libre es el terreno en el que se libra la batalla por el progreso y en el que la humanidad va cambiando constantemente de perfil. Y quien sienta cierta nostalgia por la palabra *revolución*, puede transformarse en el más formidable de los revolucionarios sólo con convertirse en un defensor a ultranza del mercado.

Obviamente, para que los empresarios puedan acudir a ese mercado, deben estar en condiciones económicas de hacerlo, y para esos fines no hay duda de que el Estado, además de proporcionar una moneda estable, libremente intercambiable por otras divisas, no debe ahogarlos con una presión fiscal excesiva. Esto se comprobó singularmente en el Japón de la década de los cincuenta, cuando se salió de la crisis y de la recesión bajando los impuestos y estimulando el ahorro. ¿Por qué Japón tiene una tasa de ahorro en torno al 20%? Porque ese ahorro no se castiga con impuestos. ¿Por qué los intereses en Japón son relativamente bajos? Porque la masa de ahorro disponible es enorme. ¿Por qué la incesante actividad comercial de los japoneses? Porque esa masa de ahorros ha servido para impulsar la creación de millones de empresas de todos los tamaños a partir de 1945.

Hay otro elemento importantísimo que aparece ahora en estas reflexiones, pero que equivocadamente suele situarse fuera del marco de la economía: me refiero a la educación. La creación de riquezas siempre es posible a partir de un determinado *quehacer*, y esos quehaceres son siempre el producto de unos saberes previos.

Pues bien: cualquier observador que analice el proceso de enriquecimiento de los pueblos más afortunados del planeta, sin ninguna dificultad va a descubrir que hay una relación directa entre el grado de dominio de la técnica y la ciencia y el grado de desarrollo económico. En la era de las naves espaciales, de las computadoras y de la ingeniería genética, era en la que se multiplican exponencialmente los bienes y servicios disponibles, es ridículo y totalmente irracional exigir que se nos brinde una vida confortable y moderna a cambio de nuestros productos tradicionales,

obtenidos por los viejos métodos de siempre. No es sólo en el café, el banano, el azúcar, el cobre o el petróleo donde está la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Hoy, fundamentalmente, está en la adquisición de las destrezas y los conocimientos que dan la vida a nuestro mundo contemporáneo, es decir, en la educación y la información.

Bien, hasta aquí este brevísimo *Tratado de la Prosperidad*. Comprendo que la fórmula descrita no deja demasiado espacio para el optimismo, pero tampoco nos cierra las puertas del éxito. El camino del enriquecimiento es largo y lleno de dificultades, pero mientras más tarde nos pongamos en marcha peor será para todos.

Miami, 12 de enero de 1992

X

EL SOCIALISMO, EL MERCADO Y LA NATURALEZA HUMANA

Situémonos como en los guiones que acompañan las obras de teatro. Verano de 1992. Moscú. Oficina suntuosa si se juzga por los cánones de la pobre estética soviética. Frente a mí, un anciano ruso con gran personalidad que habla y piensa en inglés brillantemente. Se trata de Alexander Yakolev, principal teórico de la perestroika. Fue el verdadero poder intelectual tras el trono político de Gorbachev. Durante dos horas hemos discutido sobre la historia del comunismo ruso. La conversación se hace densa, pero –al mismo tiempo– comienza a dispersarse en anécdotas. Le pido que volvamos al corazón del debate: por qué fracasó el comunismo; por qué se hundió tras conquistar el espacio y expandirse por todos los continentes. Yakolev se queda pensando. «¿Quiere usted que mencione una sola causa?» –me pregunta con cierta ansiedad. Implacable, no le dejo otra opción: «Sí, dígame la razón fundamental de este fracaso». Yakolev hace una larga pausa, me mira a los ojos, y dice lo siguiente: «El comunismo no se adapta a la naturaleza humana». Lo afirmó en un tono francamente melancólico.

Sicología individual y sistema político

Es en este punto en el que yo quiero comenzar mis reflexiones sobre el mercado, la libertad y el socialismo. El tema de este seminario, por encima o por debajo del nombre que se le haya dado, tiene que ver con el modelo de sociedad en el que deseamos vivir. Y se supone que todos, conservadores, liberales, socialdemócratas y comunistas, o cualesquiera de sus múltiples combinaciones, queremos vivir en sociedades prósperas y justas, pero no nos ponemos de acuerdo en la forma de alcanzar esos objetivos. De lo que se trata, entonces, es de explicar, con la mayor claridad posible, por qué una fórmula es mejor o peor que otra.

¿Por dónde comenzar a ordenar las ideas? Yo diría que por esa misteriosa entidad nombrada por Yakolev: *la naturaleza humana*. Por el sujeto que tiene que actuar de una manera o de otra. Es decir, comenzaría por acercarme a la psicología de los seres humanos para tratar de

encontrar algunos elementos que luego me sirvan para proponer un modo de comportamiento social.

No debe ser muy descabellado pretender que las *aptitudes* naturales encajen más o menos adecuadamente en las *actitudes* que luego se demanden. A los olmos no se les piden peras porque está visto que se niegan obstinadamente a complacernos. Pedirles a las personas cosas que contrarían su propia naturaleza es algo que, generalmente, no da buenos resultados.

¿Qué había en el comunismo que no se aceptaba a la naturaleza humana? Yakolev nunca me contestó esa pregunta, porque no se la hice, pero yo me atrevo a esbozar una respuesta: porque negaba la esencia del individuo. Porque apelaba a la Humanidad en abstracto y se olvidaba de los individuos concretos. Se olvidaba de que el rasgo más notable e inquietante que distingue a las personas del resto de las criaturas del planeta, es la fuerte conciencia de un yo individual que domina nuestros actos. Un yo que demanda esfuerzos extraños y extraordinarios, día a día, minuto a minuto, desde que abrimos los ojos en la mañana, hasta que los cerramos en la noche, y así hasta el momento en que alguien nos extiende la piadosa cortesía de bajarnos los párpados para siempre.

Cada uno de nosotros –al contrario de las abejas o de las panteras, gobernadas por instintos mecánicos– tiene que alimentar emocionalmente ese yo insaciable e incansable. Es decir: estamos obligados a construir una imagen íntima de nosotros mismos y a proyectarla entre la multitud de los otros yo que nos rodean. Para eso vivimos. Para eso trabajamos. Para eso amamos y odiamos, porque las emociones no son otra cosa que la expresión de esa batalla incesante que mantiene nuestro yo con el yo no siempre hospitalario y cooperador de los demás.

Es a partir del humilde y taciturno reconocimiento de esta premisa que podemos comenzar a proponer un modelo de interacción social que sea verdaderamente realista. Y ese realismo de inmediato nos alerta sobre la existencia de unas individualidades irreductibles. Unos yo que se resisten a la uniformidad porque su vocación y su destino biológico son ser distintos, diferentes, claramente identificables entre la enorme abundancia de congéneres.

El individuo, la libertad y la utopía

Bien: ¿qué tiene que ver el reconocimiento de que la sociedad está formada por individuos que luchan por desplegar su *yo* sobre el *yo* de los demás con el tema de este seminario? Tiene que ver mucho. Y tiene que ver, porque esa batalla se da en el terreno de la competencia, se da precisamente en el terreno del mercado.

Cuando los economistas hablan de mercado y de competencia suelen referirse a empresas que venden ciertos productos a ciertos precios, y a consumidores que los adquieren o los rechazan, pero el concepto se puede extender a un ámbito muchísimo más amplio y complejo. Al extremo de que tal vez sea posible afirmar que casi todos los actos voluntarios que llevan a cabo las personas se enmarcan dentro de una relación de oferta/demanda que nos permite hablar de mercado. Todo lo que hacemos –elegir una carrera, proponer una relación amorosa, incluso seleccionar el ocio, la inactividad– es, o debe ser, el resultado de seleccionar una opción entre varias que se nos brindan, y casi siempre el resultado de esa selección es la consecuencia de haber identificado racional o instintivamente lo que creemos que nos *conviene*. Lo que creemos que nos conviene *ofrecer* o lo que creemos que nos conviene *aceptar*.

La libertad, en último análisis, es eso: poder tomar sin interferencias la mayor cantidad de decisiones en todos los ámbitos concebibles. Y mientras más decisiones tomemos, más estamos expresando nuestro *yo* íntimo. Más estamos perfilando nuestra infatigable individualidad.

Es posible que esta necesidad psicológica de prevalecer, de afirmarnos constantemente, que caracteriza a nuestra especie, exija una cruel carga de esfuerzo y energías, pero también es posible que todo el progreso humano acaso se deba a esta extraña y oscura urgencia interior que nos impulsa a actuar de una manera diferente y a cambiar la realidad con cada uno de nuestros actos.

Por eso se equivocaban los marxistas cuando pretendían, en nombre de unas supuestas leyes históricas, que un pequeño grupo de elegidos –la vanguardia del proletariado, el partido comunista– tomara las decisiones económicas y políticas en representación del resto de sus ciudadanos. Marx seguramente no descubrió *las leyes* que regulan el curso de la historia –entre

otras cosas porque no existen– pero atentó contra el delicado mecanismo interior de quienes debían ser los agentes de su epopeya. Marx no se dio cuenta de que las personas *necesitan* tomar sus decisiones libremente, en el terreno de las opciones múltiples, porque la vida de los seres racionales consiste en participar individualmente en un inacabable proceso de tanteos y errores, el que muy bien puede concebirse como una especie de mercado infinito en el que todos los hechos que acaecen se interrelacionan y afectan mutua y constantemente.

Por eso las utopías políticas son tan dañinas y peligrosas, tan contrarias a la naturaleza humana. Los utopistas, los ingenieros humanos, pretenden saber lo que les conviene a las personas, y definen y deciden cómo debe ser la sociedad, lo que los condena a tratar de extirpar a todo los seres *malignos* que se oponen a ese destino radiante. De ahí que los sueños utópicos invariablemente terminen en sangrientas pesadillas.

Los utopistas, los ideólogos convencidos de que saben de dónde viene la humanidad, y –lo que es más grave– hacia dónde le conviene marchar, ignoran que el barro primigenio con que el hombre está hecho es el de la incertidumbre, la indeterminación, la falta, precisamente, de un destino unívoco, porque su vida cambiante la va construyendo lentamente con trillones de decisiones instantáneas que escapan a cualquier formulación esquemática, circunstancia que contribuye, al mismo tiempo, al enriquecimiento, la variedad y el permanente estímulo creativo. La gran aventura humana es eso: no conocer lo que hay detrás del horizonte, pero salir todos los días a perseguirlo, aun a sabiendas de que el mañana, como nuestra sombra, siempre se desplaza junto a nosotros y a la misma inseparable distancia.

Schumpeter y la destrucción creadora

Algo de esto intuyó y dejó escrito un economista mucho más sabio y atinado que Marx, austriaco Joseph Schumpeter. Para Schumpeter, detrás de cada éxito empresarial estaba la mano más enérgica del capitán de industrias. Estaba la mano del hombre. Había una inteligencia perspicaz que descubría oportunidades en el mercado, y una voluntad tenaz capaz de coordinar todos los factores para convertir esa oportunidad en una manera de obtener beneficios, éxito social y reconocimiento público: es decir, alimentos para la voracidad incurable y beneficiosa del ego al que nos hemos referido.

En los sistemas en los que se persigue la individualidad y se les cierra el camino a los espíritus más audaces y creativos –como ocurre con el socialismo–, lo que se consigue no es una sociedad más justa e igualitaria, sino una sociedad más pobre, porque se priva al conjunto de ciudadanos de los efectos benéficos que suelen aportar los más enérgicos líderes de la comunidad.

Es cierto que esa tensión competitiva puede dar origen a *estrés* o a comportamientos neuróticos en quienes la sufren fuertemente, pero no debe olvidarse que los que han elegido luchar por ser los primeros en la política, en la empresa, o en la creación artística, sometiéndose a unas tormentosas presiones interiores, también lo han hecho de una manera libre. Han optado por eso. Han querido vivir esas vidas porque les complace esa agobiante tensión interna.

Esto es importante subrayarlo, dado que entre los críticos de la economía de mercado y de la libre empresa, no faltan quienes censuran este modelo de sociedad alegando razones morales, y calificando de *rat race*, de carrera de ratas, la voluntad de competir, presentando a los empresarios triunfadores como gente despiadada, sin alma, olvidando que, en gran medida, a ellos se debe el despegue económico del conjunto de la sociedad

Hay cierta benevolente insolencia en los ingenieros humanos cuando nos predicán lo que es moral o inmoral en nuestro comportamiento con relación al trabajo, cuando pretenden dictarnos lo que es *anómalo* o lo que es *normal*, partiendo de prejuicios ideológicos artificialmente consagrados en los libros de las sectas, olvidando los fundamentos de la psicología individual, pero ese error de juicio –no exento de arrogancia– no es menor que el terror que suele inspirarles no ya la competencia entre personas, sino la competencia entre empresas.

El argumento contra la libre competencia entre las empresas unas veces lo asumen los sindicatos y otras veces los propios gremios empresariales. Unos porque temen que la quiebra de las compañías en las que trabajan los deje sin empleo, y otros porque defienden sus intereses económicos particulares a dentelladas, aunque escudándose tras la excusa del bien común que supuestamente se verá afectado con el cierre de las empresas. Y de la misma manera que ante el temor a la

competencia individual surge la expresión rencorosa de *carrera de ratas*, el miedo a la libre competencia empresarial provoca la expresión, cargada de amargos tintes, de *capitalismo salvaje*.

No es cierto. El capitalismo y la competencia no son salvajes. Son riesgosos, pero ahí, en ese riesgo a desaparecer, a ser superados por otros y a veces a ser barridos del mercado, radica, precisamente, el elemento *perfeccionador* de la sociedad.

Cuando los sindicatos les ponen trabas a la competencia para proteger puestos de trabajo lo que están haciendo es obstruir el mecanismo básico sobre el que descansa el progreso de la humanidad y la prosperidad colectiva; obstruyen, paradójicamente, el elemento esencial para generar ahorro, mejoras en las formas y niveles de vida, y –por ende– la propia creación de empleo.

En un mercado libre, en el que las empresas puedan competir, las preferencias de los consumidores se encaminarán a seleccionar los productos que tengan mejor precio, más calidad, o que contengan innovaciones que, de alguna manera, nos hacen la vida más placentera. Eso determina un clima de constante emulación, en el que la búsqueda de la excelencia es un imperativo empresarial para poder sobrevivir.

¿Por qué todos los observadores de la triste realidad económica de los países socialistas invariablemente nos hablan de sociedades grises, incómodas, atrasadas, llenas de artefactos de inferior calidad que los que se podían obtener en Occidente? ¿Por qué –por ejemplo– los coches que se fabricaban en la Alemania comunista eran peores a los que se fabricaban en la Alemania Federal, pese a que los obreros, todos alemanes, gozaban de las mismas características culturales?

Sencillamente, porque los automóviles fabricados en la Alemania occidental estaban sometidos en una agónica competencia interior y exterior. Los *Volkswagen* tenían que competir con los *Opel*, los *BMW* o los *Mercedes*, y luego con el resto de la industria exterior, proponiéndole al consumidor su mejor oferta disponible. Los *Traband*, en cambio, podían ser todo lo malo que quisiera el fabricante, porque el consumidor era su cautivo y no su amo.

Es verdad que dentro de la economía de mercado un fallo en las finanzas, en la ingeniería, en la distribución o en el marketing puede provocar el cierre de la fábrica y el despido miles de obreros, pero ese riesgo permanente es lo que mantiene en mejora constante los niveles de precio y calidad y lo que le confiere al mercado la distinción de ser el único sitio donde, efectivamente, se lleva a cabo la revolución permanente.

Es, desde luego, una ingenuidad de los sindicatos tratar de proteger puestos de trabajo librando a las empresas de la competencia. Es posible que temporalmente, por estas presiones, ciertas personas no pierdan su empleo, pese a trabajar en compañías ineficientes, pero de ahí se deriva el empobrecimiento general de la sociedad. Exactamente por eso las viviendas en el mundo socialista son más oscuras, pequeñas e incómodas. Exactamente por eso sus ropas están peor manufacturadas y espantosamente diseñadas. Exactamente por eso el nivel científico y tecnológico de los países comunistas resulta considerablemente más bajo que el de Occidente. Cometían el inmenso error de omitir el riesgo y la competencia en su sistema de producción.

No hay duda de que los alemanes que derribaron el muro de Berlín querían repetir el éxito económico de sus compatriotas y vecinos, accediendo a un modo de vida rico y fulgurante, pero *objetivamente* lo que conquistaban al cambiar de sistema de producción era el derecho a competir, porque ésa era la clave principal de la riqueza lograda en Occidente. Derecho que, cuando se asume el papel de consumidor, está lleno de recompensas, pero derecho que sólo se legitima cuando también se aceptan las responsabilidades y los riesgos de la competencia en el momento en que nos toca jugar el rol de productor. Obviamente lo que no debemos pretender es consumir con el ademán exigente de la economía de mercado, y querer producir, sin embargo, con la mentalidad proteccionista y temerosa de la economía socialista. Es indispensable la coherencia y la aceptación de los dos polos del modelo elegido. Si queremos la prosperidad, el progreso y el desarrollo, tenemos que aceptar el riesgo.

¿Estamos defendiendo una especie de *darwinismo* económico, en el que sólo sobreviven los productores más alertas y eficaces? Sin duda alguna, pero no hay que temerle demasiado a las palabras. Afortunadamente, también podemos volver los ojos al citado Schumpeter y encontrar en sus textos lo que este economista llamaba la *perenne tempestad de la destrucción creadora*. Es

verdad que los más ineficientes caen y desaparecen, pero otros mejores los reemplazan sin que sufra demasiado el cuadro general de la economía.

Un ejemplo concreto puede explicarnos este fenómeno: es cierto que la *IBM* –por citar un caso de nuestros días– comienza a tambalearse y pierde cuotas de mercado que a medio o largo plazo pudieran provocar su desaparición, pero los empleos que se evaporan de la nómina de este gigante, aparecen reflejados y aun multiplicados en las de *Apple*, *Dell*, *Microsoft* o el resto de las compañías surgidas al calor de la competencia. Por otra parte, *IBM* sabe con total precisión lo que tiene que hacer para sobrevivir en el mercado: reducir costos, agudizar la imaginación, y crear mejores productos a precios más ventajosos, porque –de lo contrario– el implacable consumidor lo va a castigar seleccionando otras firmas más complacientes en el momento de adquirir los productos que necesita.

Mercado y nacionalismo

Además, ese proceso de selección –si los gobiernos no lo obstaculizan– no va a tener en cuenta el origen del producto, porque otra de las virtudes del mercado es que pone fin a las supersticiones del nacionalismo. Los norteamericanos por citar el caso más notorio, aunque están sometidos a un constante y demagógico bombardeo para que elijan los automóviles nacionales en lugar de los japoneses, argumento que, en abstracto, pudiera resultarles simpático, cuando llega el momento de elegir el coche, no se guían por la emoción patriótica, sino por la relación precio/calidad de lo que les ofrecen los japoneses y europeos con respecto a lo que les brinda la industria americana. Es obvio que el patriotismo, como la caridad, comienza por casa.

De este comprensible hecho se derivan dos lecciones que vale la pena retener. La primera nos reitera que, pese a la mitología del nacionalismo, son mucho más determinantes los intereses personales que los supuestos intereses colectivos. Y la segunda nos sugiere la tremenda ventaja potencial de ese egoísmo indestructible que la especie exhibe constantemente y de mil maneras.

En efecto: la forma más adecuada de armonizar a las naciones consiste en estimular intereses comunes, vincularlas comercialmente, someterlas a los rigores de la competencia internacional, y

dejar que la creciente trama de transacciones económicas vaya aunando lo que suele desunir la irracionalidad de los nacionalismos patrióticos.

Este elemento pacificador que se deriva del mercado no impide, como era fatalmente predecible, que quienes demuestran la *carrera de ratas* producida por el individualismo creador, y quienes, por miedo a la competencia, predicán contra los supuestos horrores del *capitalismo salvaje*, también censuren la existencia e implantación de las multinacionales, clamando contra los peligros de que estos poderes económicos se desplacen al campo de las decisiones políticas, desdibujando los perfiles nacionales de los países en que se instalan. De esta suerte, en España, donde vivo, es frecuente escuchar frases llenas de desprecio contra la *Europa los mercaderes*, y contra el espíritu de integración y colaboración económica, en un Continente que comenzó a unirse con la creación de un mercado común para el acero y el carbón, fórmula que parece haber relegado al pasado muchos siglos de guerras espantosas.

Nada más injusto que esta acusación. Es cierto que la internacionalización de la economía contribuye a crear una cierta uniformidad en las sociedades, uniformidad contraria a los rasgos particulares de las naciones, pero es difícil pensar que esta consecuencia del comercio sea negativa. Quienes se yerguen contra la economía de mercado en el plano internacional, alegando una misteriosa superioridad espiritual de muy difícil definición, olvidan que el mejor garante de la paz y el progreso son esos negociantes capaces de crear fuertes lazos supranacionales. Seamos francos: no son las compañías que operan en Belgrado y Sarajevo –a veces las mismas– las que están en guerra. Y si por ellas fuera, nunca se habría desatado ese conflicto, porque no hay nada que repugne más a las actividades económicas que el estallido de las guerras.

Los politólogos y los historiadores suelen afirmar, con toda razón, que las democracias jamás comienzan las guerras, pues esa bárbara actividad siempre requiere la mano iniciadora de una persona o de un grupo de personas totalmente divorciadas de los intereses de la comunidad, pero a esa certera aseveración se le podía añadir que los comerciantes y los productores –no obstante las frecuentes opiniones contrarias– tampoco suelen propiciar los conflictos. Existe, por supuesto, la leyenda de países que recurren a la guerra para escapar de sus crisis económicas –leyenda propagada por los enemigos del mercado– pero es imposible demostrar tal cosa cuando

se examina el verdadero origen de los enfrentamientos bélicos. Por el contrario, todos los síntomas apuntan en la otra dirección: si algún día logramos que ceda la locura del nacionalismo fratricida y se establezca un clima realmente pacífico en el mundo, eso acaso sólo podrá ocurrir cuando los vínculos económicos y las fuerzas del mercado hayan debilitado notoriamente las fronteras políticas.

Al fin y a la postre, hay algo demencial en colocarles gentilicios a los artefactos que construyen las personas. Hablar de un automóvil *japonés* o *americano* es atribuirles a esos objetos con ruedas y motor un elemento perturbador que sólo tiene sentido en el ámbito humano. Lo importante es que el automóvil sea bueno y tenga un mejor precio. Y tal vez cuando sólo sean ésas las categorías que rijan las relaciones económicas entre las personas, es cuando podremos esperar la desaparición de las guerras entre naciones. Para entonces, el mercado –los intereses económicos individuales– habría puesto fin a las guerras entre naciones, como por –ahora– parece que sucede en esa siempre mal comprendida *Europa de los mercaderes*.

La batalla intelectual

En todo caso, no tiene demasiado sentido intentar destruir los mitos de los adversarios del mercado o revelar las miserias del socialismo el transcurso de una breve conferencia. Sin éxito popular, incluso sometido a todo tipo de escarnios y burlas, pero con mucha más autoridad, rigor y certidumbre, esa tarea ya la llevó a cabo el también austriaco, Premio Nobel de Economía, Ludwig von Mises, primero en un libro titulado *Socialismo*, en el que demostraba la imposibilidad material de dirigir eficientemente desde el gobierno las actividades económicas en sociedades complejas, y cuatro décadas más tarde, en su obra maestra, *La acción humana*, implacablemente traducida al castellano, pero definitiva para todo aquel que quiera entender cómo y por qué la economía de mercado es más eficaz, justa y generadora de riquezas que cualquier otro de los modelos que nos han propuesto el socialismo marxista o sus epígonos inquietantes.

Tampoco sería muy útil repetir aquí los argumentos de Hayek en los *Fundamentos de la libertad* o en *Camino de servidumbre*. Este brillante economista y jurista, inevitablemente austriaco, también Premio Nobel, muerto recientemente, dejó escritos en estos dos libros –y especialmente

en el primero mencionado– todos los razonamientos necesarios para desmontar los sofismas de los enemigos de la libertad económica. Es, pues, tan aburrido y reiterativo el debate, que si no fuera un gesto hostil y desdeñoso, al que no tenemos derecho quienes creemos en el respeto a las ideas ajenas, bastaría con levantar un inventario de los argumentos socialistas y los demolidores contrargumentos liberales, para zanjar las disputas con una breve referencia bibliográfica.

A quien prescriba la tontería de querer hacer justicia mediante el control de precios, se le remite al capítulo y página correspondiente para que se eduque y abandone su error conceptual. Y lo mismo se le hace a los arcangélicos ciudadanos que pretendan acceder al reino de igualdad por medio de la creación de subsidios estratégicos, a los que le asignan al Estado el papel de motor de la economía, o a esos nobles seres, persuadidos de que el desarrollo y la justicia social son la consecuencia de decisiones tomadas por partidos políticos transidos de benévolas intenciones.

Lo que quiero decir es que en las obras de Schumpeter, Mises, Hayek, Buchanan, Friedman, Berlin, Coase, Kirzner, Hazlitt, Becker, Popper, y otra veintena de pensadores, como antes en las del padre Adam Smith, está todo el aparato conceptual para no tener que perder más tiempo refutando insensateces y costosos disparates. No hay duda: casi todo está dicho, fatigosamente dicho y demostrado, unas veces argumentos lógicos, otras con complicadas fórmulas matemáticas, y siempre con una dosis aplastantes de sentido común. Lo que no impide –hay que aceptarlo– la cíclica reaparición de inmortales tonterías, inmunes, por lo visto, a los embates de la verdad o al constante asedio de la experiencia práctica.

Sin embargo, pese a la evidente superioridad intelectual de las ideas en las que descansa la economía de mercado, no podemos declarar nuestra victoria y abandonar el debate político. Pese a lo aburrido que pudiera resultar, estamos condenados a insistir una y otra vez en la defensa de la libertad económica, hasta que un número abrumador de nuestros ciudadanos comprenda las razones básicas que explican nuestro atraso relativo y el éxito de otros, pues nuestros pueblos sólo podrán actuar de forma política sensata cuando entiendan las causas reales de la pobreza que nos aflige, y descubran que nuestro subdesarrollo no se debe a la economía de mercado, sino a la violación, precisamente, de las reglas de este modelo, y a otros factores culturales violentamente enquistados en nuestra tabla de valores. Hay, pues, que explicar una y otra vez el *corpus* teórico

sobre el que se sustentan la libertad y el progreso hasta que los ciudadanos descubran la verdad y marginen el error; pues sólo quienes comprenden bien, pueden elegir bien y actuar bien.

¿Quiénes pueden llevar adelante esa inmensa tarea pedagógica? Por supuesto que el gobierno, a través de las instituciones de enseñanza pública, o a través de la radio y la televisión educativas, pero quien mejor la puede hacer y a quien mejor le corresponde esa tarea es a la empresa privada. Más aún: constituye un acto mayor de irresponsabilidad no hacerlo. Y no sólo por el servicio que se le presta a la comunidad, sino para que podamos disfrutar de un clima seguridad y sosiego en el que las transacciones económicas puedan llevarse a cabo con todas las garantías de que un cataclismo social no va a destruir nuestros esfuerzos.

Comencé estas reflexiones por afirmar que los sistemas económicos deben tener en cuenta la misteriosa naturaleza psicológica del ser humano, y quiero terminarlas con otras observaciones sobre el mismo asunto: ese yo irrepitible que construye la historia día a día está cargado de una cierta información que luego se traduce en modos de acción. No hay ningún enigma: todos sabemos que las ideas tienen consecuencias. De lo que se trata, entonces, es de propagar las ideas correctas, difundir los valores más útiles, y confiar en que sólo eso –la carga informativa que poseen– es lo que determina que unos pueblos sean inmensamente más ricos, pacíficos y felices que otros.

San Salvador, 10 de septiembre de 1993.

XI

IBEROAMÉRICA: REFLEXIONES PARA LOS HOMBRES POCO *FABER*

No es un hecho fortuito que los filósofos hayan llamado al ser humano *homo sapiens*, *homo habilis*, *homo faber*. Lo que lo distinguía de las demás criaturas era que podía saber, que era capaz de fabricar cosas. Y tampoco es un hecho arbitrario que los historiadores clasifiquen y cataloguen las edades de acuerdo con el desarrollo de las capacidades técnicas. De ahí la *Edad de Piedra*, *del Hierro*, *del Bronce*, *del Oro*. De ahí –también– el estudio cuidadoso de los objetos de barro.

Por supuesto, tal vez hubiese sido posible ensayar una historia del hombre basándonos en el estudio de las distintas teogonías, o de la forma en que organizaban sus gobiernos o transmitían la autoridad, pero mientras no existió huella escrita de la aventura humana, no existió manera alguna de dejar constancia de ese territorio abstracto de la imaginación segregado por las distintas sociedades a lo largo de la lenta evolución.

De manera que hay que contar con los objetos, con los artefactos, para poder penetrar en la esencia del hombre. El hombre es y está condicionado por las cosas que lo rodean. Su circunstancia ha sido la rueda, la espada, el telar, el arco, la rueca. Hoy es la computadora y el avión, los antibióticos o los *chips* de silicio. Y este preámbulo pudiera parecer un innecesario recuento de cosas sabidas, si no nos fuera útil como punto de partida para el desarrollo de la idea central: la difícil, la problemática relación de las criaturas de nuestra cultura hispanoamericana con las cosas, con los artefactos, con los objetos.

La complejidad creciente

Prosigamos visitando lugares comunes. Lo obvio a veces es un buen punto de partida para alcanzar lo inesperado. Trasladémonos a un documento cualquiera del siglo XVII. Por ejemplo, al testamento de Cervantes. Y ahí veremos –si no me falla la memoria– que el escritor, viejo y pobre, aunque famoso, lega muy pocas pertenencias a los herederos. ¿Qué encontramos?

Nimiedades: unos paños, unos manteles, unos libros, unos arcones, alguna capa raída, jubones y algún otro elemento perfectamente desdeñable.

Era muy poco lo que tenía Cervantes, pero también era muy poco lo que tenía el Rey de España. El Rey, sí, tenía castillos y palacios, soldados y caballos, tapices y retratos, pero el universo de ambos, el del vasallo y el del señor, estaba poblado por una cantidad limitada de objetos, y casi todos ellos podían ser reproducidos por los artesanos y maestros locales. Es cierto que la bolsa magra de Cervantes no alcanzaba para adquirir un costoso reloj o unos cubiertos de plata y oro, pero aquel mundo anterior a la etapa industrial y al surgimiento de la electricidad carecía de complejidades técnicas y científicas. Lo que tal vez explica, probablemente, que una nación como España, no orientada hacia la ciencia, dirigiera los destinos del planeta. Todavía el poder no radicaba de una manera clara ni en la información ni en la capacidad creativa de los científicos y técnicos.

Forjar espadas y curtir pieles estaba al alcance de todas las naciones europeas de la época. Urdir tejidos y soplar vidrio era también parte del patrimonio cultural colectivo del Viejo Continente. Fundir cañones o construir catedrales pertenecía al acervo común. Todavía no se habían despegado ciertos pueblos del norte de Europa. Todavía, cualitativamente, era poca la distancia que separaba a Amsterdam de Sevilla, o a ambas de las ciudades que comenzaban a florecer en el Nuevo Mundo. Todavía la especie humana vivía en la edad del músculo. No había comenzado aún la era en que gobernaría su majestad, el cerebro.

No obstante, a partir de la máquina de vapor, esa relación empezó a cambiar. Se fue creando un hiato. Lo que Inglaterra comenzó a fabricar a principios del XVIII, España e Hispanoamérica no lo reprodujeron hasta varias décadas más tarde. Lo que el norte de Europa elaboraría y pondría a la venta a principios del XIX, no es imitado por españoles e hispanoamericanos hasta la segunda mitad de esa centuria. Lo que Estados Unidos, Japón o Alemania hacen en nuestros días, nosotros, en muchísimos casos, tanto en España como en América Latina, no somos capaces de emularlo. Ni siquiera podemos saber si algún día conseguiremos lograrlo.

Lo que quiero decir es que lo que ciertos pueblos orientados hacia la investigación, el desarrollo y el trabajo riguroso logran como consecuencia de sus desvelos, va poniendo una creciente distancia

entre el Primer y Tercer Mundo, mientras se dibuja una melancólica ironía: la causa más formidable de nuestro subdesarrollo de los otros.

Objetos y términos de intercambio

En efecto, cada vez son más numerosos y complejos los objetos que pueblan y determinan nuestra contemporaneidad. Carece de sentido rechazarlos en nombre de una austeridad que sólo puede conducir a la frustración. No hay escape. No es posible convocar a un modo de vida distinto. El hecho de que vivamos en una aldea global nos obliga a cierta uniformidad tecnológica y científica, especialmente a nosotros, que pertenecemos, aunque instalados en un alero, a la civilización euroamericana. Y no nos es dable enterrar la cabeza en la arena o proclamar en nuestra defensa la supremacía de los valores espirituales. Eso es pura demagogia. El *arielismo* es una bella tontería. Nosotros necesitamos computadoras y rayos láser, maquinarias absolutamente precisas, bacterias creadas a la orden en laboratorios de biogenética, rarísimos compuestos metálicos capaces de adaptarse a la navegación aérea de nuestros días, fibras ópticas, energía robada a la estructura de la materia, satélites que multiplican exponencialmente la capacidad de comunicarse y la cuantía de los saberes transmisibles. Nosotros necesitamos viajar en trenes de alta velocidad, averiguar los desperfectos de nuestra anatomía en máquinas que convierten el sonido en imagen, o increíbles cámaras de video aptas para recorrer nuestras arterias hasta llegar al corazón maltrecho. Pero todo eso, y todo lo que vendrá a paso rápido como resultado de la aceleración en la transmisión de conocimientos, se traduce en objetos muy lejos de nuestra actual capacidad técnica y científica o de nuestro castigado bolsillo.

Y ahí radica el núcleo de nuestro drama como segmento inerte de la civilización planetaria. Nosotros seguimos extrayendo cobre, exportando bananas o petróleo, o torciendo tabaco como se hacía en un pasado remoto. Y eso no sería grave si el precio de estos productos fuera suficiente para comprar los artefactos y el *knowhow* que determinan nuestra compleja contemporaneidad. No sería grave si alcanzara para acortar las distancias. Pero ocurre que no es así. Nuestros pobres sacos de café no logran adquirir los *jumbos* y escáneres, y ni siquiera pueden dotar de artefactos digitales las casas de nuestros ciudadanos.

Y frente a esta situación, nuestros revolucionarios, esa pobre gente incapaz de ver la viga en el ojo propio, claman contra *injustos términos de intercambio* sin advertir que lo que ocurre no es que el Primer y el Tercer Mundo comercien de manera leonina, sino que ambos universos realizan sus transacciones dentro de unas coordenadas económicas totalmente asimétricas.

Quejarse de que un tractor hoy le cuesta a un campesino más sacos de café que hace 20 años es una manera de analizar nuestra pobreza relativa. Lo cierto es que en nuestro tiempo ese tractor le cuesta a un campesino de Ohio o de la campiña francesa muchas menos horas de trabajo que lo que le costaba hace 20 años. El tractor es mucho más barato. Y la nevera, y el teléfono, y los zapatos y la ropa. Y así pudiera nombrar prácticamente todos y cada uno de los objetos instalados en la vida cotidiana de cualquier persona del Primer Mundo. Cuestan más dinero, pero son mucho más baratos que hace 10, 20 ó 30 años. Cuestan mucho menos esfuerzo, muchas menos horas de trabajo, porque en el Primer Mundo viven en la era tecnológica.

En cambio, desde nuestra pobre frontera esos objetos se han encarecido, y la clave está en nuestra lenta dinámica comercial y económica. A nosotros, que no pertenecemos a la civilización tecnológica, esos objetos cada vez nos cuestan más dinero y más esfuerzos. Más horas de trabajo. Nosotros no nos hemos dado cuenta de que hay una aceleración de los métodos de producción, distribución y mercadeo, y que esa aceleración tiende a abaratar los objetos dada la constante batalla de la productividad. La eficiencia no encarece los productos o los procesos de comercialización. Es al revés: la eficiencia disminuye los costos porque su objetivo es poder competir en precio y calidad en mercados abiertos.

El asunto tiene una extraordinaria importancia, porque todos nosotros estamos empeñados en una empresa fundamental pero, al mismo tiempo, insuficiente. Nosotros creemos –y es parcialmente cierto– que el origen de nuestros males, y de nuestra pobreza, está en la burocracia parásita, en la arbitraria coyunda que impone el Estado, en la *permisería* que agota frente a mil insolentes ventanillas, en el dispendio de los gobiernos, en la corrupción de muchos políticos deshonestos, en el militaritarismo o en la costosa contrainsurgencia. Y todo eso es verdad. Todo eso lastra nuestra posibilidad de desarrollarnos o de movernos con mayor agilidad hacia cotas más altas de bienestar y riqueza. Pero eso, que hay que atajar con urgencia, no es más que un factor de la

ecuación. Y el otro es tan importante como éste que acabo de describir. Y el otro es que nosotros, si queremos vivir como en el Primer Mundo, tenemos que *saber*, y que *hacer* como en el Primer Mundo, aun el más liberal, honrado y eficiente de los gobiernos no podrá dar el salto a la prosperidad, al pelotón de avanzada, si no cuenta con una población integrada dentro del circuito de conocimientos, saberes y quehaceres científicos y tecnológicos de nuestro mundo.

Hace muchos años que la riqueza no es producto de los bienes con que nos dota la naturaleza, sino de la información que almacenamos en nuestros cerebros, de los objetos que sabemos fabricar o de las actividades que podamos realizar gracias a esos conocimientos. Y de nada vale clamar contra estos rasgos que caracterizan el desarrollo del ser humano. Probablemente siempre ha sido así, sólo que ahora nos movemos a una velocidad de vértigo y nunca el hombre ha sido más *sapiente*, más *habilidoso* y *fabricante*.

¿Por dónde se comienza, entonces, a *desfacer* este entuerto? ¿Por dónde comenzamos a curar los males económicos de nuestra cultura? Creo que el paso inicial es establecer el diagnóstico y darnos cuenta de que la terapia es lenta, de que no hay recuperación súbita, pero que, afortunadamente, hay esperanza.

Y lo primero, por supuesto, es la reforma del Estado. Es decir, hay que abrir nuestras sociedades para que toda la espontaneidad creativa que albergan pueda encontrar un mejor destino. Eso significa, precisamente, ponerle fin al gigantismo económico del Estado y llevar a cabo esa profunda transformación liberal que hoy comienza a ser defendida por todos los gobiernos, con la excepción de Cuba, desde México hasta la Argentina.

Pero, simultáneamente, es muy importante explicarles a los pueblos las claves del desarrollo. Porque nuestros pueblos están inconformes con el modelo de Estado que padecen, pero ignoran los mecanismos que hacen posible la creación de las riquezas. Y si no se conocen los rudimentos básicos de la dinámica económica de nuestros días, o –peor aún– si la información que se tiene está equivocada o ha sido distorsionada por los demagogos y por la nefasta influencia de la tradición revolucionaria latinoamericana, será muy difícil conducir a nuestras sociedades hacia la prosperidad instalados dentro del sistema democrático. Acabará por vencer la tentación autoritaria

que ya vuelve a aletear entre nosotros, o veremos una sucesión de gobiernos reformistas que no pueden llevar adelante su cometido, porque la opinión pública los abandona durante el doloroso proceso de ajuste. Es necesario, pues, educar primero a los electores en materia económica elemental. Explicarles a nuestros desposeídos ciudadanos que nadie les regaló su riqueza a Suiza o a Singapur, o que ningún poder oculto y malvado impide que Perú o Bolivia alcancen un lugar prominente entre los pueblos del planeta. Hay que explicar cómo son las reglas del desarrollo. Hay que aclarar en qué consiste, realmente, la dinámica de la prosperidad creciente para poder contar con la adhesión permanente y leal de nuestros desesperanzados y, a veces, erráticos pueblos.

Universidades y empresas

Pero, mientras se reforma el Estado y se educa al pueblo, hay que llevar a cabo, también, una radical transformación de nuestros sistemas y maneras de transmitir la educación, para que seamos capaces de adquirir los conocimientos y las destrezas que nos permitan competir en el Primer Mundo y participar de su atmósfera creativa.

En las últimas cinco décadas los países que han conseguido remontar la pobreza han situado en la empresa el motor del desarrollo y de la adquisición de conocimientos. En empresas primero simples, que luego se fueron haciendo complejas en la medida en que, de una forma natural, las sucesivas generaciones de técnicos y gerentes iban depurando los procesos productivos, adquiriendo más formación e información, sometiéndose todos a más rigurosos controles de calidad y de eficiencia, como el ya famoso método *Deming*, tan popular en Japón desde 1950.

Es imposible decidir mañana en Quito o Arequipa la instalación de una fábrica de computadoras o de motores a reacción. Algún país como Cuba, ha intentado dar esos saltos en el vacío y, lógicamente, se ha despeñado en el esfuerzo inútil y costoso. Cuba, además de ser último reducto del estalinismo en Occidente, es también un cementerio de locos proyectos tecnológicos que no han tenido en cuenta el gradualismo absolutamente indispensable para conseguir un desarrollo sostenido.

Y es que las sociedades habitan un determinado espacio donde los objetos y los quehaceres poseen una cierta coherencia interna. Una cierta uniforme complejidad que no se puede alterar por el voluntarioso acto de un iluminado mandamás.

Y las sociedades todas, se mueven hacia su destino en una línea horizontal en la que cada elemento está concatenado a los otros. Es inconcebible pues, un país subdesarrollado que se plantee juntar todos sus esfuerzos para alcanzar alguna hazaña técnica o científica ajena a su nivel general de complejidad. Eso es inútil. Incluso, terriblemente empobrecedor. Lo que en modo alguno quiere decir que las sociedades pequeñas no puedan especializarse y encontrar algún nicho económico en el cual ser extraordinariamente eficientes, en detrimento de otros sectores que jamás podrá abordar. Más aún: ése es, precisamente el caso de algunas de las naciones más exitosas del planeta: Suecia, Suiza o Noruega, por ejemplo. Pero para llegar a esos niveles de excelencia en algún renglón del intrincado mercado de nuestros días, es necesario que toda la sociedad mantenga una tensión interna técnica y científica más o menos uniforme.

Me explico: Suecia podrá exportar buenos camiones de transporte o buena maquinaria para la elaboración de papel, porque son los campos en los que ha logrado su mayor nivel de calidad, pero el resto de su mundo técnico y científico, aunque no se dedique a la fabricación de la totalidad de los objetos que necesita, tiene que ser capaz de entenderlos, de utilizarlos, o hasta de mejorarlos. Es decir, la élite profesional sueca, los ingenieros, los químicos, o los biólogos, por muy especializados que estén, tienen que hablar el mismo lenguaje que sus homónimos de New York, Tokio o Berlín para poder encontrar su nicho económico.

En nuestros países hay que lograr que esa élite educada sobre la que descansa el desarrollo progresivo, vaya adquiriendo paulatinamente, aunque al más rápido ritmo que se pueda lograr, ese lenguaje universal que hoy se maneja en el ámbito científico del Primer Mundo. No se trata sólo de dinero para invertir en grandes fábricas, sino de la lenta creación de lo que hoy se puede llamar una *cultura económica*.

Las multinacionales

Y quizás el territorio más fértil para conseguir el *aggiornamento* de nuestros países está en recabar la mayor cantidad posible de inversiones extranjeras en los sectores punta de nuestros días.

Los inversionistas extranjeros del Primer Mundo, además de capital, traen su *knowhow* y aceleran las transferencias científicas y tecnológicas a una gran velocidad, mientras directa o indirectamente instruyen a la clase empresarial local en los usos y maneras de investigar, desarrollar, producir y comercializar.

Eso quiere decir que, al margen del objeto estricto que la multinacional puede poner en marcha en los sitios donde asigne sus inversiones, hay un factor multiplicador de su influencia que se derrama por otros vericuetos de la sociedad.

La estructura y las reglas de la investigación y el desarrollo no son tan diferentes entre una empresa dedicada a las computadoras u otra consagrada a la fabricación de antibióticos. Los métodos de control de calidad son similares. La contabilidad de costes y los principios financieros son siempre parecidos. Las técnicas de distribución, almacenamiento y mercadeo no difieren sustancialmente. Los principios de la publicidad suelen ser asombrosamente uniformes.

Este fenómeno nos conduce al aserto siguiente: en la medida en que consigamos multiplicar la presencia en nuestros países de empresas extranjeras del Primer Mundo, estaremos preparándonos nosotros para alcanzar, algún día, nuestra participación en ese segmento del planeta como una fuerza pasiva que recibe del exterior todo su impulso creativo, sino como un factor dinámico en donde se originen iniciativas audaces. Algo de esto supo hacer Japón partir de la revolución *Meiji* de 1868, y especialmente tras el fin de la Segunda Guerra. Y nosotros no somos fundamentalmente distintos o inferiores a los japoneses o a los taiwaneses.

Las universidades

Es probable que a estas alturas el auditorio, o los lectores de estos papeles, se pregunten por qué no les asigno a las universidades y a los centros de enseñanza un rol mucho más relevante en la transmisión de los conocimientos y en la transformación de nuestras sociedades. Y es que me

temo que la mayor parte de nuestro grandes centros universitarios son absolutamente incapaces de entender el papel que el sentido común indica que deberían desempeñar. Están demasiado ocupados en hacer la revolución, demasiado empeñados en proclamar su permanente insurgencia contra el resto de la sociedad para poder comprender que el objeto fundamental (aunque no el único) de la transmisión de la cultura es el constante perfeccionamiento del entorno.

No obstante, las pequeñas universidades, especialmente las privadas, o los institutos autónomos de investigación, tal vez consigan aunar esfuerzos con el mundo empresarial para desarrollar proyectos conjuntamente. Así suele hacerse, sabiamente, en el Primer Mundo, y no hay razón para no recurrir a ese modo de hacer avanzar los conocimientos y la utilidad práctica de los saberes.

En todo caso, es mejor comenzar cuanto antes nuestra reconciliación con el mundo de las ideas y con el mundo de las cosas. Es mejor, cuanto antes, que nuestros hombres y mujeres comiencen a ser, realmente, *sapiens*, *habilis* y, sobre todo, *faber*. Porque ahí está el secreto de la prosperidad.

Lima, 28 de agosto de 1991

XII

LA AMÉRICA LATINA POSIBLE

He sido convocado para hablar de la América Latina posible. El tema lleva implícita la declaración de una insatisfacción oculta, profunda, y acaso dolorosa. Aparentemente, no nos gusta como somos y quisiéramos saber si podríamos ser diferentes. El primer paso, entonces, es precisar qué es lo que no nos gusta de nosotros; qué es lo que quisiéramos cambiar, tarea que –en rigor– no parece muy difícil. Intentemos, pues, consignar el inventario de nuestros males más evidentes.

Lo que no nos gusta

No nos gusta la pobreza de una parte sustancial de nuestras gentes. Aproximadamente la mitad de los latinoamericanos son pobres, terriblemente pobres. El 46%, señala la CEPAL, y ése es un dato pavoroso. No nos gusta la violencia de nuestras sociedades. Nos repugnan las historias incontables de crímenes y secuestros cometidos por maleantes de inspiración política o por simples delincuentes comunes. No nos gusta saber que no son sólo ellos los criminales, porque no faltan los atropellos llevados a cabo por agentes de la ley que se extralimitan en sus funciones. No nos gusta al abandono, y –finalmente– la decadencia de muchas de nuestras ciudades.

No nos gustan las incomodidades de los servicios públicos: el transporte que no llega nunca, o llega abarrotado, la lentitud pasmada del correo, los teléfonos atrasados, caros y escasos, la electricidad intermitente, los caminos descuidados, la inseguridad constante. No nos gustan las pocas escuelas públicas, pobres, mal dotadas, con maestros resignados que reciben un bajo salario, y niños, millones de niños, que ni siquiera alcanzan a aprender a leer o a escribir. No nos gustan los políticos corruptos que se enriquecen a costa de los sacrificios del contribuyente. No nos gustan los burócratas ensoberbecidos, sordos a las necesidades del pueblo llano, pero solícitos ante las personas influyentes y fatalmente dóciles ante el soborno. No nos gusta que nuestros campesinos apenas tengan acceso a cuidados médicos, o que la justicia tarde tanto que sea prácticamente inútil. No nos gustan –en fin– muchas cosas de nuestro entorno.

Es fácil continuar el largo rosario de nuestras desdichas, pero no creo que sea necesario. Lo importante es constatar que son muchas y que no tenemos temor a admitirlo. Más aún: sólo si encaramos la verdad sin miedo, con humildad, y con propósito de enmienda, es que algún día podremos aliviar o poner fin a nuestros males. De nada vale, pues, esconder la cabeza en la arena y negarnos a admitir lo obvio en nombre de un falso orgullo nacionalista. Lo mejor es llamarles a las cosas por su nombre, aunque nos duela, hasta despertar de nuestro largo sopor social. Al fin y al cabo, este auditorio está compuesto nada menos que de comerciantes y empresarios, una categoría humana correosa y realista que sabe que sólo es posible sobrevivir y progresar si somos capaces de inventariar cuidadosamente activos y pasivos, medir nuestras fuerzas a partir de auditorías bien hechas, y trazarnos objetivos muy concretos dentro de un calendario determinado.

Es cierto que América Latina no es únicamente ese desolador panorama que he descrito, y no ignoro que contamos con escritores y artistas de primer orden, con buenos deportistas, y con una pujante clase media, tenaz y honrada, que pugna por salir adelante, pero no es éste el lugar para celebrar las virtudes y enumerar los éxitos, sino para dejar constancia de lo que nos disgusta. De lo que queremos cambiar.

El gran modelo y lo que somos

Sin embargo, esta extensa lista de insatisfacciones nos remite inevitablemente a precisar un modelo paradigmático. ¿Con qué comparamos nuestras sociedades? ¿Por qué sabemos las cosas que andan mal en nuestro continente? Al fin y al cabo, nuestro mundo es un paraíso si lo juzgamos por los patrones africanos. El barrio más inseguro de Bogotá o Río de Janeiro es un vecindario idílico si lo comparamos con el más seguro de los barrios de Lagos, la capital de Nigeria. En tropel se irían los rusos –no digamos los bosnios– a vivir a la América Latina si pudieran emigrar mañana mismo.

No puede haber duda: el modelo contra el que proyectamos nuestra realidad es Estados Unidos y es Europa Occidental. Nos vemos, vemos nuestros defectos, a través de Boston y de París, de New York y de Londres, de Madrid y de Miami, de Berlín y de Los Ángeles, de Roma y de Washington. Nos gustaría contar con la monumentalidad de Francia, la pujanza de Alemania, la tranquilidad de Suiza, el civismo de Inglaterra, la creatividad de Italia, la prosperidad y el seductor comercio estadounidenses. Nos gustaría moler a Europa y a los Estados Unidos, y moldear con esa

arcilla una América Latina con las virtudes que le reconocemos al Primer Mundo y, lógicamente, le envidiamos.

No es mala esta actitud. Ya comenzamos a despejar incógnitas. Por la vía de la emulación, por la vía de lo que *queremos ser*, podemos encontrar esa definición de nosotros mismos que tantas cavilaciones y polémicas nos ha traído: somos fundamentalmente, una expresión de Europa, como lo es Estados Unidos, y no otra cosa distinta. Y no importa que nuestra piel sea negra, mulata o cobriza. El signo de nuestra cultura es europeo: nuestra lengua, nuestro derecho, nuestra arquitectura, nuestra religión, incluso nuestro ateísmo, son europeos. Europa es nuestra forma de entender el pasado y el presente, nuestra manera –también– de avizorar el futuro. De ahí la profunda insatisfacción que sentimos con nuestra realidad social. Un bengalí o un bantú no tienen que medir sus villorrios polvorientos con Bruselas. Un señor de Burundi, de Nueva Delhi, incluso de El Cairo, un señor que no se siente tributario de Roma o de Madrid, de París o de Londres, no tiene por qué padecer la frustración y la rabia de un latinoamericano que se sabe inmerso en la cosmovisión europea, que se percibe como un ser fundamentalmente similar a un belga, a un holandés o a un californiano; pero no consigue, sin embargo, alcanzar el mismo grado de desarrollo económico, prosperidad y armonía social que sus compañeros de historia y de cultura. De ahí, también, debe derivarse una clara enseñanza contra la inútil búsqueda de una originalidad institucional o sistémica latinoamericana. Si somos una expresión de Europa, como lo es, y admite sin reservas, Estados Unidos, actuemos dentro de esas coordenadas y renunciemos a *terceras vías* y a otros peligrosos juegos retóricos. No olvidemos el ejemplo del país latinoamericano que alcanzara el más alto nivel de desarrollo: Argentina. Su *milagro* económico y social se hizo de la mano de Alberdi, Sarmiento, Mitre, Roca y Avellaneda, cuando el país asumió el modelo liberal angloamericano, en la segunda mitad del XIX, y todo lo perdió cien años más tarde, en la inútil búsqueda de una innecesaria originalidad.

El ser y el hacer

La importancia de este sentimiento no puede menospreciarse. Saber que potencialmente podemos lograr grandes cosas, pero que fracasamos en el intento, nos produce una cierta incomodidad con nosotros mismos, hiere nuestra maltrecha autoestima. Hasta hace poco ese íntimo malestar se aliviaba culpando al imperialismo yanqui, al inglés, a la herencia colonial española o al Fondo

Monetario Internacional, pero de un tiempo a esta parte la más descarnada sinceridad se ha abierto paso: nosotros somos los responsables de nuestros fracasos, nadie más, y no vale la pena buscar coartadas y chivos expiatorios.

Magnífico. Sin autocrítica no hay cambio. Era fundamental que alcanzáramos ese rasgo de madurez para poder corregir el rumbo de nuestros pueblos. Ya sabemos lo que no nos gusta, conocemos quiénes son –o somos– responsables del desaguado, y hemos identificado cómo nos gustaría que fueran nuestras sociedades. La pregunta que ahora se impone –claro– es absolutamente predecible: ya sabemos cómo es el panorama de ese Primer Mundo que nos fascina, pero cómo llegaron sus habitantes a ese punto y cómo se mantienen en él es lo que de inmediato tenemos que descifrar.

Los economistas clásicos afirmaban que el desarrollo era el resultado de una combinación entre la tierra –es decir, los recursos naturales–, el capital y el trabajo, pero la experiencia de más de dos siglos de economía posterior al surgimiento de la era industrial apuntan en una dirección diferente. Parece que son dos los elementos que determinan el signo de la sociedad: el capital humano y las instituciones. La gente y el Estado en el que esa gente actúa y realiza sus transacciones.

Naturalmente, los mejores resultados se obtienen cuando la gente más virtuosa vive dentro del marco institucional más adecuado, pero, en general, todas las naciones conjugan de diversa manera estos dos factores. Es posible encontrar ciudadanos extremadamente virtuosos que no consiguen grandes frutos porque viven en estados demasiado imperfectos, aplastados por instituciones inadecuadas; y es posible –aunque poco frecuente– lo contrario: estados con un diseño institucional aceptable, cuyos ciudadanos, aunque no carecen de virtudes cívicas, no logran hacer despegar a la colectividad hasta situarla en el pelotón de avanzada. Un ejemplo de lo primero podría ser la India. Un ejemplo de lo segundo, Costa Rica.

Es importante ahondar en este aspecto de la cuestión, de manera que nadie tenga la tentación de recurrir al racismo para explicar el fenómeno del desarrollo. Es verdad que un país como Estados Unidos, de lengua inglesa y de prosapia británica, está a la cabeza del mundo, pero eso no le confiere a los anglosajones una superior categoría humana. Por el contrario, es fácil demostrar

que, dentro del conglomerado de etnias que forman ese país, hay ciertos grupos *no* anglos que suelen comparecer con más éxito en los análisis demográficos comparativos. Los americanos de origen hindú, paquistaní, chino o coreano, obtienen mejores calificaciones escolares, especialmente en Ciencias, que los americanos de procedencia inglesa. Igual ocurre con los americanos de antecedentes japoneses, o con los americanos de tronco judío-irano o centroeuropeo. No se trata, pues, de un problema de superioridad racial americana o británica, sino de un problema de superioridad institucional al que también concurre el factor de los hábitos culturales que afectan a las personas en el desempeño sus labores y actividades. La disciplina, la laboriosidad, el respeto a la jerarquía, o la seriedad en el mantenimiento de los compromisos que cultivan tantos asiáticos en Indochina, en Corea o en el subcontinente Indostánico, dan un fruto escaso en sus patrias de origen, pero adquieren toda su eficacia cuando consiguen instalarse en la atmósfera institucional americana.

Ya estamos, pues, en el punto de mira necesario para poder comenzar a esbozar cuál puede ser la América Latina posible, y qué hay que hacer para alcanzarla. Acerquémonos un poco al capital humano que produce el milagro del desarrollo y a las instituciones en las que ese milagro se realiza.

El capital humano

¿Cómo es el capital humano de las naciones desarrolladas, o –mejor aún– cómo se forma? Naturalmente, en toda sociedad concurren millones de individualidades diferentes, pero es posible espigar en ellas cierto tipo de saberes, conductas y valores que suelen prevalecer, y los que –en general– se les tiene en alta estima.

En cuanto a los saberes, no hay demasiado espacio para la polémica. Mientras mayor sea el número de ciudadanos instruidos, con oficios y profesiones, y mientras más alto sea su caudal de información, más elevado será el nivel de vida de toda la sociedad, menor el índice de natalidad, y más fácil la adaptación a los cambios.

Esta observación se puede matizar, pero no es posible discutir su validez general: en todas las naciones es fácilmente comprobable la relación directa entre el grado de escolaridad y el nivel de

ingresos. Sólo que, si aceptamos esta premisa, nos vemos precipitados a proponer y a adoptar una política congruente de largo alcance: la primera prioridad de la sociedad es la formación de capital humano; es la instrucción y la educación de las gentes.

En términos concretos esto quiere decir que la gran tajada fiscal, la mayor, debe destinarse a formar ciudadanos, a instruirlos y a educarlos, porque en ello está la potencial creación de riquezas. Cada niño desamparado que vive de la mendicidad o del robo, no sólo es una tragedia personal, sino también un desperdicio. Su miseria nos hace a todos un poco más pobres. Cada analfabeto incapaz de realizar trabajos complejos y productivos, no sólo desempeña el papel de una persona condenada a la pobreza: es una pérdida general para todos nosotros. Su pobreza nos perjudica. Nos empobrece a todos.

Lo que quiero decir es que, al margen de las muy válidas razones éticas, desde el punto de vista económico, los recursos que se dedican a la educación y a la instrucción de niños y jóvenes no forman parte del capítulo de los gastos sino del de las inversiones. La pobreza no le conviene a nadie. Nos afecta económicamente a todos. Puede ser un acto piadoso recoger de las calles de las capitales latinoamericanas a los miles de niños que deambulan pidiendo limosnas, y colocarlos en escuelas en las que se les alimente física, moral y culturalmente, pero, además de constituir un acto noble, es un magnífico negocio para todos nosotros. Esos pobres niños, convertidos en adultos laboriosos, productores de bienes y servicios, consumidores ávidos y pagadores de impuestos, habrán devuelto multiplicado al patrimonio común lo que el patrimonio común dedicó a formarlos.

La América Latina tiene una población extremadamente joven que crece a un ritmo vertiginoso. Este dato puede leerse como un grave problema o puede tomarse como una potencial ventaja comparativa. Si se consigue instruir adecuadamente, ese inmenso capital humano es capaz de generar un volumen de riqueza que nos acercaría sustancialmente al perfil del Primer Mundo. Si lo mantenemos en la ignorancia, produciendo como producen los ignorantes –o, más grave aún, si los mantenemos al margen del aparato productivo–, en el futuro estaremos aún más lejos del modelo paradigmático euronorteamericano.

Instrucción y educación

La lógica de estas reflexiones nos debe llevar a una dolorosa decisión y a una pregunta. La dolorosa decisión tiene que ver con la asignación de recursos. Hay que poner casi toda la carne fiscal en el asador educativo. Como nuestros países son pobres, muy pobres, y la hacienda pública, es –por lo tanto– paupérrima, el gasto más sabio no debe hacerse en infraestructura, en seguridad social o en las fuerzas armadas, sino en inversión en capital humano, para algún día poder romper el círculo de la pobreza. No hay duda de que sería bueno poder construirle una vivienda humilde a cada familia pobre, pero mucho más sensato es procurarle a cada miembro de esa familia la posibilidad de que cada uno de ellos, médico o albañil, abogado o tornero, se fabrique su vivienda con el producto de su trabajo honrado.

La pregunta que enseguida se nos plantea tiene que ver con el *contenido* de la formación del capital humano. Cómo se logra crear un ciudadano altamente productivo, capaz de propiciar el desarrollo de la sociedad en la que vive.

A lo largo de estos papeles he recurrido a dos palabras parecidas pero que no son, exactamente, sinónimas: *instrucción* y *educación*. La instrucción tiene que ver con saberes establecidos. Es el Teorema de Pitágoras, un poema de Rilke o el funcionamiento de una bomba para sacar agua de un pozo. La educación tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la disciplina, el respeto a las normas, la honestidad intelectual, el sentido de la justicia, la búsqueda de la excelencia, la seriedad en los compromisos, la puntualidad, la curiosidad científica, con un método para solucionar problemas reales, y el resto de las virtudes que caracterizan a los pueblos más y mejor desarrollados de la tierra.

El capital humano más productivo es el que combina adecuadamente la instrucción y la formación. El que integra en los seres humanos los saberes necesarios para ganarse la vida y los valores más convenientes para lograr que los frutos del trabajo de esa persona den su óptimo rendimiento, con lo cual se beneficia el conjunto de la sociedad. Una sociedad –además– en la que no se castiga o envidia el éxito de las personas, porque entiende que ese éxito aumenta el patrimonio colectivo.

Idiosincrasia y ética de la responsabilidad

Es perfectamente posible difundir en una población los valores adecuados para conseguir el éxito de la colectividad. Una buena educación –por ejemplo– defendería la ética de la responsabilidad individual e inculcaría en los ciudadanos la idea de que la consecución o logro de nuestros objetivos se debe esperar del trabajo propio y no de la ayuda de los demás o del Estado.

Pero –simultáneamente– esa ética de la responsabilidad individual tiene que poner buen cuidado en explicar hasta el cansancio, más bien hasta la convicción, que el individuo debe armonizar dentro de las instituciones del Estado sus intereses personales y los intereses colectivos, porque si no se admite la existencia de un bien común al que hay que cuidar esmeradamente, es imposible el desarrollo del conjunto de la sociedad.

Ese equilibrio entre derechos y deberes, entre la legítima búsqueda en la felicidad personal y la admisión de que hay responsabilidades con los demás, está presente en todas las sociedades exitosas, y debe formar parte de nuestra cosmovisión si es cierto que nos proponemos alcanzar los niveles de prosperidad de las naciones más desarrolladas. Esto quiere decir que, además de la existencia de cierta conducta que favorece al desarrollo, es necesario comprender con claridad el rol que juega el individuo con relación a la sociedad y al Estado en los que vive inmerso.

Estado de Derecho

Precisamente, algunos de los más recientes Premios Nobel de Economía –y pienso en Hayek, Coase, Becker, y en el último, North– han dedicado sus mejores reflexiones a investigar los aspectos sociales y jurídicos del desarrollo económico, y todos han encontrado en el Derecho y en las Instituciones el elemento clave del éxito.

Para que el capital humano rinda sus mejores frutos, además de contar con la instrucción y la educación idóneas, deberá tener a su disposición un Estado de Derecho concebido para que la transacciones puedan llevarse a feliz término. Un Estado de Derecho regulado por leyes justas, ante las cuales todos los ciudadanos sean iguales y no haya grupos o personas privilegiados. Un Estado de Derecho que provea las garantías jurídicas necesarias para poder realizar inversiones a largo

plazo sin temor a las arbitrariedades o a los sobresaltos provocados por las convulsiones políticas antidemocráticas.

Es importante que esto se entienda, porque ahí radica uno de los factores entre los varios que explican nuestra pobreza relativa. Sin seguridad jurídica no hay desarrollo económico ni destino colectivo. La secuencia del crecimiento es muy fácil de conocer: ahorro, inversiones y beneficios, que a su vez generan más ahorro, más inversiones y más beneficios. Pero cuando se interrumpe este ciclo en nombre de una revolución que dice conocer un atajo hacia la prosperidad, lo que se obtiene es la parálisis y la involución.

El ahorro, que es siempre el fruto del trabajo y del esfuerzo, tiende a buscar seguridad por encima de todas las cosas. La vieja frase resume perfectamente este fenómeno: *No hay animal más cobarde que un millón de dólares*. Lo que explica que el noventa por ciento de las inversiones internacionales se hagan en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y Australia. Es verdad que un obrero de Bangladesh o de Honduras gana cincuenta veces menos que un obrero alemán o suizo, pero la rentabilidad que se deriva de invertir en mano de obra del Tercer Mundo pesa mucho menos que el riesgo que provocan la inestabilidad social y la inseguridad jurídica.

La democracia y el Estado de Derecho, pues, no son lujos que se dispensan los países desarrollados, sino elementos que posibilitan el desarrollo económico. Y, de la misma manera que es un gran negocio invertir en la educación y en la instrucción de los ciudadanos, es también un gran negocio invertir en tener un Estado de Derecho, una democracia estable y un régimen de libertades civiles.

El Estado de Derecho garantiza la seguridad jurídica. La democracia estable hace posible la transmisión periódica de la autoridad, mediante elecciones que renuevan de forma predecible la cúpula dirigente, mientras el régimen de libertades civiles permite el constante escrutinio de funcionamiento del conjunto de la sociedad, tanto en el sector público como en el seno de la sociedad civil.

Es vital que se entienda este aspecto de la cuestión: la libertad no es un lujo. Es una necesidad que tiene la sociedad moderna para poder hacer auditorías, examinar sin miedo, criticar y corregir rumbos. La libertad es un componente básico de la prosperidad y no un subproducto. Y con la democracia ocurre exactamente igual: conlleva implícitos, fundamentalmente, dos elementos esenciales en el camino hacia el progreso. De una parte, se trata de un método racional de tomar decisiones y, de la otra, se trata de la única fórmula pacífica concebida para transferir el poder que la humanidad ha creado tras la desaparición de las monarquías absolutistas hereditarias.

Por supuesto que es un sistema lleno de imperfecciones, lento y tedioso, no exento de corrupción, pero no se conoce otro mejor, mientras resulta evidente que los veinte países más prósperos de la tierra, son, precisamente, treinta democracias liberales organizadas en torno a estos principios. Y no hay en ello una pizca de casualidad o de sorprendentes coincidencias históricas. Son países prósperos porque son libres y democráticos. Y lo seguirán siendo en el futuro, otras se mantengan dentro de ese modelo de relación social.

El papel de los empresarios

Bien: hasta este punto son varios los temas tratados. Sabemos lo que queremos cambiar en América Latina, y conocemos el agente potencial de ese cambio: una feliz combinación entre capital humano y las instituciones adecuadas. Nos falta quizás identificar el factor catalizador y nos falta precisar el tiempo que tomará ese cambio de rumbo. Es decir, el elemento capaz asumir este diagnóstico y precipitar la reacción necesaria para que ocurra el milagro del desarrollo sostenido.

A mi juicio ese elemento es el sector productivo del país: los empresarios y comerciantes, los creadores de riqueza. Podría pensarse que una mutación de esta naturaleza tendría que impulsarse desde la esfera política, pero –en general– los políticos se deben demasiado a su clientela más inmediata, y están sujetos a demasiadas presiones para poder actuar libre y enérgicamente en la dirección requerida.

La reforma de la sociedad –por otra parte– también pasa, en primer lugar, por la reforma del Estado, y es difícil reclutar a la clase política para unas modificaciones que, entre otras cosas,

comportan una disminución de la importancia del gobierno. La sociedad civil, en cambio, tiene las manos libres para demandar el abandono de prácticas equivocadas y para presionar en la dirección correcta. Y dentro de ese gran conglomerado que es la sociedad civil, ningún estamento posee más legitimidad para actuar que el sector empresarial. Al fin y al cabo, es en las empresas de bienes y servicios, en la industria y en el comercio, donde únicamente se origina la riqueza; esa riqueza que todos queremos que se multiplique en beneficio de la mayoría de la población.

¿Cómo pueden los empresarios desarrollar esta tarea? Muy sencillo: concibiendo y ejecutando una gran campaña de persuasión general que explique las causas de la pobreza y lo que hay que hacer para erradicarla. Cuando una gran parte de la sociedad comprenda y comparta este análisis, y cuando entienda los fundamentos sobre los que descansa la buena fortuna de las naciones más prósperas, es muy probable que se produzca una metamorfosis de la mentalidad social y el consecuente cambio de conducta.

Los pueblos son capaces de cambiar cuando son capaces de comprender. En el siglo pasado lo hizo Japón, nación que se saltó la primera Revolución Industrial a fines del XVIII, y no fue hasta la segunda mitad del XIX cuando se decidió a abandonar el medievo y a entrar de lleno en la Edad Moderna. Lo hicieron, en las últimas décadas, los llamados tigres o dragones de Asia, y nosotros también podemos hacerlo.

¿Cuánto tiempo nos tomaría ese cambio prodigioso? Desde luego, mucho menos de lo que le tomó a Inglaterra o a Estados Unidos alzarse con el liderazgo del planeta, porque hoy estos procesos son casi vertiginosos. Ya no se trata de esperar siglos, sino de hacer bien las cosas durante un par de generaciones. Los taiwaneses que hoy tienen 65 años, y viven en una próspera isla de la que han sido erradicados la pobreza y el analfabetismo, ya cuentan con cinco mil dólares per cápita, pero cuando tenían 20 años, en 1948, vivían en un sitio insalubre, que apenas producía un poco de arroz, cuyo per cápita era de unos sesenta dólares anuales. Los taiwaneses de 65 años han visto, en el curso de la vida de cada uno de ellos, el milagro del desarrollo.

En los noventa los latinoamericanos tenemos unas posibilidades de desarrollo infinitamente mejores que las que tenían los taiwaneses en 1948, pero debemos hacer las cosas seria e

inteligentemente para conseguir el despegue. No hay duda de que se trata de un camino difícil, de un campo minado por los prejuicios y por la vieja retórica, pero no es imposible poner fin a ese trágico destino que, hasta ahora, parece signar nuestras vidas.

La América Latina posible puede ser tan próspera y feliz como las más avanzadas naciones del Primer Mundo, pero para ello tiene que someterse al modo de comportamiento de ese Primer Mundo, cuyo fulgor suele despertar nuestra envidia y concitar nuestra frustración. Si todos queremos que ese milagro ocurra, tenemos que ponernos en camino cuanto antes. Es una senda larga y trabajosa, pero créanme que no hay otra.

Colombia, octubre de 1993.

XIII

LOS IMPUESTOS: ¿CUÁNTO, CÓMO Y PARA QUÉ?

Los límites del Estado de Bienestar

La noticia saltó a los titulares de la siguiente manera: el sistema sanitario público de Inglaterra le suspendía su costosísimo tratamiento anticanceroso a una niña afectada de una variante muy agresiva de leucemia. La decisión se tomaba por razones esencialmente económicas. Las posibilidades de salvar a la muchacha eran mínimas, y el dinero que se malgastara en el intento se le negaba a otros casos con más posibilidades de tener éxito.

La trágica anécdota resume en una cápsula el debate que hoy estremece a la sociedad norteamericana: quiénes reciben los beneficios de la asistencia pública, a cuánto ascienden esos beneficios y quiénes pagan por ellos. En otras palabras: cuáles son las fronteras del *Welfare State* dado que la experiencia de más de un siglo de beneficencia pública a gran escala comenzada en la Alemania de Bismarck demuestra que las necesidades aumentan a una velocidad mucho mayor que los recursos disponibles.

¿Cómo negarles amparo a los ancianos necesitados, a los obreros sin empleo o a las madres solteras? ¿Cómo olvidarnos de los ciegos, los locos, los alcohólicos o los incapacitados de todas las desdichas? ¿Cómo no brindarles una buena educación pública a todos los niños, o acceso a universidades excelentes que no les cerrarán sus puertas a los jóvenes pobres cuando demuestren que poseen talento? ¿Y el fomento de las artes? No se puede descuidar el espíritu: hay que tener las bibliotecas iluminadas, las sinfónicas afinando los instrumentos y los museos abiertos para todos los públicos. Todo esto, claro, sin olvidar las pensiones, porque, después de toda una vida de trabajo ¿qué puede esperar el jubilado si no es, al menos, una pensión que le permita vivir decentemente hasta el día de su muerte? Pero ni siquiera en ese punto terminan las responsabilidades del Estado protector, pues la cortesía final de las sociedades modernas es la digna disposición de los restos mortales. Ese, precisamente, es el lema del *Welfare State*: atención desde el parto hasta la muerte.

El problema es que todo eso vale mucho dinero, cada vez más dinero, y no hay forma humana de hacerle frente a la cuenta de gastos. Más aún: las sociedades y los políticos que las administran tienen la pésima costumbre de contraer obligaciones bajo la presunción de que la economía siempre mejorará en el futuro, olvidando las etapas de crisis o los «ciclos de catástrofe», para utilizar la pesimista expresión de Kondratief. ¿Qué nos hacemos con los «compromisos irrevocables» cuando llega la época de vacas flacas? ¿Endeudarnos para hacerles frente? ¿Acelerar la impresión de billetes para crear la ilusión de que cumplimos lo pactado a costa, realmente, de destruir los fundamentos monetarios del sistema?

Naturalmente, un Estado no puede repartir gratuitamente más bienes y servicios que los que la sociedad genera como excedente de un proceso productivo condenado a ser eficiente y ganancioso. Las empresas donde único se crea riqueza tienen que producir bastante más de lo que consumen para poder sostenerse, ahorrar, invertir, crecer y contribuir al bien común. Pero si la factura que pasa el Estado en nombre del amor al prójimo deja de tener un razonable vínculo con la realidad productiva, lo que se alcanza no es la cálida solidaridad de la tribu, sino la quiebra y el empobrecimiento progresivo, elementos que acaban por destruir la convivencia armónica del grupo.

De ahí la inevitable repugnancia que suelen provocar esos políticos que, ante un recorte de gastos, demagógicamente señalan al adversario con el *hot-dog* del almuerzo escolar, como si fuera un índice culpabilizador, acusándolo de estar creando una legión de niños famélicos deliberadamente desnutridos por un Estado insensible a las necesidades básicas de los ciudadanos.

¿Cómo se arregla este desaguizado? Se arregla descartando la idea de que el Estado es responsable de nuestro bienestar o de cubrir nuestras necesidades. Se arregla colocando las responsabilidades en el individuo y devolviéndole a la familia el papel de *welfare* que ha desempeñado desde el origen de los tiempos. ¿No habíamos quedado en que la familia era la «célula básica» de la sociedad? Es en la familia, y no en el Estado donde debe ejercerse la compasión con los ancianos y el cuidado de los niños. Es de su propia previsión y de su cautela

ante la vida, y no de la bondad artificial del Estado, siempre derrochador y torpe, de lo que la persona debe esperar una jubilación decorosa. La obligación de todos no es sólo trabajar mientras podamos, sino –además– ahorrar para cuando no podamos trabajar. Se arregla el desaguisado admitiendo, melancólicamente, como advertía Confucio, que la vida es difícil, dura, injusta, y llena de espantosos contratiempos, pues nunca ha sido sencillo alimentarse, abrigarse o cobijarse decentemente en este valle de lágrimas en el que todas las criaturas vivientes deben luchar a brazo partido para sostenerse frente a la inclemencia de la naturaleza.

En estos años postreros vivimos el fin del milenio y, también, de la utopía socialista, y de las fórmulas políticas que colocan el destino de los individuos en manos del Estado. Ya sabemos, como dice el viejo refrán español, que cada palo tiene la inexorable responsabilidad de aguantar su propia vela. Sólo que esa lección que nos ha dado la experiencia económica todavía no ha sido asimilada por las grandes mayorías. Ya sabemos que el maná no cae del cielo, pero nos resistimos a dejar de creer en los milagros. Ya sabemos que el Estado de Bienestar no funciona, pero preferimos cerrar los ojos. No importa: la realidad se encargará de abrírnoslos.

Gravar el gasto, no la creación de riquezas

Bien: si admitimos las inevitables limitaciones del Estado, eso no nos exime de determinar cómo debe financiarse el sector público. Los más audaces reformistas del campo del señor Gingrich planean eliminar el *Income Tax* –el impuesto sobre la renta– y sustituirlo por una suerte de *sales tax* o impuesto sobre las ventas. Según algunos expertos bastaría gravar todas las transacciones comerciales con un 16 por cien para recaudar una cantidad similar a la que hoy recibe el Estado americano con su complejo y mucho más elevado sistema impositivo.

Frente a esta propuesta radical e igualitaria se alzan quienes suponen que un sistema impositivo gradual y creciente como el vigente quien más gana más paga proporcionalmente, contribuye a disminuir las diferencias entre ricos y pobres, distribuyendo por este procedimiento más equitativamente la renta nacional. Eso, por lo menos, es lo que parece haber estado en la conciencia de los hacendistas que a lo largo del siglo XX le han dado forma al aparato recaudatorio norteamericano y, por imitación, al de medio planeta. Ese, también, parece ser un argumento favorito de quienes creen que la *fiscalidad progresiva* es una expresión de la justicia

social o de la función redistributiva de las riquezas nacionales que supuestamente le corresponde al Estado.

¿Quién tiene razón? Como señalan el sentido común y la experiencia de casi cien años de fiscalidad progresiva, lo más eficaz, y lo que acaba por ser más justo, debe ser limitarse a gravar los gastos y no la creación de riquezas. Y, contrario a las supersticiones de los defensores del *Income Tax*, un impuesto invariable sobre las ventas obligaría a los ricos a pagar *más* impuestos que los que ahora pagan, aunque sólo fuera porque no podrían esconderse tras las numerosas excepciones que hoy la ley les permite de manera casi siempre escandalosa.

En cambio, un impuesto único sobre las ventas tendría, además, otras dos extraordinarias ventajas. La primera, sería abaratar toda esa costosa burocracia de contables, auditores, abogados y funcionarios del Estado que viven del bolsillo y del susto perenne de unos contribuyentes aterrorizados por los inspectores de la Hacienda Pública. La segunda, se pondría fin a ese repugnante tinte represivo que van adquiriendo los Estados en los que se combina la complejidad fiscal con la excepcionalidad legal (los *loopholes*), dando lugar a una madeja de normas, contranormas y arbitrariedades que, a veces, provocan actitudes y conductas dudosas en ciudadanos que se ven (o se creen) obligados a tratar de salvar un patrimonio legítimamente ganado de la voracidad sin límites de estados que rencorosamente castigan en lugar de estimular la creación de riquezas.

Naturalmente, también sería posible evadir ese impuesto único sobre las ventas, pero la experiencia europea en torno al IVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido) –gravamen que al vendedor *nunca* le interesa ocultar– demuestra que ése puede ser el mejor método de nutrir las arcas del Estado de una manera eficaz, pacífica y económica. En todo caso, conviene no olvidar cinco principios en materia fiscal que deberían ser la regla de oro de todos los gobernantes: los impuestos deben ser pocos, fáciles de cobrar, transparentes, sin excepciones y suficientes para cubrir lo presupuestado.

Como anécdota curiosa, acaso valga recordar mi experiencia personal en España, en los últimos años de Franco, cuando en la Península existía un régimen fiscal que todos calificábamos de

«atrasado» y «primitivo», pero cuyos resultados prácticos, vistos a la luz de la «modernidad» posterior, eran realmente impresionantes. Por aquel entonces, la secuencia del acto impositivo al que debían someterse las empresas era la siguiente: el gobierno formulaba un presupuesto general y se lo notificaba a las ochenta –creo que eran ochenta– juntas recaudatorias en que estaba dividido el aparato productivo del país, asignándole a cada una de ellas la parte de la carga fiscal que debía asumir. En mi condición de editor de libros, mi editorial estaba adscrita a la Junta de Artes Gráficas, formada, como todas, por empresas del mismo gremio. Una vez conocida la cifra con la que nuestro gremio debía pechar, la Junta, elegida por nosotros mismos, se reunía y, a su vez, distribuía las obligaciones entre las diferentes empresas afiliadas con arreglo a cifras de venta, número de empleados y algún que otro dato básico, sin necesidad de recurrir a inspecciones fiscales, auditorías, costosos asesores o contabilidades detalladas. ¿Resultado de ese *arcaico* sistema de cobrar y pagar impuestos? La administración de las empresas era entre un diez y un veinte por cien más barata entonces que ahora, el fraude fiscal era nulo o mínimo, el Estado operaba prácticamente sin déficit, y había más recursos disponibles para producción, lo que quizás, en alguna medida, explique que entonces el desempleo fuera la mitad de lo que es hoy en día: un terrible 24% de la fuerza laboral.

Probablemente los norteamericanos no eliminarán el *Income Tax* –ya Clinton dijo que lo defendería con las uñas– pero es una lástima que no den ese paso trascendente. A principios de siglo, cuando los hacendistas norteamericanos descubrieron y popularizaron la fiscalidad progresiva sobre la renta, se hicieron ellos mismos, y le hicieron al mundo, un flaco servicio en materia de desarrollo y crecimiento económico. Si ahora rectificaran, el planeta completo seguiría tras ellos por la senda correcta. ¿Es tan difícil de entender que castigar la producción es un error? ¿No es obvio que el gravamen hay que ponerlo en el gasto?

Formar capital humano

En suma: ya sabemos que no hay dinero en el mundo para sostener el Estado de Bienestar y tal vez estemos de acuerdo en que es preferible hacer descansar la fiscalidad en el gasto y no en la creación de riquezas. Cuanto se sustrae del aparato productivo para costear el sector público, especialmente la porción que va a parar al capítulo de gastos, no al de inversiones, es una limitación al ahorro y al crecimiento general de la economía, lo que inevitablemente acaba por

empobrecernos a todos. Eso nos obliga a ser extraordinariamente cuidadosos en el establecimiento de las prioridades: cuál debe ser el destino principal de nuestros impuestos. Si los recursos que proceden de las obligaciones fiscales necesariamente tienen que estar limitados por las necesidades de expansión de las empresas ¿a qué brasa arrimamos la sardina? ¿En qué rubro es más conveniente que se emplee el dinero de nuestros impuestos?

Naturalmente, cada grupo de interés tiene su respuesta inmediata: los empresarios dirán que sin la infraestructura elemental (camino, puentes, puertos, comunicaciones, etc.), su trabajo es casi imposible. Los sindicatos querrán subsidios para los productos básicos alimenticios, hospitalización gratis para los agremiados o lugares de esparcimiento baratos para esas 4 ó 5 semanas de vacaciones que merece todo trabajador. Los jubilados, por su parte, harán la correspondiente lista de agravios y reclamaciones, y tanto unos como otros estarán plenamente justificados en sus solicitudes.

¿Dónde se pone, pues, el acento? Obviamente, no se pueden ignorar los legítimos intereses mínimos de todos los sectores de la sociedad, pero probablemente lo más sensato, y lo que acaba por ser más productivo para el conjunto, es concentrar el esfuerzo en la formación de *capital humano*. Es decir: apoyar el desarrollo de personas responsables, trabajadoras, competentes, solidarias y disciplinadas, que mantengan la creciente tensión que demanda el aparato de generar riquezas. Y esta difícilísima labor comienza el día del parto y termina en la primera fase de la vida adulta de los individuos, aproximadamente a los dieciocho años de edad, tras el fin de la adolescencia y la adopción de todas las responsabilidades que los estados modernos les asignan a las personas mayores.

Se ha dicho en repetidas ocasiones que el destino de los adultos se potencia en la adolescencia. En general, lo que vamos a ser «de grandes» es lo que nuestra niñez y nuestra adolescencia nos permiten. Ni más ni menos. A los veinte años se es joven para ganar un campeonato de natación, pero tal vez ya se es muy viejo para aprender que la vida nos exige disciplina, sentido de la responsabilidad, apego a la verdad y constantes sacrificios, porque no estamos en un lecho de rosas sino en un campo minado, asediados por la pobreza, las enfermedades, la violencia y la innata tendencia hacia el caos y la disgregación enquistada en toda estructura social.

Sin embargo, una sociedad que sea capaz de volcar la mayor parte de su esfuerzo en formar hombres y mujeres que adquieran los valores necesarios para abrirse paso como individuos solidarios con la familia, y corresponsables de un Estado del que se sientan parte voluntaria y gustosa, tiene muchas posibilidades de prevalecer, prosperar y conseguir permanentemente un nivel de vida digno.

Esto quiere decir que hay que enseñar a los padres a educar a sus hijos, y lo que jamás debe faltar son excelentes creches infantiles, seguidas de escuelas bien dotadas, con maestros bien pagados, ayudados por buenos psicólogos y consejeros capaces de acompañar a los niños desde las primeras letras hasta las puertas mismas de la universidad.

¿Y qué deben aprender estos jóvenes para que luego, ciertamente, aumente el capital humano de la sociedad? Deben aprender, en primer término, valores: la necesidad de realizar el bien, de colocarse bajo la autoridad de la verdad, de aceptar la jerarquía, de practicar la compasión con el otro mientras se rechaza la autocompasión como al diablo mismo. En segundo lugar, actitudes: la importancia de la disciplina, la aceptación de las reglas, el *fair-play*, la necesidad de trabajar en equipo, la búsqueda de la excelencia como norte permanente de nuestras actividades, la tolerancia con quienes son u opinan de manera diferente, y la humilde admisión de que sólo nosotros somos responsables del destino que consigamos labrarnos con nuestro esfuerzo. Tanto si triunfamos como si fracasamos, es cosa nuestra. Sólo nuestra.

Obviamente, esa forja del espíritu, para dar los frutos adecuados, tiene que estar acompañada de otras dos categorías de saberes. La primera es la que relaciona el yo con su entorno institucional. ¿Cómo es la sociedad en que vivimos, cuáles son sus problemas y ventajas, en qué consisten sus instituciones, cuál es la historia pasada del grupo con el que compartimos el presente y en el que viajamos hacia el futuro, qué debemos hacer para mantener el rumbo cuando vamos por buen camino, o rectificarlo cuando hemos errado? Es aquí donde se aprende que el Estado somos todos, que la Constitución es algo más que un texto retórico, y que los individuos, además, son *ciudadanos* sujetos a un balance entre derechos y obligaciones del que depende la armonía social.

La segunda categoría de saberes, tal vez la menos importante, es la que tiene que ver con los conocimientos convencionales: matemáticas, geografía, historia, idiomas, etc., etc. Curiosamente, los políticos, cuando ejercen de pedagogos, creen que el *capital humano* se multiplica con el aumento de este tipo de conocimiento, sin advertir que se puede ser un gran matemático y un perfecto energúmeno totalmente inútil para el conjunto de la sociedad si no existe un fino equilibrio entre la *persona* –la sicología profunda–, el *individuo* –la forma peculiar en que esa persona exterioriza su yo– y el *ciudadano* cómo esa criatura se relaciona con el entorno social.

Hay una altísima probabilidad de que un niño formado dentro de estas coordenadas luego se convierta en lo que en lengua burguesa se llama un *ciudadano de provecho*. Alguien que crea riquezas, trabaja con tesón, cumple con las leyes, cuida de sí mismo y de su familia, mientras acopia recursos para los años de la vejez y la indefensión. Es decir, alguien que no espera mucho del Estado, porque la mayor parte de lo que la sociedad le podía otorgar ya se lo dio en los primeros años de su vida, en la etapa de la formación del carácter precisamente cuando más lo necesitaba. De los dieciocho en adelante le tocará a él comenzar a devolver lo que le entregaron. Tan simple, llano y justo como eso.

Abril de 1995

(Textos distribuidos en forma de artículos por FIRMAS Press)

XIV

PROGRESO Y CONSTITUCIONALISMO: NACIDOS EL UNO PARA EL OTRO¹

Una de las más recurrentes bromas de Borges consistía en afirmar que “*esta época –como todas– es de crisis*”, y luego seguía con su habitual humor ironizando sobre cualquier aspecto de nuestro tiempo. Sin embargo, no mentía el gran escritor argentino: todas las épocas son convulsas, conflictivas, tensas. Es posible que luego los historiadores nos hablen de los siglos de *pax romana* o de los trescientos años de estabilidad colonial en Hispanoamérica, pero la percepción de las personas que vivieron en esos períodos era diferente. Los que vivieron allí y entonces no se consideraban los dichosos habitantes de una plácida civilización o los cómodos pasajeros de un tiempo que transcurría sin sobresaltos. Ellos, como nosotros hoy, se sentían prisioneros de innumerables problemas, y vivían sujetos a toda clase de presiones emocionales, convencidos de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y de que hubo una época remota en la que los hombres y las mujeres eran más felices, decentes y solidarios.

El paraíso perdido

Esta conformidad es tal vez la constante histórica más tenaz de que tengamos noticias. Siempre hubo una etapa venturosa en el pasado. Siempre hubo una edad de oro, sosegada y cálida, como si el paraíso perdido de casi todas las teogonías formara parte de nuestro inconsciente colectivo, por citar el hoy muy devaluado concepto que en su tiempo acuñara el famoso doctor Jung.

¿Por qué esas frecuentes visitas a Utopía? Tal vez para escapar de los inevitables conflictos cotidianos. Probablemente, también, para enfrentarnos a la crisis perenne armados de cierta rebeldía intelectual. En todo caso, he preferido dar este rodeo para comenzar con algún realismo el análisis al tema propuesto por los organizadores de esta conferencia.

Se me ha pedido que reflexione sobre los grandes retos y los enormes problemas que acosan a América Latina a pocos años del siglo XXI, y me ha parecido prudente coincidir con Borges y

¹ Conferencia pronunciada en Lima el 22 de junio de 1995, bajo los auspicios del *Instituto del Ciudadano* y de la *Fundación Friedrich Naumann*.

evocar su melancólica observación ("*esta época, que –como todas– es de crisis*") para restarle dramatismo a nuestras palabras, diagnósticos y propuestas. Los problemas, como la materia, no se destruyen nunca, sino se transforman. Se convierten en otros problemas. Se sustituyen por otros conflictos, pues –acaso como afirmara George Simmel– los conflictos forman parte muy notable de la naturaleza humana, y de alguna paradójica manera contribuyen a la cohesión de los grupos, a la definición de la identidad y al mantenimiento de causas comunes que a veces resultan benéficas para el conjunto de la sociedad.

¿Dónde estamos?

¿Dónde está América Latina a cinco años apenas del siglo XXI? ¿Cuáles son sus retos más urgentes e inaplazables, y cómo establecemos las prioridades de una manera racional? ¿Con relación a qué países o conjunto de países juzgamos a la América Latina? Si la referencia fuera África, nuestro desempeño sería admirable, pero si aceptamos –como debiéramos– que los parámetros son Europa, o Euroamérica –incluidos Estados Unidos y Canadá–, porque a esa tradición pertenecemos, el panorama es muy diferente.

Demos por sentado, pues, que el contraste hay que establecerlo con las naciones del Primer Mundo, y desde esa perspectiva indagar en qué punto exacto estamos de nuestro desarrollo o subdesarrollo y cuáles son nuestros más urgentes problemas. Naturalmente, si esa pregunta se la hacemos al *Fondo Monetario Internacional* o al *Banco Mundial*, nos dirán, con cierta razón, que el principal problema de América Latina es la pobreza extrema de un porcentaje muy importante de sus habitantes, y a renglón seguido –sin faltar a la verdad– se nos advertirá que para corregir ese inmenso drama es fundamental pagar la deuda externa, recuperar el crédito, estabilizar la moneda, lograr el equilibrio fiscal, aumentar las exportaciones, impedir la inflación y eliminar las barreras arancelarias para abaratar el costo de la vida, mientras se aumenta la competitividad de las empresas y se logra que el mercado, con su mano invisible, vaya dibujando el perfil de aquellos nichos económicos en los que somos más eficientes.

Se ha vuelto, no hay duda, a la economía clásica, a la ortodoxia y a la sensatez, y no creo que casi nadie bien informado se atreva hoy a proponer nada diferente a las recetas mencionadas. Hasta Castro, que no cesa de despoticar contra el liberalismo, cada vez que toma una medida para paliar

el enorme desastre económico cubano, recurre a las recomendaciones “neoliberales” de sus archienemigos, sencillamente porque no hay otra forma de aliviar la crisis que producir más de lo que se gasta –verdad elemental increíblemente olvidada por casi una centuria–, y eso sólo se logra sujetándose a la disciplina económica convencional.

No obstante, todo eso, aun con ser terriblemente urgente, acaso sea superficial. Son problemas – qué duda cabe– que hay que resolver de inmediato, como ese masaje cardiaco que se le da al infeliz al que se le ha detenido el corazón, sabedores de que tal vez podamos devolverle provisionalmente la vida, pero convencidos de que no eliminamos la causa profunda del infarto.

Más aún: con mayor o menor esfuerzo, nosotros podemos lograr todas y cada una de las metas que nos impongan los sabios organismos internacionales, pero ¿son éstos, realmente, los problemas vitales de Hispanoamérica? ¿Son estos los males más profundos y dañinos, o acaso estamos confundiendo los problemas con las consecuencias? ¿No ha habido en casi todos los países de América Latina épocas en las que la moneda era estable, el presupuesto balanceado y el crecimiento sostenido? ¿No creció América Latina entre 1950 y 1980 un promedio del 5% anual? ¿No había entonces problemas? ¿No fue formidable la Argentina del primer cuarto de siglo? ¿No crecieron admirablemente el México de Porfirio Díaz, la Nicaragua de Somoza, o el Uruguay y el Perú de los quietos y dorados años cincuenta?

¿No será –tal vez– que los problemas económicos son, en esencia, la expresión de un gravísimo problema político mucho más difícil de detectar y –por lo tanto– de solucionar? ¿No sucederá que cuando atacamos los problemas económicos, aislándolos de su raíz política, olvidando sus verdaderos orígenes, no hacemos otra cosa que podar las ramas de un tronco enfermo que volverá a parir sus frutos desvitalizados en la próxima y fatal primavera? ¿No nos damos cuenta de que todas las transacciones económicas que realizamos parten de los valores, creencias, saberes y actitudes con que producimos o adquirimos bienes y servicios?

Intento establecer que solucionar los problemas coyunturales es indispensable, pero en algún momento hay que identificar e intentar resolver los problemas estructurales, los de fondo, y entre la docena de gravísimos asuntos que lastran nuestra economía a mí no se me ocurre ninguno más

urgente que el de la reconciliación entre nuestras sociedades y el modelo de estado democrático, liberal y constitucionalista que decimos defender desde principios del siglo XIX –el siglo, por cierto, de Rosas, de Rodríguez de Francia, de Santa Anna y de otros cien caudillos antidemocráticos–, pero que –en realidad– comenzamos a ignorar y desmentir casi desde el momento mismo del estreno de nuestras repúblicas. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que el modelo de estado existe y adopta un contorno característico en función de algo. Y ese algo puede ser la expansión territorial, la gloria del faraón, la conquista de la felicidad espiritual o la supervivencia del grupo como entidad aislada.

La idea del monarca soberano y de la aristocracia que le servía podía ser útil para organizar a una sociedad destinada a una vida uniforme y estática, dedicada a la guerra y a la oración, pero no se adecuaba a la dinámica fluidez de una sociedad que había convertido al progreso y al cambio en el eje y objetivo de sus actos. De ahí el paralelo surgimiento del constitucionalismo y de la idea del progreso. El progreso, la modernidad científica, creaba unas posibilidades de desarrollo individual que abatían las viejas barreras clasistas y daban lugar a un nuevo tipo de organización social que ignoraba las condiciones personales y colocaba la autoridad y el poder en reglas neutrales, libremente pactadas, de acatamiento universal y reformables mediante procedimientos democráticos. El complemento de la idea del progreso era el Estado de Derecho y viceversa.

Ya no se podía mandar por la gracia de Dios o por derechos de conquista. Surgían el autogobierno y el constitucionalismo como *forma*, y el objetivo del progreso y la creciente prosperidad como *fondo* o contenido. Las sociedades, *el pueblo*, como entonces se empezó a decir, se hicieron cargo de su propio destino, se dieron sus propias leyes, y allí donde se entendió a cabalidad el cambio político, este cambio trajo una inversión de la percepción entre los gobernantes y los gobernados. Al pasar la soberanía a los gobernados, los gobernantes se convirtieron en servidores públicos, dejaron de *mandar*, y comenzaron a *obedecer los* principios constitucionales y al cuerpo de leyes que iba acumulándose por la gestión de los parlamentos. Esta inversión de las relaciones de poder no ocurrió –lamentablemente– en América Latina. En América Latina los gobernantes nunca se convirtieron en servidores públicos. Nunca obedecieron ni han obedecido.

Tiempo y desarrollo

¿Significaba el constitucionalismo un simple modelo alternativo de gobierno, o había en la nueva forma de relación entre la sociedad y el poder un oculto vínculo con el capitalismo progresista que entonces se afianzaba? Por supuesto que sí lo había, pero no es hasta fechas muy recientes que esos lazos se han podido precisar.

Los economistas clásicos se referían a la creación de la riqueza como el resultado de una feliz combinación entre la tierra, el capital y el trabajo, dejando fuera una cuarta y hasta una quinta dimensión que condicionan y hacen posible el desarrollo sostenido.

Esa cuarta dimensión es el tiempo, y la quinta, muy vinculada a la anterior, es el marco jurídico. En la medida en que la civilización se hace más compleja, resulta más necesario poder proyectar los negocios a plazos cada vez más prolongados. Europa –por ejemplo– se propone colocar en el mercado una próxima generación de aviones de transporte en el año 2005. El horizonte nunca es la próxima cosecha, sino mucho más allá, a lustros de distancia, y hasta décadas, plazos que requieren una larga maduración de los ciclos de ahorro e inversión. Y para poder contar con ese tiempo, para hacer hipotecas a treinta años o cálculos actuariales serios, hay que saber, con toda certeza, cuáles son las reglas del juego, y estar decididos a respetarlas.

De ahí que no haya nada más contrario a la idea del progreso científico y material que las revoluciones y las rupturas del Estado de Derecho. Es posible, sí, que durante un período inicial se produzca alguna suerte de despegue económico, pero a corto o medio plazo deviene un grave retroceso y ese fatigoso “volver a empezar” con que periódicamente los pueblos que no han entendido el valor del constitucionalismo y del Estado de Derecho tienen que rehacer los cimientos de su civilización.

Sensu contrario, lo que en gran medida condiciona y explica la permanencia en el pelotón de avanzada de naciones como Inglaterra, Suiza o los Estados Unidos, es la estabilidad que proporcionan el Estado de Derecho y esa dimensión temporal segura y prolongada en que maduran las transacciones económicas en los países más desarrollados del globo terráqueo.

La tarea más urgente

Si este análisis es cierto –al margen de todos los compromisos coyunturales–, la más urgente tarea que tenemos que realizar consiste, precisamente en promover un cambio de actitudes con relación a nuestro modelo de Estado y, por consiguiente, con nuestros gobernantes. Tenemos que someternos todos al imperio de la ley, y quienes en primer lugar tienen la obligación de hacerlo son los funcionarios públicos, tanto los electos como los designados, puesto que unos y otros no se supone que hagan otra cosa que cumplir con las reglas.

¿Es algo utópico lo que estoy proponiendo? ¿Es una insensatez esperar que los latinoamericanos nos comportemos con arreglo a normas plasmadas en códigos y pongamos las leyes por encima de las personas? No lo sé. Sin embargo, sí sé que si no se produce ese cambio de comportamiento, nuestra incorporación plena a la civilización del progreso siempre será harto dudosa.

Pese a pasajeros espejismos, no puede haber desarrollo sostenido en países en los que el pueblo y una buena parte de la clase política aplaudan la promulgación o la derogación arbitraria de las leyes, la extinción de las instituciones y el fin del Estado de Derecho. Ahora bien: ¿cómo se logra ese cambio de mentalidad social? Ante nuestros frecuentes descalabros es muy difícil que gentes hambreadas y frustradas por mil contrariedades se detengan a pensar en remedios tan abstractos. La mayor parte de las personas lo que suele ver es la escasez, el hambre, el desempleo, la carestía de la vida, la falta de oportunidades. Un sector más pequeño e instruido acaso consigue hablar de inflación, balanza de pagos, debilidad del signo monetario o crisis bursátil, pero no creo que haya muchos latinoamericanos capaces de relacionar todas las anteriores desgracias con esa falta de adecuación que padecemos entre nuestro comportamiento cívico y el modelo de estado en que vivimos.

Constitucionalismo y desarrollo

Naturalmente, es lógico que el lector de estos papeles se haga ahora la inevitable pregunta que suscitan estas reflexiones: ¿puede ser tan simple eso de que el desarrollo de los pueblos dependa del constitucionalismo y de la sujeción de los ciudadanos al imperio de la ley? Si todos los latinoamericanos comenzáramos a tener un comportamiento cívico perfecto, los gobiernos obedecieran las leyes y la autoridad se transmitiera en intachables elecciones periódicas

¿lograríamos progresar y alcanzar el nivel de desarrollo de los países del Primer Mundo? Por supuesto que no. El constitucionalismo no garantiza la prosperidad, pero –sin embargo– la potencia, la permite y crea el espacio para que florezca nuestra inventiva y para que podamos fabricar bienes y servicios de acuerdo con nuestros valores, actitudes, creencias y conocimientos. Es un elemento que logra que el progreso se abra paso. Es algo así como la atmósfera en la que luego pueden realizarse las hazañas del desarrollo.

¿Cuánto retroceden los pueblos cada vez que se rompe el marco institucional? El caso de Rusia es pavoroso. Algo similar puede decirse del Panamá de Torrijos/Noriega, del Perú de Velasco Alvarado, de la Cuba de Castro, o de la Argentina del primer Perón. Cada sobresaltado gobierno que intenta encontrar un atajo hacia la prosperidad, lo que suele conseguir es un descalabro mayor al romper con brusquedad la legalidad y el orden económico vigentes.

Es importante, pues, que los latinoamericanos olvidemos las fantasías de las terceras vías, los caminos nuevos y esas constantes reivindicaciones de originalidad política y económica que tanto daño nos han hecho a lo largo de nuestra accidentada historia. No hay absolutamente nada erróneo o peyorativo en asumir íntegramente el modelo occidental caracterizado, en lo político, por el constitucionalismo, y en lo económico, por la supremacía del mercado y de la propiedad privada.

Lo que pretendo comunicar es obvio: no hay absolutamente nada impropio en reproducir las actuaciones de quienes han logrado triunfar. Pero en el caso latinoamericano esa imitación es aún más razonable y válida, puesto que nosotros somos, fundamentalmente, una expresión de ese Occidente que en un momento dado produjo tanto la idea del progreso como la del constitucionalismo. Nosotros somos los hijos de Jovellanos y de Feijóo, de Miranda y de Bello, de Sarmiento y de Lastarria, de Martí y de Justo Sierra, es decir, de espíritus absolutamente euroamericanos, totalmente occidentales, aunque a veces ni ellos mismos se dieran cuenta de la filiación cultural a la que pertenecían.

Llegar a esta convicción, y ver a América Latina como una porción eurooccidental es importante, en la medida en que eso nos reconcilia con nuestras raíces culturales y nos permite asumir como

nuestros –porque lo son– a Platón y a Aristóteles, a Horacio y a Virgilio, a Alfonso X, a Bacon, a Locke, a Montesquieu, a Adam Smith, a Rousseau, a Ortega o a los últimos premios Nobel de pensamiento liberal: Buchanan, Becker, Coase o Friedman. Nosotros formamos parte de un universo semita-greco-latino-anglo-germánico del que tomamos todas nuestras claves culturales, y al que es un despropósito renunciar, y mucho menos denunciar como exterminadores de las culturas indígenas americanas, especialmente si declaramos el deseo de convertir en nuestros objetivos fundamentales la búsqueda del progreso, la obtención de la prosperidad y el disfrute de las libertades democráticas. Ese, precisamente, es el gran legado de Occidente al mundo. Ese es nuestro patrimonio moral e intelectual. Y quizás, por no entenderlo del todo, a las puertas del siglo XXI exhibimos un desolador panorama. Eso es lo que hay que reparar.